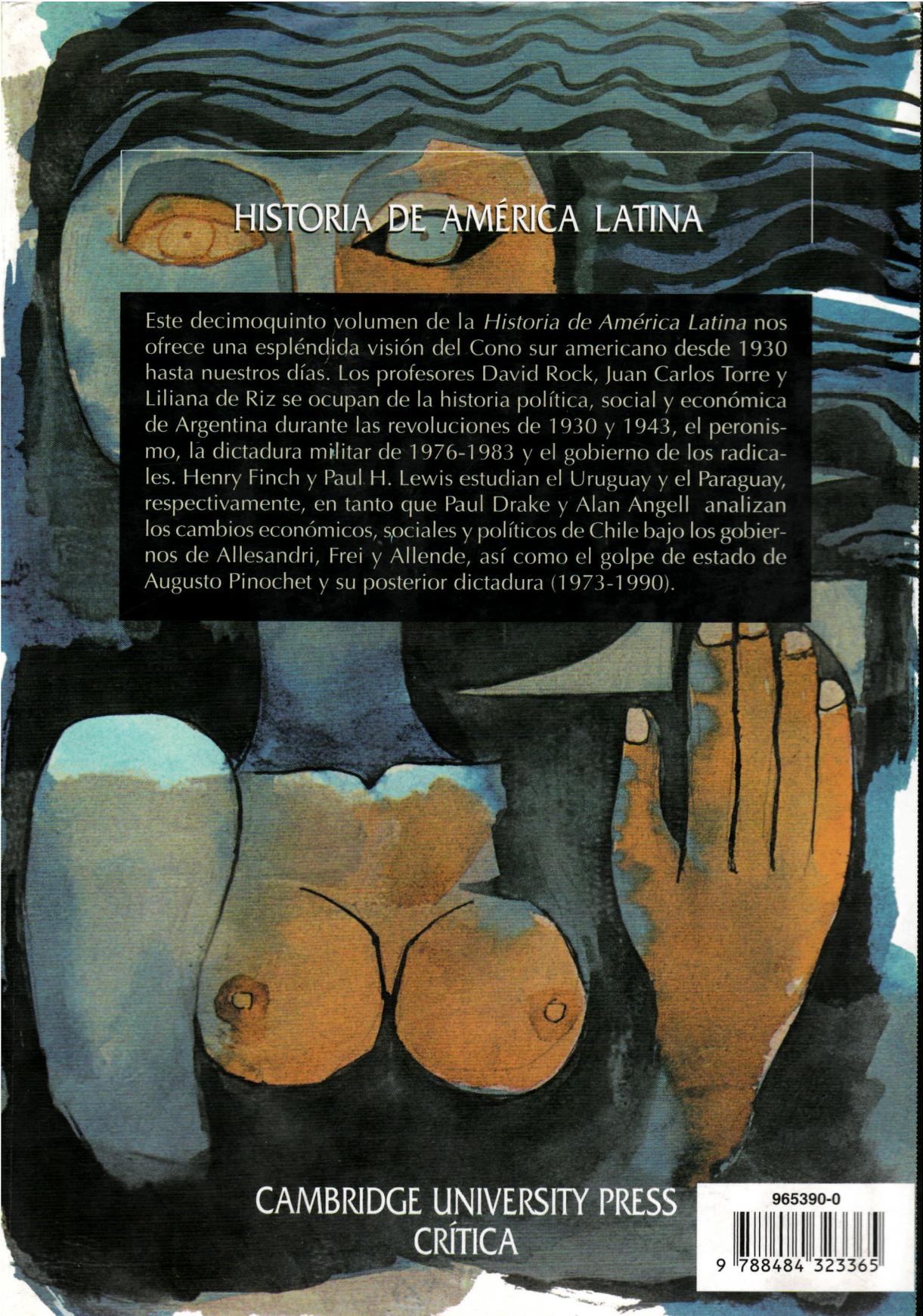


Leslie Bethell, ed.

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA

15. El Cono sur desde 1930

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
CRÍTICA

An abstract painting in shades of blue, black, and orange. The top half shows a face with wavy, dark hair. The bottom half shows a hand with fingers spread, and below it, a face with large, dark eyes. The overall style is expressive and somewhat somber.

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA

Este decimoquinto volumen de la *Historia de América Latina* nos ofrece una espléndida visión del Cono sur americano desde 1930 hasta nuestros días. Los profesores David Rock, Juan Carlos Torre y Liliana de Riz se ocupan de la historia política, social y económica de Argentina durante las revoluciones de 1930 y 1943, el peronismo, la dictadura militar de 1976-1983 y el gobierno de los radicales. Henry Finch y Paul H. Lewis estudian el Uruguay y el Paraguay, respectivamente, en tanto que Paul Drake y Alan Angell analizan los cambios económicos, sociales y políticos de Chile bajo los gobiernos de Allessandri, Frei y Allende, así como el golpe de estado de Augusto Pinochet y su posterior dictadura (1973-1990).

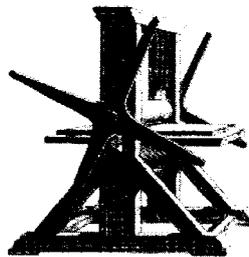
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
CRÍTICA

965390-0



9 788484 323365

HISTORIA DE AMÉRICA LATINA



SERIE MAYOR

Directores:

JOSEP FONTANA y GONZALO PONTÓN

Por

LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres; director del Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford.

DAVID ROCK, catedrático de Historia, Universidad de California en Santa Bárbara.

JUAN CARLOS TORRE, Instituto Torcuato di Tella de Buenos Aires.

LILIANA DE RIZ, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (*CEDES*) de Buenos Aires.

HENRY FINCH, *Senior Lecturer* en Historia económica y social, Universidad de Liverpool.

PAUL H. LEWIS, catedrático de Ciencias Políticas, Newcomb College, Tulane University.

PAUL DRAKE, catedrático de Ciencia Política e Historia, Universidad de California en San Diego.

ALAN ANGELL, *Lecturer* en Política Latinoamericana y *Fellow* de St. Antony's College (Oxford).

LESLIE BETHELL, ed.

HISTORIA
DE
AMÉRICA LATINA

15. EL CONO SUR DESDE 1930

CRÍTICA
BARCELONA

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

Título original:
THE CAMBRIDGE HISTORY OF LATIN AMERICA
VIII. LATIN AMERICA SINCE 1930:
SPANISH SOUTH AMERICA
I. Argentina, Uruguay and Paraguay; II. Chile

Traducción castellana de
JORDI BELTRÁN

Diseño de la colección: Enric Satué
© 1991, Cambridge University Press, Cambridge.
© 2002 de la traducción castellana para España y América:
EDITORIAL CRÍTICA, S.L., Provença, 260, 08008, Barcelona

e-mail: editorial@ed-critica.es
<http://www.ed-critica.es>
ISBN: 84-7423-435-2 obra completa
ISBN: 84-8432-336-6
Depósito legal: B. 14.291-2002
Impreso en España
2002.— A&M Gràfic, Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona)

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo xv y comienzos del xvi, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del xviii y principios del xix.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto de siglo xix, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico, y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de forma predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el

crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior, exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y sobre todo política, de los distintos países latinoamericanos desde 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorensé» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y sendos capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití.

El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Los volúmenes undécimo y duodécimo versan sobre economía, política y sociedad desde 1930. El volumen undécimo, Economía y sociedad desde 1930, comprende seis capítulos. Los tres primeros examinan las economías latinoamericanas durante la década de 1930, tras la depresión de 1929, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y durante la nueva «edad de oro» de crecimiento económico (1950-1980), impulsada esta vez principalmente por la ISI (industrialización de sustitución de importaciones) y a la que, no obstante, siguió la llamada «década perdida» de 1980. El cuarto aborda el cambio demográfico durante el período 1930-1990, en que la población de América Latina se cuadruplicó (de 110 a 450 millones). El quinto capítulo analiza la rápida urbanización de América Latina (menos del 20 por 100 de su población estaba clasificada como urbana en 1930; en 1990, casi el 70 por 100) y el cambio social urbano, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La transformación de las estructuras agrarias es el tema del sexto capítulo.

El volumen duodécimo, Política y sociedad desde 1930, consta de cinco capítulos. El primer capítulo estudia el avance, y también los retrocesos, de la democracia en América Latina, principalmente en Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Venezuela, y, en menor grado, en Argentina, Brasil y Perú. Los éxitos y fracasos de la izquierda latinoamericana, la democrática y la no democrática, son material del segundo capítulo. El tercer capítulo se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero urbano, subrayando su papel en la política. El cuarto capítulo explica la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes. El quinto se ocupa de los militares en la política latinoamericana: sus intervenciones y los golpes de Estado, así como los regímenes militares y los problemas de la transición al gobierno civil.

El volumen decimotercero es el primero de una serie de cuatro volúmenes dedicados a la historia de los países hispanoamericanos desde 1930. La primera parte contiene dos capítulos sobre México: el primero examina el rumbo de la revolución durante los años treinta, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el impacto de la segunda guerra mundial en México y el carácter de la subsiguiente coyuntura de posguerra; el segundo analiza el período iniciado en 1946, y destaca en especial el crecimiento económico (hasta la década de 1980), el cambio social y la estabilidad política. La segunda parte, dedicada a los países del Caribe, contiene dos capítulos sobre Cuba: el primero sobre el período que va de la dictadura de Machado a la de Batista, y el segundo sobre la revolución, y capítulos sobre la República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

El decimocuarto volumen se abre con una visión general del desarrollo económico y político de América Central desde los años treinta a los ochenta, a la que si-

guen capítulos separados sobre la historia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, desde 1930, un capítulo sobre la hazaña de Panamá desde su creación en 1903, y, finalmente, un capítulo sobre la historia de la zona del Canal de Panamá.

El volumen 15 está dedicado a los países del Cono sur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La primera parte consiste en dos capítulos sobre la historia política, social y económica de Argentina. El primero abarca el período comprendido entre el principio de la depresión de 1929 y la Revolución de 1930, por un lado, y la segunda guerra mundial, la Revolución de 1943 y el auge de Perón, por otro; el segundo abarca desde el decenio peronista (1946-1955) hasta la dictadura militar de 1976-1983, la transición a la democracia y el gobierno Alfonsín (1983-1989). Otros capítulos se dedican, respectivamente, a Uruguay y Paraguay. La segunda parte trata del cambio económico, social y político en Chile. Un capítulo destaca el funcionamiento de la democracia chilena desde el decenio de 1930 hasta el de 1950, especialmente bajo los gobiernos del frente popular; un segundo capítulo examina Chile bajo los gobiernos democráticos de la derecha (Alessandri), de centro (Frei) y de izquierda (Allende), entre 1958 y 1973, y bajo la dictadura militar del general Pinochet (1973-1990).

En el volumen 16 la primera parte abarca Perú y Bolivia. Hay dos capítulos sobre la economía, la sociedad y la política de Perú, primero en el período de 1930 a 1960, y en segundo lugar en los decenios de 1960 y 1970 (especialmente de 1968 a 1975, cuando Perú estaba en manos de militares reformistas) y en el decenio de 1980 bajo los gobiernos de Belaúnde Terry (1980-1985) y García (1985-1990). Sigue un capítulo sobre la economía, la sociedad y la política —y especialmente los problemas de la construcción de la nación— en Bolivia. La segunda parte empieza con dos capítulos sobre la historia económica, social y política de Colombia, el primero desde el período de 1930 a la violencia del decenio de 1950, el segundo desde el histórico acuerdo de 1958 para compartir el poder entre liberales y conservadores y la convivencia del decenio de 1960 y principios del de 1970, hasta la violencia y el desafío que para las instituciones democráticas plantearon los guerrilleros y, sobre todo, los narcotraficantes, en el decenio de 1980. Siguen a estos capítulos otros que tratan, respectivamente, de Ecuador y de la economía, la sociedad y la política —especialmente la política democrática desde 1958— de Venezuela.

Muchos de los colaboradores de los volúmenes 15 y 16 comentaron los capítulos de sus colegas. En este sentido, estoy especialmente agradecido a Christopher Abel, Alan Angell, Paul Drake y Laurence Whitehead. Malcolm Deas, Peter Klarén, Andrew Nickson y James Painter también aportaron valoraciones críticas de uno o más de estos capítulos. Quisiera dar las gracias a Malcolm Deas en particular por la ayuda y el aliento que ha ofrecido generosamente desde el comienzo de este proyecto. James Dunkerley accedió a servir como ayudante de edición tanto para el volumen VII como para el VIII de la Cambridge History of Latin America (es decir, los volúmenes 13-16 de la Historia de América Latina). Sus consejos y su apoyo, así como sus habilidades como editor, resultaron valiosísimos en la preparación definitiva de estos volúmenes para su publicación.

Una vez más, debo expresar mi gratitud a Josep Fontana y a Gonzalo Pontón por su interés y dedicación en la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL
Oxford, marzo de 2002

PRIMERA PARTE

ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY



Argentina, Uruguay y Paraguay

Capítulo 1

ARGENTINA, 1930-1946

El año 1930 abre la puerta que da paso a la Argentina moderna. El golpe militar de septiembre de 1930 provocó el derrumbamiento del gobierno constitucional y dio comienzo a la larga serie de democracias débiles, interrumpidas por golpes de Estado y dictaduras militares, que fue el rasgo cardinal de la política argentina hasta bien entrado el decenio de 1980. La caída en la depresión en 1930 cambió de manera permanente el camino del desarrollo económico. Hasta entonces Argentina había subsistido como dependencia extraoficial de Gran Bretaña, a la que abastecía de carne y cereales a la vez que era el principal mercado del carbón y las manufacturas británicas y, al menos hasta 1914, las exportaciones de capital de la misma procedencia. A partir de 1930 la estructura victoriana, que ya soportaba una presión creciente desde el estallido de la primera guerra mundial, empezó a tambalearse. La depresión causó un descenso de las exportaciones agrarias y una expansión de las manufacturas, lo cual perjudicó la estabilidad de la relación anglo-argentina al transformar los componentes de la economía argentina. De modo paralelo a los cambios económicos tuvo lugar un cambio social de igual magnitud y con las mismas consecuencias duraderas. La población argentina aumentó de 11,8 millones en 1930 a 15,3 millones en 1946, pero la tasa de crecimiento descendió. La disminución de las tasas de crecimiento fue consecuencia de un descenso considerable de la tasa de natalidad, de 31,5 por mil en 1920 a 24,7 por mil en 1935, por culpa, según la gente de la época, de la depresión. (En cambio, las tasas de mortalidad sólo descendieron ligeramente, de 14,7 por mil en 1920 a 12,5 por mil en 1935.) La disminución del crecimiento demográfico se debió también al fin de la inmigración en masa de europeos. Los hombres nacidos en el extranjero todavía representaban el 40 por ciento de la población masculina en 1930, pero sólo el 26 por ciento en 1946. Ya no eran inmigrantes españoles e italianos sino inmigrantes internos quienes alimentaban la expansión continua de Buenos Aires al acelerarse en gran medida la migración del campo y las provincias durante los decenios de 1930 y 1940.

En el año 1930 también se registró una aceleración de un profundo cambio ideológico —la decadencia del liberalismo y la ascensión del nacionalismo— que más adelante daría color en la textura de la política argentina. Las primeras señales de una conciencia nacionalista aparecieron antes de 1930 entre algunos sectores de la intelectualidad. Pero después de 1930 el nacionalismo se convirtió en un movimien-

to político que complementaba e intensificaba los otros cambios que tenían lugar en el gobierno y las instituciones, la economía y la sociedad y formaba parte de un proceso de cambios complejos que se reforzaban mutuamente. En el decenio de 1930 los ecos del pasado se mezclaban con los precursores del futuro. En septiembre de 1930 cayó la «democracia» y volvió la «oligarquía», que al principio se sostuvo por medio del ejército y luego, durante un decenio o más, del fraude electoral. La reaparición de la oligarquía conservadora en el decenio de 1930 significó una regresión al sistema político que había predominado antes de la reforma electoral de 1912 y la victoria de los radicales en 1916, toda vez que los sucesivos gobiernos excluyeron de las actividades políticas a gran parte de la población que tenía derecho a participar en ellas. Pero, como en 1900-1912, en el decenio de 1930 se produjo una lenta liberalización, y a principios de 1940, bajo el presidente Roberto María Ortiz, la política parecía a punto de entrar de nuevo en la fase democrática que empezó en 1912. Otros aspectos del decenio de 1930 también recordaban el pasado. En el centro de la política económica conservadora durante la depresión estuvo el tratado Roca-Runciman de 1933, que fue un intento de proteger los históricos vínculos comerciales y financieros con Gran Bretaña que la oligarquía del siglo XIX había creado. En otros sentidos, sin embargo, las respuestas conservadoras a la depresión pronto se extendieron en direcciones innovadoras. Empezando por el Banco Central en 1935, se fundaron nuevas instituciones cuyo cometido sería dirigir la economía, al tiempo que palabras y expresiones como «devaluación», «control de cambios» y «financiación mediante déficit» entraron en el léxico de los encargados de formular la política económica, donde han permanecido desde entonces.

El régimen conservador hizo frente a la depresión con notable éxito. La recuperación empezó ya en 1934, y a finales del decenio Argentina había recobrado la prosperidad de los años veinte. Sin embargo, el período de dominio de la oligarquía fue más breve que el de los radicales que lo había precedido (1916-1930), puesto que en los primeros años cuarenta aparecieron nuevas fuerzas políticas que lo desbancaron rápidamente. El derrumbamiento del conservadurismo en junio de 1943, a raíz de un segundo golpe militar, fue en parte resultado de la segunda guerra mundial, que después de 1939 provocó una crisis de las relaciones internacionales y la política económica. A mediados de 1940, mientras la Alemania nazi invadía Francia y Bélgica, los intentos conservadores de revitalizar los antiguos vínculos con Europa terminaron en un súbito fracaso. Ante la rápida caída del comercio exterior, los líderes conservadores hicieron esfuerzos vigorosos por crear una relación nueva pero esencialmente parecida con Estados Unidos. Sin embargo, al negociar un tratado con Estados Unidos en 1940-1941 Argentina no logró alcanzar su objetivo principal: la apertura del mercado norteamericano a sus exportaciones de carne y cereales.

Las circunstancias internas también condicionaron fuertemente el cambio político. Después de 1940 el sector rural experimentó un cambio importante al pasar de la agricultura a la ganadería, dado que el ganado bovino y los cerdos ocuparon gran parte de la tierra donde los arrendatarios cultivaban antes sus cosechas y los peones estacionales recolectaban los cereales. La industria, mientras tanto, estaba en expansión y atraía a la población desplazada del campo a las ciudades. Al finalizar la guerra la migración interna ya había empezado a cambiar radicalmente la distribución física y las ocupaciones de una parte importante de la población. Estos cambios contribuyeron a debilitar la base política del conservadurismo porque

redujeron la dominación de los productores agrarios al tiempo que intensificaban el peso de sectores que dependían de las manufacturas urbanas o veían éstas con simpatía.

Si la reducción de gastos y la recuperación se convirtieron en la tónica del decenio de 1930, la revolución estuvo a la orden del día en los primeros años cuarenta. En 1942 el régimen conservador de Ramón S. Castillo, que había dado marcha atrás a los intentos de liberalización de Ortiz, se hallaba dividido y a la deriva. En el extranjero se encontraba ante la creciente oposición de Estados Unidos a su política de neutralidad en la guerra y a su resistencia a ingresar en la alianza panamericana, posturas que había adoptado, al menos en parte, en respuesta a la poca disposición norteamericana a cooperar en el comercio. En el interior el gobierno tenía que hacer frente a una oposición parecida por parte de diversos grupos de intereses y organizaciones políticas, algunas de ellas antiguas partidarias de los conservadores. Pero el desafío más serio procedía de los nacionalistas de la ultraderecha, que se hallaban agrupados en diversas facciones y recibían poco apoyo popular pero iban afianzándose cada vez más en el ejército. El golpe militar de junio de 1943 desencadenó la Revolución Nacionalista, que se comprometió a destruir todos los lazos «imperialistas», a llevar a cabo la expansión industrial patrocinada por el estado y encabezada por una nueva industria de armamentos y a instaurar un sistema político autoritario que extirpara el «comunismo» y el «liberalismo». Dirigida por los nacionalistas, Argentina emprendió una reforma radical y un profundo cambio político. Sin embargo, la dictadura militar corporativista que pretendían crear los nacionalistas de 1943 no llegó a materializarse. En cambio, 1943-1946 fue el período del ascenso de Juan Perón, que culminó con su elección como presidente. Con el respaldo de un movimiento de masas obreras recién creado, los peronistas llegaron al poder con un programa de industrialización y reforma social. La victoria de Perón en 1946 y el triunfo del «populismo nacional» se convirtieron así en la principal consecuencia de la guerra, y el propio Perón, paladín de la «soberanía económica» y la «justicia social» y enemigo de la «oligarquía», el «colonialismo» y el «comunismo», encarnó la transición ideológica de los primeros años cuarenta.

LA POLÍTICA BAJO URIBURU Y JUSTO, 1930-1938

La revolución de septiembre de 1930 fue fruto de las profundas animosidades personales que Hipólito Yrigoyen, presidente de la república de 1916 a 1922 y de nuevo a partir de 1928, despertaba en los conservadores. En 1930 eran pocos los conservadores que se oponían a la «democracia» como sistema político. Seguía preocupándoles más la forma en que había funcionado la democracia bajo los radicales. Analizaban la política en categorías aristotélicas: bajo Yrigoyen la «democracia» se había deslizado hacia la «demagogia» y la «tiranía»; la venalidad de los caciques y los comités del partido yrigoyenista había asfixiado la misión de la democracia, que era alcanzar la «verdadera representación». Detrás de estas percepciones había mucho esnobismo patricio. «Camarillas obsequiosas» y un «abyecto círculo de aduladores ineptos» habían dominado y finalmente destruido el régimen de Yrigoyen. El propio presidente caído era de «baja estofa», hijo ilegítimo de un «vasco desconocido», que mucho tiempo atrás emprendió su carrera política en los garitos y las galleiras del distrito bonaerense de Balvanera, donde en el decenio de 1870 había sido jefe

de policía. Los cómplices de Yrigoyen eran hombres como él mismo, una «ralea a la caza de beneficios y de enriquecimiento propio» y responsable del otro gran fallo de la democracia, su «avasallamiento de las jerarquías siguiendo los caprichos de la chusma». ¹ En 1937, durante su campaña para alcanzar la presidencia, Roberto María Ortiz declaró que la revolución de 1930 había «puesto fin a un sistema de desgobierno que substituía el imperio de la ley por el capricho arbitrario de un demagogo que supeditaba el interés general de la nación a apetitos desordenados estimulados por la presión de lo más bajo de las masas». ²

Los conservadores odiaban a Yrigoyen desde hacía mucho tiempo. Habían hecho todo lo posible por acabar con su reputación antes de las elecciones de 1928, y poco después de éstas empezaron a conspirar para derrocarlo. La oportunidad que esperaban llegó con la depresión. El yrigoyenismo estaba edificado sobre el patronazgo y su solidez dependía del flujo de gastos del estado. Controlar a la clase media de esta manera daba buenos resultados durante los períodos de expansión económica, tales como 1928 y la mayor parte de 1929, cuando los ingresos iban en aumento. Pero fracasaba en seguida en tiempos de crisis económica, como la que empezó a finales de 1929. En ese momento Yrigoyen fue víctima de una pugna por los recursos, que disminuían rápidamente, entre los intereses exportadores y poseedores de propiedades, la mayoría de ellos conservadores, y la clase media urbana, que era principalmente radical. Al sobrevenir la depresión, los primeros exigieron que se hicieran recortes drásticos en los gastos públicos para reducir la presión que soportaban el crédito y los tipos de interés y permitir a los bancos responder con mayor eficacia a los terratenientes y comerciantes en apuros. La clase media reaccionó exigiendo que se aumentara todavía más el gasto público con el fin de proteger el empleo y detener la caída de los ingresos urbanos. En 1930 el gobierno hizo esfuerzos desesperados por superar estas presiones encontradas. Finalmente empezó a reducir el gasto, pero no con la rapidez suficiente según los conservadores y demasiado rápidamente en opinión de los radicales. Así, al tiempo que se intensificaba la oposición de los intereses terratenientes y comerciales también se desintegraba el apoyo popular a Yrigoyen.

Los apologistas del golpe de 1930 solían presentar al ejército como sencillamente el instrumento de la voluntad popular, que actuaba en nombre del pueblo: la revolución, según declaró Carlos Ibarguren, «fue el ejército hecho pueblo, y el pueblo hecho ejército». ³ Como recordaría Felix Weil:

Nadie ... movió un dedo en defensa del gobierno legal. Los trabajadores se mostraron indiferentes, apáticos, no se convocó ninguna huelga, no se organizó ninguna manifestación, no se cerró ninguna fábrica ni taller ... Con tantos empleados del gobierno, especialmente policías y militares, sin cobrar desde hacía algún tiempo, a la burocracia militar y civil no le importó que se cambiara el gobierno viciado legal pero insolvente de un reformador senil, fantasioso e insincero por el gobierno de un general del que podía esperarse que contara con el favor de los bancos, pagase los salarios puntualmente y recompensara con generosidad a sus seguidores. ⁴

1. Véase Carlos Ibarguren, *La historia que he vivido*, Buenos Aires, 1955, pp. 318, 368, 400, 428.

2. Citado en Felix Weil, *Argentine Riddle*, Nueva York, 1944, p. 63.

3. Ibarguren, *op. cit.*, p. 380.

4. Weil, *op. cit.*, p. 39.

En este ambiente fue fácil preparar un golpe con una organización notablemente escasa y con un mínimo de fuerza militar. El golpe del 6 de septiembre de 1930 fue una acción casi exclusivamente militar. El general José Félix Uriburu, su líder, que había participado en la insurrección fracasada contra Juárez Celman en julio de 1890, prohibió explícitamente la participación de civiles alegando que éstos habían sido la causa de la derrota cuarenta años antes. Los líderes de la ultraconservadora Liga Republicana, cuyos miembros habían combatido esporádicamente a los yrigoyenistas en las calles durante el año anterior, instaron a Uriburu a organizar la revolución, pero no desempeñaron ningún papel activo en el levantamiento propiamente dicho. Por tanto, la función de los civiles consistió en preparar el terreno para el golpe por medio de manifestaciones callejeras, discursos incendiarios y un ataque masivo por parte de la prensa de la oposición durante las semanas que lo precedieron.

La revolución propiamente dicha fue poco más que la marcha de unos cuantos centenares de cadetes desde la guarnición militar de Campo de Mayo hasta la Casa Rosada, la sede del gobierno, en el centro de Buenos Aires, de la cual tomaron posesión. Uriburu no había hecho ningún esfuerzo por organizar movimientos en las provincias ni por trazar planes detallados para apoderarse de centros de comunicaciones e instalaciones importantes. Los preparativos complejos resultaron de todo punto innecesarios. El propio Yrigoyen, que se había enterado de la insurrección, huyó a La Plata. Cuando las tropas que se encontraban allí le negaron su apoyo dimitió y fue detenido. Al entrar en el centro de Buenos Aires, los cadetes encontraron resistencia por parte de unos cuantos francotiradores, la mayoría de los cuales disparaban desde la azotea del edificio del Congreso, y los intercambios de disparos causaron algunas bajas en ambos bandos. Pero esta oposición fue dominada rápidamente y los cadetes siguieron bajando por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Allí el vicepresidente, Enrique Martínez, intentó negociar con los rebeldes, pero fracasó y también dimitió.

Después de hacerse con el poder, los revolucionarios proclamaron un gobierno provisional encabezado por Uriburu. El nuevo régimen consistía casi enteramente en civiles, la mayoría de ellos conservadores de cierta edad que habían ocupado cargos gubernamentales por última vez antes de 1916 bajo Roque Sáenz Peña o su sucesor, Victorino de la Plaza. El gobierno provisional empezó inmediatamente a expulsar a los radicales de la administración, los gobiernos provinciales y las universidades, pero pronto resultó obvio que el nuevo régimen estaba claramente dividido en dos facciones y que la oposición a los yrigoyenistas era lo único que lo unía. El propio Uriburu capitaneaba la primera de las facciones, apoyado por Matías Sánchez Sorondo, el ministro del Interior, y por Carlos Ibaguren, que se convirtió en interventor de Córdoba. A ojos de mucha gente, la facción de Uriburu comprendía los «fascistas» de Argentina, es decir, los elementos empeñados en imponer un sistema como el de Mussolini. Uriburu no sólo persiguió a los radicales, sino que también fusiló fríamente a un par de anarquistas declarados culpables de sabotaje. Alentó la formación de la Legión Cívica Argentina, cuyos miembros llevaban uniformes de estilo fascista y adoptaron el saludo de éstos.

Sin embargo, Uriburu rechazó una y otra vez la etiqueta de fascista y el fascismo como «doctrina extranjera» que era «inapropiada» para Argentina. En su lugar, aspiraba a una «democracia verdadera», sin los caciques y los comités yrigoyenistas. De hecho, esta aspiración parecía hacer de Uriburu no un fascista sino un liberal, porque la «democracia», como decía una crítica derechista, le identificaba con «el lenguaje

y las ideas de la Revolución Francesa», el fundamento del liberalismo moderno.⁵ En realidad, ni el fascismo ni el liberalismo eran la principal inspiración de las ideas políticas de Uruburu, sino que éstas eran fruto del escolasticismo; su concepción de la democracia estaba más cerca de la idea que de ella se tenía en la antigua Grecia que de su versión moderna en Norteamérica o la Europa occidental. Los fundamentos escolásticos de las ideas de Uruburu aparecían con la máxima claridad en un manifiesto que publicó en febrero de 1932 y que, según dijo, era «la doctrina de la Revolución de Septiembre». Este documento —que se prestaba mucho a la ironía en vista de la conducta de Uruburu como presidente— se hacía eco de preceptos de san Agustín, santo Tomás de Aquino y sus sucesores:

La razón de la existencia de la autoridad suprema ... es ... la consecución del bienestar colectivo ... Cualquier gobierno que no acierte a trabajar con este fin, ya sea por abusar de su autoridad o por abdicar de sus responsabilidades, es un gobierno tiránico ... El gobierno tiránico es un gobierno sedicioso porque al sacrificar el bien común compromete la unidad y la tranquilidad de la sociedad, que existe por la sencilla razón de asegurar el bienestar de sus miembros ... Y todo gobierno sedicioso deja, por definición, de ser un gobierno, de tal modo que una revolución organizada que lo derroque mediante un acto de fuerza es totalmente legítima mientras su objetivo sea restaurar el bienestar colectivo.⁶

Para Uruburu el propósito de la revolución era establecer un mejor sistema de representación y evitar así la tiranía de una «minoría mística» como los caciques yrigoyenistas, de manera que «representantes auténticos de intereses sociales reales puedan actuar dentro del estado ... e impedir que el profesionalismo electoral monopolice el gobierno y se imponga entre el gobierno y las fuerzas vivas».⁷ Inspirándose en la teoría corporativista de la época, Uruburu, por tanto, sugirió que en el Congreso estuvieran representados los gremios y no los partidos. Él y sus seguidores calificaban esta idea de nacionalismo, ya que, según afirmaban, unificaría y armonizaría las partes constituyentes de la nación. Así pues, los uriburistas hicieron campaña a favor de la reforma constitucional y se concentraron en cambiar el Artículo 37 de la Constitución de 1853: la composición y las funciones de la Cámara de Diputados. Uruburu parecía dispuesto a convocar elecciones y retirarse una vez hubiera llevado a cabo esta reforma. Al menos durante un tiempo albergó la esperanza de transmitir la presidencia no a un fascista sino a Lisandro de la Torre, veterano liberal-conservador que había sido uno de sus camaradas durante la revolución de 1890 y era su amigo desde entonces.

Uruburu no logró poner en práctica la reforma constitucional ni preparar su propia sucesión. Sus partidarios eran principalmente abogados y académicos conservadores. Sin embargo, la mayoría del ejército y las fuerzas vivas, los grandes estancieros y comerciantes que dominaban la economía y constituían la principal base civil para la revolución, apoyaban la segunda facción del gobierno provisional. Acaudillada por el general Agustín Pedro Justo, esta facción pretendía crear un partido con-

5. Véase Comisión de Estudios de la Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, *El nacionalismo: Una incógnita en constante evolución*, Buenos Aires, 1970, p. 29.

6. *Crisol*, 14 de febrero de 1932.

7. Citado en Carlos Ibarguren hijo, *Roberto de Laferrère (periodismo-política-historia)*, Buenos Aires, 1970, p. 32.

servador popular del tipo que Sáenz Peña había concebido en 1912 y que impediría que los yrigoyenistas recobrasen el poder. Sus miembros querían una política económica conservadora que protegiese la economía basada en la exportación y defendiera los vínculos con Gran Bretaña y la Europa occidental. Así pues, la etiqueta que mejor cuadra a la facción es la de «liberal-conservadora», y la facción difería de los nacionalistas capitaneados por Uriburu en que se oponía a la reforma constitucional y a la representación corporativa, que, al igual que los otros adversarios de Uriburu, veía como potencialmente fascista. En esencia la disputa entre «liberales» y «nacionalistas» tenía que ver con la estructura del estado. Los primeros se oponían al tipo de estado mediador situado por encima de la sociedad que proponían los teóricos corporativistas. Querían el gobierno de una clase, el gobierno controlado por ellos mismos: los principales intereses productores y comerciales.

El momento crítico de la pugna entre las dos facciones llegó en abril de 1931 cuando Sánchez Sorondo, como ministro del Interior, convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires con la intención de utilizarlas para demostrar el apoyo popular a Uriburu y reforzar a éste contra Justo. El plan falló por completo cuando las elecciones dieron una victoria amplia y del todo imprevista a los radicales que los observadores atribuyeron en parte a un reciente y desacertado incremento del precio de los sellos de correos. A partir de este momento, mientras la posición de Uriburu se desmoronaba, el grupo de Justo controló el gobierno provisional, que fijó la fecha de las elecciones presidenciales para noviembre de 1931, y el papel de Uriburu quedó reducido a poco más que a tener a los radicales a raya. Después de derrotar una revuelta radical en julio de 1931, el presidente detuvo a la mayoría de los radicales más destacados y en septiembre prohibió que sus candidatos concurriesen a las elecciones de noviembre.

De esta manera Justo logró abrirse paso hasta la presidencia. En noviembre de 1931, habiendo mantenido cuidadosamente su prestigio en el ejército y entre las fuerzas vivas, encabezó la recién formada «Concordancia», que era una coalición de partidos con tres ramas principales: los antiguos conservadores, que ahora se llamaban Demócratas Nacionales, aunque eran en su mayor parte oligarcas regionales; los Radicales Antipersonalistas, que se habían escindido de Yrigoyen en 1924, y los Socialistas Independientes, que se habían separado del Partido Socialista en 1927. Los únicos adversarios de Justo en noviembre de 1931 eran una coalición del Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre y los socialistas ortodoxos de Nicolás Repetto. De un electorado de 2,1 millones de personas, votaron 1,5 millones. El total de votos que obtuvo la Concordancia fue de un poco más de 900.000, y el de la alianza de los demócratas progresistas y los socialistas de un poco menos de 500.000. Tres meses más tarde, en febrero de 1932, Justo asumía la presidencia y Uriburu partía con destino a Europa, donde murió, víctima del cáncer, al cabo de poco tiempo.

Las elecciones de 1931 devolvieron la presidencia a los mismos intereses, en particular los terratenientes y exportadores de las pampas, que controlaban el gobierno antes de 1916. Justo había adquirido el poder gracias al respaldo del ejército y de las fuerzas vivas y a la proscripción de los radicales. Hubo mucho fraude electoral. Inmediatamente después de los comicios, De la Torre, Repetto y los radicales dieron detalles de casos de fraude descarado en todo el país. En algunos sitios la policía había robado las papeletas a los votantes de la oposición que hacían cola para depositarlas en las urnas; se demostró que las fichas de los que habían votado conte-

nían muchas firmas falsificadas, lo cual significaba que entre los supuestos votantes de la Concordancia había muchas personas que en realidad no habían votado. Los partidarios de la oposición habían visto algunos sellos y precintos falsificados en las urnas, lo cual sugería que o bien dichas urnas eran falsas o las habían abierto antes del recuento oficial, para comprobar y hacer los «ajustes» necesarios para asegurarse de que su contenido diera los resultados deseados. En numerosos casos se habían usado papeletas falsificadas y en todavía más casos habían votado los muertos.

El fraude electoral, que había sido endémico hasta la ley de Sáenz Peña de 1912, no era ninguna novedad en Argentina. El fraude había persistido bajo los radicales, en particular en las zonas rurales, aunque normalmente se había practicado indirectamente, más por medio de la intimidación solapada que de la falsificación directa. Pero en el decenio de 1930, a partir de noviembre de 1931, el fraude volvió a ser común en la política y a veces los conservadores confesaban francamente que recurrían a él: era, según decían, un «fraude patriótico», una necesidad lamentable para tener a los radicales a raya. Ejemplos notorios fueron las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1935, en las cuales los partidarios de Manuel Fresco se aseguraron la victoria utilizando la fuerza para impedir que votasen los radicales, cambiando las urnas y substituyendo el voto verdadero por otro inventado en los clubes conservadores. En unas elecciones que hubo en Corrientes en 1938 votaron más hombres de los que constaban en el censo electoral; en Mendoza, en 1941, conservadores armados con fusiles vigilaban las cabinas de votación y observaban cada una de las papeletas que se depositaban. Entre las numerosas formas de soborno electoral durante este período, una de las más comunes consistía en ofrecer a los votantes sobres cerrados que contenían papeletas marcadas de antemano y que el votante introducía a escondidas en la cabina y utilizaba para votar. Para demostrar que había cumplido la misión, salía con la tarjeta y el sobre que le habían dado dentro; después de entregarlos, se le pagaban sus servicios. En el decenio de 1930 la ciudad de clase obrera de Avellaneda, justo en las afueras de la capital, tenía una de las peores reputaciones en lo que se refería a la corrupción política. Según se decía, allí, en lo que algunos llamaban el «Chicago argentino», los caciques políticos conservadores encabezados por Alberto Barceló estaban muy metidos en el juego, la prostitución y la extorsión, y parte de los beneficios que se obtenían de estos negocios se usaban para controlar las elecciones. Durante todo el decenio de 1920 los conservadores se habían quejado en repetidas ocasiones de los caciques, los comités y las técnicas de patronazgo corruptas que habían empleado los radicales. A pesar de ello, después de recuperar el poder en 1931, los propios conservadores se apresuraron a recurrir a versiones todavía más burdas de los mismos métodos.

Los tres partidos que formaban la Concordancia se fusionaron gradualmente y perdieron por completo su identidad propia. En 1934 el Partido Socialista Independiente y los antipersonalistas ya habían desaparecido; la función principal de ambos partidos había sido permitir que un reducido puñado de líderes políticos se pasara a los conservadores y tomara posesión de cargos bajo el gobierno de Justo. De los socialistas independientes, por ejemplo, procedía Federico Pinedo, dos veces ministro de Hacienda durante este período, que patrocinó varias de las principales reformas económicas de la Concordancia.⁸ Otro destacado socialista independiente era Antonio de Tomaso, hábil ministro de Agricultura, cuya carrera terminó al morir en 1934.

8. Véase abajo, pp. 17-18, 35-38.

Pero la mayoría de los líderes de la Concordancia eran antipersonalistas: el propio Justo; Roberto María Ortiz, que sucedió a Justo en la presidencia, y Leopoldo Melo, a quien Yrigoyen había derrotado en las elecciones de 1928 y que ahora servía en calidad de ministro del Interior en el gobierno de Justo. Durante todo el decenio de 1930 los conservadores de verdad fueron una minoría en el gobierno. El más prominente era Ramón S. Castillo, el último de los ministros de Justicia e Instrucción Pública de Justo. En 1938 Castillo se convirtió en vicepresidente de Ortiz y luego, en 1940, él mismo en presidente.

Así, las figuras más progresistas eran muy superiores en número a los reaccionarios en el gobierno, y aunque durante algún tiempo su preponderancia no contribuyó en nada a disminuir el fraude electoral, dio al régimen de Justo un carácter relativamente benévolo y tolerante que contrastaba mucho con el ambiente político represivo que existiera bajo Uriburu. Justo en persona dedicaba gran parte de su tiempo a mantener su posición en el ejército, procurando aislar a algunos uriburistas intransigentes capitaneados por el coronel Juan Bautista Molina que continuamente tramaban complots para derribar el gobierno. Durante todo el decenio de 1930 el ejército fue una fuerza política de importancia fundamental que Justo mantuvo firmemente controlada y fuera de la política mediante una hábil estrategia de nombramientos y ascensos.

Al tomar posesión de su cargo en 1932, Justo levantó el estado de sitio que estaba en vigor desde la revolución de 1930. Puso en libertad y amnistió a los presos políticos de Uriburu, entre ellos Hipólito Yrigoyen, que hasta su muerte, acaecida en julio de 1933, hizo débiles esfuerzos por reunir a sus partidarios para volver a la política. Justo rehabilitó a los profesores universitarios a los que Uriburu había expulsado porque eran radicales. Reprimió con dureza las actividades de la Legión Cívica, la organización paramilitar patrocinada por Uriburu. La Legión, ahora bajo el liderazgo del general retirado Emilio Kinkelín, tuvo poca importancia después de 1932, aunque se las arregló para sobrevivir hasta los primeros años cuarenta. La suerte de la Legión es un ejemplo de la habilidad con que Justo aisló y debilitó repetidamente a sus adversarios políticos. A medida que desmilitarizaba el régimen, Justo adoptó un nuevo estilo tecnocrático de gobierno que confiaba ciertos aspectos de la política a especialistas. El más famoso de estos especialistas era Raúl Prebisch, que se convirtió en miembro destacado del equipo encabezado por Pinedo que concibió y puso en práctica las importantes reformas económicas del decenio de 1930.

Justo experimentó pocas dificultades con el trabajo organizado, toda vez que, en el apogeo de la depresión, los obreros luchaban principalmente por evitar el paro. El gobierno hizo de mediador en una huelga de los obreros de teléfonos en 1932 y también en posteriores disputas laborales. Esta forma de actuar contrastaba con lo ocurrido bajo Uriburu, cuyo gobierno amenazó en determinado momento con fusilar a tres taxistas declarados culpables a menos que obtuviera una obsequiosa declaración de apoyo por parte de destacados sindicalistas. El régimen de Justo patrocinó una importante serie de leyes laborales que incluían las indemnizaciones por despido y restricciones al trabajo los sábados por la tarde, medida que recibió el nombre de «sábado inglés». Aun así, el gobierno nunca vaciló en utilizar la represión contra los sindicatos y Justo continuó las deportaciones de «agitadores» que habían empezado después de la Ley de Residencia de 1901. El gobierno aumentó los poderes de la policía y creó una sección especial para que se ocupara de los asuntos laborales.

En 1930 el movimiento obrero se había unido oficialmente en la Confederación General del Trabajo (CGT), que fusionó las dos confederaciones principales que existían a finales de los años veinte, la socialista Confederación Obrera Argentina (COA) con la sindicalista revolucionaria Unión Sindical Argentina (USA). Aunque los impresores dominaron durante un tiempo el liderazgo de la CGT, el único sindicato que tenía alguna importancia era el de ferroviarios, la Unión Ferroviaria, que representaba alrededor del 40 por ciento de los afiliados a la CGT. Liberales económicos dirigían la Unión Ferroviaria; apoyaban el libre comercio, la reanudación de las inversiones extranjeras y —su única desviación de los conceptos librecambistas— la protección de los obreros contra el despido y el paro. Durante todo el decenio de 1930 menos de una quinta parte de los trabajadores de Buenos Aires estaba sindicada. La mayoría de los sindicatos de aquel momento conservaban vínculos con el Partido Socialista, al menos extraoficiales, si bien aún existían reducidos grupos anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Un sindicalista revolucionario, Antonio Tramonti, estuvo al frente de la CGT hasta que fue derrocado en la escisión sindical de 1935, que dejó a la mayoría de los sindicatos bajo la dominación de José Domech, socialista que guió a la CGT hacia una postura más explícitamente política y específicamente antifascista. En las postrimerías del decenio de 1930 la CGT dedicó la mayor parte de sus energías a la defensa de la República española durante la guerra civil. La influencia comunista en los sindicatos siguió siendo insignificante hasta que en 1936 se creó un nuevo sindicato de trabajadores de la construcción, la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), cuando el Komintern ordenó a los comunistas de todo el mundo que formaran un movimiento sindical independiente liderado por los comunistas. En 1939 la FONC ya se había convertido en el segundo sindicato argentino en orden de importancia y daba el ejemplo en lo que se refería a sindicalizar a los obreros no especializados y mal pagados, la mayoría de los cuales había dejado el campo por la ciudad. A pesar del crecimiento de la FONC durante los últimos años treinta, el Partido Comunista no había avanzado mucho desde su creación en 1920 y aún consistía en poco más que un puñado de intelectuales y líderes obreros cuya influencia política era todavía relativamente pequeña.

La persuasión y la manipulación se convirtieron en los rasgos distintivos del régimen de Justo. Durante un tiempo logró la estabilidad política, pero a costa del aumento de la desilusión y la indiferencia populares. El gobierno nunca consiguió liberarse del estigma de sus orígenes, que radicaban en el fraude electoral. La fuerza aparente de Justo derivaba en gran parte de la debilidad de los adversarios del gobierno, de la inexistencia de una oposición eficaz que presentara alternativas auténticas a su política. Durante el decenio de 1930 el antiguo Partido Socialista tampoco creció mucho más allá de su baluarte tradicional en la capital federal. Los socialistas nunca se recuperaron del todo de la defección de los socialistas independientes en 1927 y la muerte del fundador del partido, Juan Bautista Justo, en 1928. Bajo unos líderes de edad avanzada encabezados por Nicolás Repetto, el Partido Socialista seguía siendo el mayor de la capital, donde el fraude electoral era menos común que en otras partes, pero su programa venía a ser el mismo que veinticinco años antes. Tan entregado como siempre a su electorado de consumidores de clase obrera, el partido funcionaba de acuerdo con más o menos las mismas suposiciones liberales de carácter general que guiaban la actuación del gobierno. El atractivo de los socialistas estribaba en sus evaluaciones seculares y realistas de los asuntos públicos; de lo que ahora carecían era de la energía y el evangelismo que habían mostrado bajo Juan

Bautista Justo años antes al desafiar a la vieja oligarquía. A mediados de 1936 recuperaron finalmente un poco de su estilo de antaño cuando, codo a codo con la CGT, emprendieron campañas de apoyo a la atribulada República española, pero cuando ésta acabó sucumbiendo ante las fuerzas de Franco a principios de 1939, el socialismo argentino ya iba camino de convertirse con demasiada rapidez en una fuerza extinguida.

También se encontraba en rápida decadencia el Partido Demócrata Progresista, que a mediados del decenio de 1930 equivalía a poco más que a la persona de su líder, Lisandro de la Torre. En ese momento De la Torre llevaba más de cuarenta años ocupando un lugar destacado en la política desde su base en Rosario, donde durante mucho tiempo había sido portavoz de los agricultores y los pequeños estancieros del litoral. Admirado por su oratoria, su integridad y su personalidad pintoresca y enérgica, De la Torre defendía ideas que en su mayor parte eran conservadoras. Pero durante toda su carrera, que empezó en la rebelión de 1890 contra Juárez Celman, había sido un demócrata firme que detestaba el fraude electoral. Por ser partidario decidido de la democracia, De la Torre nunca encontró mucho apoyo entre los conservadores más tradicionales, aparte de Uriburu en 1930 (cuyo ofrecimiento de la presidencia había rechazado).

En 1935 De la Torre fue miembro de una comisión del Congreso que investigó la industria cárnica y en esa función provocó uno de los mayores escándalos políticos de la presidencia de Justo. Durante los primeros años treinta las empresas de productos cárnicos británicas y norteamericanas reaccionaron a la caída de los precios organizando un consorcio de fijación de precios para salvaguardar los beneficios a expensas de sus proveedores. Así, mientras que los precios que las empresas cárnicas pagaban a los estancieros por el ganado bajaban de una media de treinta y cuatro centavos el kilo en 1929 a sólo diecisiete centavos en 1933, entre 1930 y 1934 los beneficios de las empresas cárnicas oscilaban entre el 11,5 y el 14 por ciento de las inversiones de capital. En 1935 la comisión probó las acusaciones de que se había creado un consorcio ilegal. Pero De la Torre manifestó una opinión discrepante y fue mucho más lejos que las críticas un tanto calladas de sus colegas y acusó a las empresas de numerosos fraudes contables y fiscales. Se había descubierto que una compañía, la Vestey Brothers, trataba de sacar clandestinamente sus cuentas del país en un contenedor cuyo rótulo decía «carne de buey enlatada». Además, según declaró De la Torre, miembros del gobierno encabezados por el ministro de Agricultura, Luis Duhau, habían sido cómplices de estas evasiones y se habían beneficiado personalmente de ellas. El Congreso debatió las alegaciones de De la Torre, mientras cada uno de los bandos insultaba al otro y los miembros del gobierno negaban categóricamente las acusaciones. La tensión fue en aumento y un espectador desconocido trató de matar a tiros a De la Torre, pero sólo consiguió herir mortalmente a Enzo Bordabehere, su joven colega de Santa Fe en el Senado. Después de esto, De la Torre desapareció rápidamente de la política y al cabo de pocos años se quitó la vida.

Durante todo el decenio de 1930, de hecho casi hasta la víspera de las elecciones de 1946, el radicalismo siguió siendo el mayor de los movimientos políticos de Argentina, y sólo la proscripción, el fraude o las discrepancias internas le impidieron llegar a la presidencia. Poco después de la revolución de 1930 los radicales volvieron a dar muestra de gran parte de la energía y el ímpetu que habían desplegado durante los años veinte cuando se embarcaron en un intento, a veces violento, de recuperar la supremacía. En abril de 1931 ya volvían a tener una mayoría popular en la

provincia de Buenos Aires; en julio intentaron una rebelión armada, aventura que algunos de ellos repitieron, de nuevo sin éxito, en 1933. Tras el golpe de estado los radicales denunciaron incesantemente el encarcelamiento de Hipólito Yrigoyen, la mayor parte del cual tuvo por marco la isla de Martín García, en medio del Río de la Plata, y cuando Justo finalmente dejó en libertad a Yrigoyen, muchos radicales acudían todos los días a rendirle homenaje en su domicilio de Buenos Aires. La muerte de Yrigoyen en 1933 provocó una de las mayores manifestaciones de la historia de Buenos Aires.

Aunque en el momento de su muerte Yrigoyen hubiese recuperado gran parte de la popularidad de la que gozara al comienzo de su segundo gobierno cinco años antes, después de su derrocamiento, continuamente enfermo, se había convertido en poco más que un símbolo nostálgico. En abril de 1931 el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear volvió a Argentina desde su segundo domicilio en París y se convirtió, con la aprobación de Yrigoyen y a pesar de sus pasadas diferencias, en el líder reconocido del partido, posición que conservó hasta 1942, año de su muerte. De Alvear, vástago de una gran familia patricia que parecía encarnar precisamente a la «oligarquía» que el radicalismo se había comprometido a destruir, había carecido hasta entonces de una base de poder personal en el partido. Pero su posición subió de inmediato en 1931 cuando repudió públicamente a Uriburu y luego se sometió alegremente a la detención y el encarcelamiento a manos del gobierno provisional. Con toda probabilidad, de haberse librado los radicales de la proscripción y el fraude durante las elecciones de noviembre de 1931, De Alvear, que era su candidato, hubiera vuelto a ser presidente.

Sin embargo, como líder del partido durante todo el decenio siguiente, De Alvear no mantuvo el impulso y la energía de 1931. Como presidente, continuó sus intentos de hacer entrar en vereda a los comités y los caciques del partido y convertir éste, como intentarían los antipersonalistas, en un movimiento conservador popular en torno a una clara serie de programas en vez de la búsqueda de patronazgo o asuntos individuales como la campaña pro nacionalización del petróleo en 1927-1930. En este empeño De Alvear volvió a fallar, y a medida que pasó el tiempo fue transformándose en una figura cada vez más anticuada cuyos pactos secretos con el gobierno daban pie a muchos rumores y molestaban a gran parte de las bases del partido. Tampoco cambió mucho el radicalismo después de morir De Alvear cuando el liderazgo pasó a Honorio Pueyrredón, hombre de carácter y orígenes parecidos.

Así pues, bajo un liderazgo anodino y nada inspirador los radicales empezaron a navegar a la deriva. Hasta 1935 se negaron invariablemente a participar en las elecciones y readoptaron la «abstención», una de las tácticas de Yrigoyen en los primeros tiempos del partido cuya finalidad era resaltar el fraude electoral y protestar contra él. Cuando finalmente dejaron de abstenerse en 1935 el fraude y la necesidad de reconstruir la organización del partido hicieron que los radicales fueran electoralmente débiles durante varios años. Los socialistas dominaron la capital hasta los primeros años cuarenta y los conservadores, bajo líderes como Alberto Barceló y Manuel Fresco, controlaban la provincia de Buenos Aires. El gran baluarte del radicalismo se encontraba ahora en Córdoba bajo Amadeo Sabbatini, que durante mucho tiempo había rivalizado con De Alvear por el control del partido nacional. Los radicales, al igual que los socialistas, parecían no tener ninguna idea nueva. Aunque continuaron exigiendo la nacionalización del petróleo (asunto que Uriburu y Justo sencillamente dejaron de lado), también ellos conservaron una perspectiva en su mayor parte libe-

ral, añorando los años veinte y, exceptuando algunos grupos marginales, oponiéndose a toda reforma importante. Los radicales seguían estando cargados de imperativos morales, pero con frecuencia faltos de sustancia, atormentados por incesantes rivalidades internas. En 1944 Felix Weil no pudo discernir ninguna diferencia real entre la perspectiva de los radicales y la de los conservadores:

La disensión predomina aún más entre los Radicales [*sic*] hoy. Todavía no tienen ningún programa político constructivo y su necesidad de liderazgo autoritario es mayor que nunca desde la muerte de De Alvear. La oposición a los conservadores no es un factor lo bastante fuerte como para unificar a un partido desmoralizado, en particular porque es difícil distinguir entre las deslumbrantes generalidades de los radicales y las de los conservadores. Los conservadores representan «el progreso moderado y el gobierno honrado», y los radicales, un «programa suavizado y un gobierno limpio». Ninguno de los dos habla en serio.⁹

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL DECENIO DE 1930

La revolución de 1930 tuvo lugar en el momento en que la economía argentina acusaba los efectos de la depresión mundial. En 1930-1931 las ganancias obtenidas de la exportación cayeron en un tercio, de una media de alrededor de mil millones de pesos durante los últimos años veinte a sólo 600 millones en 1931. El producto interior bruto (PIB) descendió del 14 por ciento entre 1929 y 1932, con la producción de cereales disminuyendo en un 20 por ciento y la manufacturación en un 17 por ciento. Después de la suspensión del patrón oro al cerrarse la Caja de Conversión a finales de 1929, el peso se depreció en alrededor del 25 por ciento antes de finalizar 1931. Argentina se libró de las peores aflicciones de la depresión, tales como los índices de paro de entre el 20 y el 30 por ciento que se registraron entre los obreros industriales en Alemania y Estados Unidos y la catástrofe que cayó sobre Chile cuando los mercados exteriores del cobre desaparecieron casi por completo. Aun así, la crisis afectó seriamente a la agricultura y provocó una oleada de quiebras en las ciudades al descender la manufacturación y el comercio. A principios de 1931 el índice de quiebras ya era el triple del de mediados de 1929 y alcanzó un punto máximo tras la mala cosecha de 1930. De 1929 a 1933 los precios al por mayor de los principales productos de exportación de Argentina — cereales, linaza y carne — descendieron en aproximadamente la mitad. Se calcula que los salarios reales cayeron en un 10 por ciento.

El gobierno provisional de 1930-1931 tomó medidas rápidas y enérgicas en relación con el gasto público y el comercio exterior. En 1930, después de dos años de rápido crecimiento del gasto público bajo Yrigoyen, el déficit presupuestario había subido hasta la elevada tasa del 6,5 por ciento del PIB. En 1931 la deuda pública había alcanzado 1.300 millones de pesos, lo cual representaba un incremento de más del 50 por ciento desde 1929. La rápida caída de los ingresos provocada por la depresión agravó las dificultades que tenía el nuevo gobierno para frenar la subida de la deuda pública. El gobierno respondió con rigurosos recortes del gasto, que cayó de 934 millones de pesos en 1930 a 648 millones en 1932. Los despidos masivos de personal de la Administración pública — alrededor de 20.000 en total — se convirtieron en el arma

9. Weil, *Argentine Riddle*, p. 6.

principal de la lucha para reducir el gasto, siendo los radicales las víctimas principales. En un intento de contener la caída de los ingresos el gobierno subió los impuestos y en 1931 introdujo un impuesto sobre la renta que pretendía disminuir la dependencia de los derechos arancelarios como fuente de finanzas públicas. El déficit presupuestario había caído hasta el 1,5 por ciento del PIB en 1932.

En 1930 cayeron tanto el valor de las exportaciones como su volumen, esto último debido a las malas cosechas. La contracción de las importaciones, sin embargo, fue más lenta y sus precios cayeron de forma mucho menos vertiginosa que los de las exportaciones: la relación de intercambio, tomando 1937 como base 100, ascendía a 97,6 en 1928, pero sólo a 63,2 en 1931. El resultado fue un grave déficit de la balanza de pagos que vació las reservas de oro del país y amenazó su capacidad de atender al servicio de la deuda exterior. En un esfuerzo por recortar las importaciones el gobierno de Uriburu subió los aranceles, que pasaron a ser más importantes como reguladores del intercambio que como instrumento fiscal. En octubre de 1931, siguiendo el ejemplo de otros muchos países, Argentina impuso controles de cambios. Estas medidas resultaron eficaces al menos temporalmente, toda vez que a mediados de 1932 se había eliminado el déficit de la balanza de pagos. En 1932 las importaciones por volumen alcanzaban apenas un 40 por ciento de la cifra de 1929.

El servicio de la deuda exterior a principios del decenio de 1930 resultó mucho menos difícil que en los primeros años del de 1890. Una de las razones fue que la depreciación del peso provocó la correspondiente contracción de los beneficios en oro o moneda fuerte de las compañías extranjeras, muchas de las cuales, por consiguiente, dejaron de hacer remesas al extranjero con la esperanza de que los tipos de cambio mejorasen con el tiempo. Se calcula que las compañías ferroviarias británicas perdieron así 6 millones de libras esterlinas entre julio de 1930 y julio de 1932. Las remesas aplazadas ayudaron a reducir los déficits de la balanza de pagos y los recursos que se requerían para el servicio de la deuda exterior. Una segunda razón fue que en los primeros años treinta el endeudamiento exterior público siguió siendo ligero en comparación con el de los primeros años del decenio de 1890. Así, de un total de inversiones extranjeras de 4.300 millones de pesos en 1934, sólo 900 millones constituían deudas públicas. Aunque el servicio de la deuda exterior absorbía alrededor de la mitad del total de reservas de oro en 1930-1931, Argentina pudo evitar el incumplimiento del servicio de la deuda exterior.

En Argentina los primeros años de la depresión fueron un período de dislocación más que de derrumbamiento. A pesar de la caída de los precios de las exportaciones, la producción agrícola y los volúmenes de exportación de productos agrícolas no descendieron de forma acusada hasta 1930 y luego se recuperaron hasta alcanzar los niveles de los últimos años veinte. En las ciudades la depresión afectó a los alimentos y las bebidas, las industrias metalúrgicas y las de pequeños enseres domésticos, pero no hizo daño al ramo de la construcción y especialmente a la industria textil. El paro visible siguió siendo notablemente ligero, tal vez entre el 5 y el 6 por ciento. En 1933 el agregado comercial británico en Buenos Aires calculó que el paro alcanzaba sólo el 2,8 por ciento. Un año después su sucesor comentó que «en comparación con el resto del mundo, puede decirse que Argentina no tiene ningún problema grave de paro».¹⁰ Pue-

10. H. O. Chalkley, en Department of Overseas Trade, Great Britain, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, Londres, 1933, p. 146; Stanley G. Irving, en Department of Overseas Trade, Great Britain, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, Londres, 1935, p. 174.

de que las estadísticas oficiales subestimaran mucho el paro real, sin embargo. No tuvieron en cuenta a las obreras, que representaban quizá una quinta parte del total, y definían el paro, de manera muy engañosa, como porcentaje de la población total en vez de la población activa total.

Aparte de 1930, 1933 resultó el año más riguroso de la depresión, ya que los precios mundiales cayeron en picado hasta sus niveles más bajos desde hacía cuarenta años y ascendían apenas al 50 por ciento de los de 1929. Esto produjo otro grave déficit de la balanza de pagos que obligó al gobierno de Justo a tomar nuevas medidas para hacer frente a la crisis. En 1933 el gobierno se esforzó por fomentar las exportaciones y ayudar a los agricultores y con tal fin estimuló una nueva depreciación del peso, que el año siguiente ya tenía sólo el 60 por ciento de su valor de 1929. Una segunda medida de 1933 amplió el impuesto sobre la renta introducido dos años antes. Como consecuencia de ello, los derechos de importación que habían proporcionado el 54 por ciento de los ingresos en 1930 representaron sólo el 39 por ciento en 1934.

En 1933 el gobierno también modificó el sistema de controles de cambios introducido en 1931. Las disposiciones originales tenían por fin frenar la depreciación del peso y garantizar la disponibilidad de fondos para el servicio de la deuda exterior. En ese momento el gobierno obligó a los exportadores a venderle las divisas extranjeras que obtenían de sus transacciones, que el gobierno luego revendía en subasta pública. Las reformas de noviembre de 1933 establecieron un procedimiento de examen para todas las remesas de divisas extranjeras hechas por particulares y se empezó a clasificar las importaciones de acuerdo con una escala de prioridades. Recurriendo a la introducción de permisos, las medidas limitaron el número de posibles compradores de divisas extranjeras al gobierno. Quienes carecían de permisos tenían que comprar las divisas extranjeras en un mercado libre a precios muy superiores. Con estos cambios el gobierno podía regular no sólo el volumen de las importaciones, sino también su contenido y su origen. Dar a los importadores de artículos británicos muchos más permisos de control de cambios que a quienes deseaban importar artículos norteamericanos, por ejemplo, resultó ser un medio eficaz de encauzar el comercio hacia los artículos británicos.

Después de introducir las reformas del control de cambios el gobierno empezó a obtener grandes beneficios de sus operaciones con divisas extranjeras, que en 1940 ya totalizaban alrededor de mil millones de pesos. Algunos de estos ingresos ayudaron a atender al servicio de la deuda exterior, pero la mayor parte de ellos se empleó para subvencionar a los productores rurales. Se crearon juntas reguladoras para que administrasen las subvenciones. Empezando con la junta de cereales en 1933, pronto se crearon entidades parecidas para la carne, el algodón, la leche y otros productos.

Las reformas económicas de finales de 1933 se llevaron a cabo bajo Federico Pinedo, que se convirtió en ministro de Hacienda como sucesor de Alberto Hueyo, figura ortodoxa que había logrado controlar los déficits de la balanza de pagos, frenar el gasto público y evitar el impago de la deuda exterior. Pinedo, en cambio, demostró ser imaginativo e innovador, gracias en gran parte a su equipo de consejeros técnicos encabezado por Raúl Prebisch. En 1934 Pinedo consolidó la deuda pública, medida que fomentó la bajada de los tipos de interés y desvió las inversiones de los bonos del estado de alto rendimiento. Pero el Banco Central, creado en 1934, se convirtió en el gran monumento del ministerio de Pinedo. Hasta entonces el sistema bancario había adolecido de una rigidez indebida, con el crédito restringido durante los períodos de recolección, los bancos compitiendo por los empréstitos del Banco

de la Nación, entidad privada que cumplía algunas funciones primitivas de banco central y cuyos tipos de interés tendían, por tanto, a subir en vez de a bajar durante los períodos de depresión. El Banco Central ofrecía métodos nuevos para regular la economía mediante el control de la oferta monetaria: comprar y vender títulos del estado, redescantar y cambiar las reservas obligatorias. El Banco Central vinculó la oferta crediticia al flujo y reflujo de la actividad económica y dio al gobierno mayor control de los tipos de cambios y el comercio exterior. Aunque acabó siendo un instrumento de la financiación mediante déficit, no se había creado con esta intención. El grupo de Pinedo creía que el gasto deficitario intensificaría las importaciones y, por tanto, los déficits de la balanza de pagos, al tiempo que provocaría inflación.

Las medidas que tomó Pinedo en 1933 y 1934 establecieron muchos de los instrumentos básicos que gobiernos posteriores perfeccionarían y ampliarían al crear una economía centralizada y dirigida. El Tratado Roca-Runciman de 1933 encarnaba la otra cara, la cara regresiva, de la política económica conservadora durante la depresión. El tratado se firmó después de que Gran Bretaña adoptase la preferencia imperial en la conferencia de Ottawa un año antes. La preferencia imperial significaba que Gran Bretaña procuraría importar tanto como pudiese del imperio al tiempo que excluiría las importaciones procedentes de otros países a cambio de gozar de acceso privilegiado a los mercados imperiales. La preferencia imperial amenazaba a Argentina, porque en Ottawa los ingleses se encontraron ante enérgicas exigencias australianas y sudafricanas de importar carne de estas procedencias a expensas del suministro argentino. Circularon rumores de que Gran Bretaña se proponía aplicar un 5 por ciento de recortes mensuales a las importaciones de carne argentina, reduciendo las compras hasta en un 65 por ciento durante el primer año.

Desde el principio pareció improbable que los ingleses pensaran poner en práctica la propuesta hasta semejante extremo, toda vez que los proveedores imperiales parecían incapaces de incrementar la producción y las exportaciones con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda británica. Al mismo tiempo, reducir las importaciones de carne de Argentina representaba una amenaza en potencia a las exportaciones británicas a Argentina y el riesgo de represalias contra las inversiones y compañías británicas. En 1933 los ingleses buscaban una capacidad negociadora, un medio de obligar a Argentina a comprar más artículos británicos y menos artículos norteamericanos y de corregir la tendencia comercial que había surgido en los años veinte, durante los cuales Argentina había vendido grandes cantidades de artículos a Gran Bretaña mientras aumentaba continuamente las importaciones de Estados Unidos, dejando a Gran Bretaña con un creciente déficit comercial. Durante los primeros años de la depresión también habían irritado a los ingleses las restricciones que los controles de cambios y la depreciación del peso habían impuesto a las remesas de las compañías británicas en Argentina.

El gobierno argentino respondió a la amenaza que pesaba sobre las exportaciones de carne enviando un equipo de negociadores a Londres encabezado por el vicepresidente, Julio A. Roca hijo. En mayo de 1933 Roca y Walter Runciman, presidente de la British Board of Trade,* firmaron un tratado comercial al que a finales de septiembre siguieron un protocolo y un acuerdo sobre aranceles. El tratado especificaba que Gran Bretaña continuaría importando la misma cantidad de carne argentina que había importado de julio de 1931 a junio de 1932, a menos que una nueva caí-

* Ministerio de Comercio británico. (*N. del t.*)

da importante de los precios al consumidor hiciera necesario aplicar nuevas restricciones para salvaguardar los beneficios de los minoristas en Gran Bretaña. Los ingleses accedieron a que las empresas cárnicas de propiedad argentina suministraran el 15 por ciento de las exportaciones de carne a Gran Bretaña, concesión con la que querían responder a las quejas argentinas relativas al consorcio de empresas cárnicas extranjeras. Se arguyó que permitir las exportaciones de carne de frigoríficos que eran de propiedad en régimen de cooperativa de los ganaderos ayudaría a mantener los beneficios de éstos. Finalmente, Gran Bretaña se comprometió a no imponer derechos arancelarios a las importaciones de cereales argentinos.

Dado que Gran Bretaña no importaba cereales argentinos en grandes cantidades, el tratado estaba relacionado principalmente con la carne de buey y equivalía a un acuerdo de mantener las importaciones de dicha carne en los niveles relativamente bajos de 1931-1932. A cambio, sin embargo, Argentina accedió a reducir los derechos sobre casi 350 importaciones británicas al nivel que tenían en 1930, antes de los aumentos arancelarios que decretó el gobierno de Uriburu, y abstenerse de imponer derechos a artículos tales como el carbón, que hasta el momento se habían librado de los aumentos arancelarios. Además, Gran Bretaña consiguió que Argentina estuviera de acuerdo con que las remesas de las compañías británicas se pagaran por medio de deducciones de las ganancias de exportación argentinas a Gran Bretaña; a partir de entonces cualquier remesa que permaneciera «bloqueada» en Argentina se trataría como empréstito con intereses. En el Tratado Roca-Runciman Argentina se comprometió a dispensar un «trato benévolo» a las compañías británicas, ofreciéndoles condiciones favorables para adquirir importaciones bajo las disposiciones de control de cambios. El tratado eximía a las compañías ferroviarias británicas de contribuir a los recién creados planes de pensiones para sus trabajadores. El tratado no especificaba nada sobre los transportes marítimos y, por tanto, dejaba la mayor parte del comercio anglo-argentino en manos de los expedidores británicos, dando a los ingleses una parte casi exclusiva de las ganancias invisibles obtenidas del comercio.

El Tratado Roca-Runciman permitió a Argentina mantener las exportaciones de carne en el nivel de 1931-1932, pero poco más. Resultó que las concesiones a las cooperativas cárnicas locales no significaban nada, ya que los expedidores británicos evitaban comerciar con ellas, y como no podían encontrar barcos, las cooperativas sólo podían desarrollar sus actividades en el mercado nacional. Gran Bretaña, en cambio, recuperó las condiciones para el comercio de que gozaba antes de la depresión. Como los ingleses también obtuvieron acceso preferencial a las escasas divisas extranjeras, se hicieron con lo que equivalía al dominio del comercio con Argentina, protegido ahora por un tratado, que tenían antes de 1914. Los ingleses obtuvieron condiciones muy favorables para hacer remesas, incluida la protección contra la futura devaluación del peso. El Tratado Roca-Runciman también representó un duro golpe para Estados Unidos. Los importadores de mercancías norteamericanas estaban obligados ahora a superar el muro de los aranceles creado en 1930 y comprar caras divisas extranjeras en el mercado libre de cambios.

Pensado al principio para que estuviera en vigor durante tres años, el Tratado Roca-Runciman se renovó y prorrogó en 1936. En esta ocasión los ingleses obtuvieron una autorización para cobrar nuevos impuestos sobre la carne importada de Argentina. A cambio de reducir las tarifas de carga, las compañías ferroviarias británicas recibieron condiciones aún más favorables para hacer remesas. Se les prometió que no se concedería a los ferrocarriles estatales tarifas subvencionadas que fuesen

más baratas que las británicas, y que se reduciría la construcción de carreteras que quitasen tráfico a los ferrocarriles.

A pesar de todas las concesiones por parte de Argentina en 1933 y 1936, Gran Bretaña hizo poco más que proteger el comercio que ya tenía en el decenio de 1930. Aunque las exportaciones norteamericanas descendieron vertiginosamente, la parte británica, que ascendía a poco menos del 20 por ciento en 1927, siguió siendo inferior al 24 por ciento durante todo el decenio de 1930. Además, aunque Gran Bretaña había conseguido condiciones mejores para las remesas desde Argentina, las ganancias totales de las compañías británicas descendieron de manera acusada durante la depresión, de tal modo que los beneficios siguieron estando muy por debajo de los niveles del decenio de 1920. En 1929-1935 los tonelajes transportados por los ferrocarriles británicos cayeron en un 23 por ciento, pero los ingresos disminuyeron en un 40 por ciento. La mitad de los inversores británicos que tenían acciones en los ferrocarriles argentinos no cobró dividendos durante el decenio de 1930; la cotización media de las acciones de las compañías ferroviarias en 1936, por ejemplo, apenas alcanzaba el 10 por ciento de la de finales de los años veinte. Como ilustración de los apuros financieros de los ferrocarriles británicos, en 1937 la compañía Central Córdoba ofreció voluntariamente su propia expropiación por parte del gobierno y su incorporación a las líneas del estado.

Las dificultades financieras de las compañías ferroviarias británicas fueron resultado no sólo de la depresión sino de la creciente competencia del transporte por carretera. Durante todo el decenio de 1920 Argentina había importado gran número de automóviles, autobuses y camiones, la mayoría de ellos de Estados Unidos. En 1932, a pesar de la encarnizada oposición de los ferrocarriles, el gobierno de Justo puso en marcha un programa de construcción de carreteras. La mayoría de estas carreteras nuevas se construyó en el litoral, donde competían directamente con los ferrocarriles británicos. El crecimiento del nuevo tipo de transporte se hizo todavía más conspicuo en las ciudades, donde los anticuados tranvías británicos hacían frente a un desafío cada vez mayor por parte de los autobuses llamados «colectivos», que resultaban invariablemente más baratos, más rápidos y más flexibles. En 1929 los tranvías ganaron 43 millones de pesos, pero en 1934 sólo 23 millones. En 1935, mientras se empezaban las negociaciones preliminares para renovar el Tratado Roca-Runciman —momento que juzgó propicio para actuar— la mayor de las compañías de tranvías británicas en Buenos Aires, la Anglo-Argentine, presentó un plan al gobierno para poner los servicios de transportes de la ciudad bajo una sola entidad, la Corporación de Transportes.

Crear la Corporación de Transportes equivalió a un complot apenas disimulado cuyo objetivo era someter los colectivos al control de los tranvías, que entonces procederían a destruirlos. Según las disposiciones del plan, todas las partes que prestaran servicios de transporte en la ciudad serían obligadas a formar parte de la Corporación, donde recibirían acciones y derecho a voto de acuerdo con la magnitud de su activo de capital. Los tranvías dominarían el transporte ciudadano, dado que los colectivos eran con frecuencia empresas muy modestas que dependían en gran medida de los créditos. En 1935 la Anglo-Argentine Tramway Company pidió también que se garantizase a la Corporación de Transportes un beneficio mínimo del 7 por ciento, el tipo de subvención que se había utilizado mucho antes de 1890 para atraer inversiones británicas a Argentina. Como temía las represalias contra las exportaciones de carne al acercarse el momento en que había que renovar el Tratado

Roca-Runciman, el gobierno de Justo se sintió obligado a mostrarse de acuerdo con que se crease la Corporación, a pesar de la fuerte oposición tanto de los «colectivos» como de los consumidores capitaneados por el Partido Socialista. Pero después de mostrarse de acuerdo, el gobierno no hizo nada por poner el plan en práctica. Evitó todo intento de obligar a los colectivos a entrar en la Corporación y denegó repetidamente la subida de las tarifas que pedían los tranvías. En este asunto el gobierno de Justo logró vencer a los ingleses, aunque simultáneamente sufría graves daños políticos, a manos de Lisandro de la Torre, a causa del asunto del consorcio de las empresas cárnicas.

En 1934 el crecimiento económico ya se había reanudado en Argentina y la recuperación continuó a ritmo acelerado durante los últimos años treinta, exceptuando la recesión que en 1937-1938 causó la mala cosecha. Los cereales impulsaron la recuperación de mediados del decenio de 1930. En 1936-1937 Argentina registró el mayor volumen de exportación de cereales de su historia, mientras los agricultores obtenían un incremento de más del 20 por ciento de los precios sobre 1933. En 1937 Argentina seguía ocupando el séptimo lugar entre los productores mundiales de trigo y el segundo entre los exportadores; también produjo la mitad de la linaza del mundo. La devaluación del peso en 1933, que impulsó las exportaciones de cereales durante los años siguientes, causó mucha inflación; el coste de la vida en Buenos Aires subió alrededor de un 25 por ciento entre mediados de 1934 y mediados de 1936, momento en que la inflación fue síntoma de la recuperación económica. El alza de los precios contribuyó a fomentar el auge de la construcción en Buenos Aires a finales de los treinta. En 1939, después de varios años de subida del gasto público y un aumento del 20 por ciento sólo en 1939, Argentina tenía un déficit presupuestario que equivalía al 2 por ciento del PIB.

Durante los primeros años treinta la industria manufacturera estuvo deprimida junto con el resto de la economía, aunque la baja había sido menos grave que en otros sectores. Luego la manufacturación se recuperó rápidamente y a partir de mediados del decenio de 1930 empezó a dejar atrás a todos los otros sectores y su tasa de crecimiento fue el doble de la correspondiente a la agricultura. Varias condiciones favorecieron el crecimiento industrial durante los años treinta. Los aranceles, el comercio bilateral, los controles de cambios y las devaluaciones restringieron las importaciones y distorsionaron su composición al hacer que los productores del país fuesen más competitivos en el mercado nacional. Durante todo el decenio de 1930 los fabricantes argentinos pudieron adquirir maquinaria de segunda mano a precios rebajados de empresas industriales extranjeras que habían quebrado. La mano de obra barata era cada vez más abundante como consecuencia de la migración del campo a la ciudad.

El censo de 1914 había contado 383.000 trabajadores «industriales». En 1935 eran 544.000; en 1941 el número había subido hasta 830.000, y en 1946 superaba el millón. En los primeros años cuarenta el sector manufacturero producía diversos artículos, entre los que destacaban los textiles y los alimentos en conserva, seguidos de los productos químicos, los metales y el cemento. La mayoría de las industrias fabricaba productos acabados para el consumo. La inexistencia de industria pesada reflejaba la limitación de las reservas nacionales de materias primas básicas como el carbón y el mineral de hierro y las deficiencias de la red de comunicaciones, que seguía siendo mucho más favorable a las exportaciones agrícolas. Las escaseces credi-

ticias también impidieron un desarrollo industrial más diverso. Aparte de todo esto, los fabricantes argentinos a veces se comportaban más como especuladores que como empresarios e inversores a largo plazo. Con frecuencia parecían creer que la manufacturación podía dar beneficios a corto plazo con una inversión mínima, pero no era posible confiar en ella a un plazo más largo excepto en muy pocos casos. Estas actitudes se derivaban en parte de los recuerdos de los años de la guerra y la posguerra inmediata; la industria había florecido en 1914-1918, pero luego se había derrumbado al reanudarse las importaciones después de la contienda. Durante los años treinta predominaban expectativas parecidas; sólo la depresión impidió que se reanudara las importaciones, y cuando la depresión pasara, la competencia extranjera volvería a estrangular a los fabricantes locales. Todas estas condiciones ayudaron a preservar la mayoría de las unidades industriales como empresas pequeñas en las que se invertía poco. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las «empresas industriales» tenían diez empleados o menos, y el 75 por ciento menos de cincuenta. En 1935 dos tercios de la industria abarcaban los alimentos y las bebidas y los textiles. Sin embargo, al lado de estas empresas pequeñas, que eran numerosas, había un puñado de empresas muy grandes cuya envergadura se derivaba del monopolio y de la abundancia de materias primas baratas. Entre ellas estaban el gran consorcio Bemberg, que dominaba la industria cervecera; Torcuato di Tella, cuya compañía, Sociedad Industrial Americana de Maquinarias (SIAM), producía diversos aparatos con licencia estadounidense, y Miguel Miranda, que de pobre había pasado a ser el gigante de los alimentos en conserva y a finales del decenio de 1940 se convirtió, bajo Perón, en el principal planificador de la economía argentina. Los extranjeros seguían ocupando una posición prominente en la manufacturación argentina, como antes de 1914. Parte de la súbita aceleración del crecimiento industrial a finales del decenio de 1930, por ejemplo, tenía su origen en la oleada de refugiados judíos que llegaron con el capital que pudieron recuperar cuando los nazis extendieron su dominio sobre la Europa central. Otro rasgo notable del sector manufacturero en Argentina fue su abrumadora concentración en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores más próximos. Las cifras de 1939 mostraban que el 60 por ciento de las empresas industriales, el 70 por ciento de los trabajadores industriales y alrededor del 75 por ciento de los salarios industriales estaban en Buenos Aires.

Algunas de las industrias que registraron expansión en los años treinta y cuarenta, en particular la textil y la de alimentos elaborados, existían desde hacía una generación o más. Entre las que producían artículos novedosos, como bombillas eléctricas y neumáticos de caucho, había varias que nacieron como filiales, en su mayor parte de compañías norteamericanas. Los exportadores estadounidenses crearon empresas en Buenos Aires debido a los aranceles elevados y al uso discriminatorio de los controles de cambios después de 1933. Aunque las inversiones estadounidenses en su conjunto disminuyeron durante la depresión y la guerra, las inversiones privadas en estas filiales manufactureras aumentaron en 30 millones de dólares norteamericanos entre 1933 y 1940. A finales del decenio de 1930 se fundaron catorce filiales de compañías estadounidenses que daban empleo a un total de catorce mil trabajadores.

Con todo, en los años treinta la industria principal era la textil, que continuó creciendo durante los primeros años del decenio, aunque la manufacturación en conjunto se contrajo. El número de fábricas textiles aumentó de veinticinco a treinta entre 1929 y 1934, y los trabajadores empleados en ellas pasaron de ser ocho mil a doce

mil. En 1930 los productores textiles del país satisfacían sólo el 9 por ciento del consumo total. En 1940 la participación de los productores nacionales en el mercado aumentó en casi la mitad, y en 1943, al caer vertiginosamente las importaciones a causa de la guerra, subió hasta más de cuatro quintas partes. A mediados de los treinta Argentina pasó a ser autosuficiente en tejidos de algodón y en los números más bastos de hilo de algodón. Asimismo, se creó una industria sedera. Durante los años treinta y cuarenta los textiles alcanzaron una tasa de crecimiento anual del 11 por ciento, comparada con la de alrededor del 6 por ciento del total de las manufacturas.

Durante todo este período los productores textiles disfrutaron de condiciones excepcionalmente favorables. La primera entre ellas era la abundancia de lana, ya que las exportaciones de este producto se derrumbaron durante la depresión. Los textiles de lana representaron alrededor de tres cuartas partes de la producción total hasta finales del decenio de 1930. Ya en 1934 varios fabricantes de lana bonaerenses trabajaban para servir pedidos recibidos con doce meses de antelación. Simultáneamente, la producción de algodón en rama aumentaba con rapidez, dado que la tierra dedicada a su cultivo pasó de 10.449 hectáreas en 1924 a 28.593 en 1934 y 33.696 en 1940. Los pequeños agricultores de la provincia del Chaco en el lejano norte, la mayoría de ellos cerca de la ciudad de Resistencia, suministraban más de las cuatro quintas partes de algodón en rama. En 1933 el gobierno introdujo una subvención para los cultivadores de algodón que se financiaría con los beneficios obtenidos del control de cambios, y esta «junta de algodón», una de las juntas reguladoras de Pinedo, ayudó a que la producción continuase creciendo. Además de acceso a materias primas baratas, los textiles gozaban de otras ventajas. Las medidas que se tomaron durante la depresión —subida de los aranceles, controles de cambios y devaluaciones— tendían o bien a reducir las importaciones de textiles o a cambiar los precios relativos de los artículos nacionales y las importaciones. El Tratado Roca-Runciman, por ejemplo, ayudó a reducir la afluencia de textiles más baratos procedentes de países como Japón e Italia a favor de mercancías británicas relativamente caras, lo cual incrementó la ventaja competitiva de los productores locales. Mientras que las condiciones de la oferta cambiaron, la demanda de productos textiles siguió siendo relativamente constante y fija, y al caer las importaciones aumentaron los beneficios de los productores locales, lo cual estimuló la producción. Al igual que el resto de las manufacturas, la industria textil se benefició de la creciente abundancia de mano de obra barata y se convirtió en tal vez el mayor patrono de mujeres. También benefició a la industria la práctica de requisar maquinaria barata de segunda mano procedente del extranjero; el número de husos de algodón, por ejemplo, se multiplicó por cinco en 1930-1936. Entre todas estas condiciones favorables, la más importante fue la facilidad de obtener materias primas baratas. Otros sectores de la manufacturación, como la metalurgia, que siguieron dependiendo de materias primas importadas, crecieron a un ritmo más lento durante los años treinta en comparación con los veinte. La nueva industria textil tenía los mismos rasgos generales que la industria en general. En 1936 funcionaban unas 225 empresas, pero las diez principales empleaban a casi la mitad de la población activa total.

La migración en masa del campo a las ciudades acompañó la subida de la manufacturación. La migración interna no empezó durante el decenio de 1930, pero su ritmo se aceleró. Después de aportar una media de alrededor del 5 por ciento al crecimiento de Buenos Aires y sus barrios periféricos entre 1914 y 1935, la parte correspondiente a los inmigrantes aumentó hasta el 37 por ciento en 1937-1947, lo

cual reflejaba también el marcado descenso de la tasa de inmigración extranjera durante los años treinta y cuarenta. Entre 1937 y 1943 una media de 70.000 inmigrantes entraron en la ciudad de Buenos Aires y sus barrios periféricos cada año, pero en 1943-1947 la tasa subió hasta 117.000. La migración desempeñó un papel importante en el sostenimiento de la expansión de Buenos Aires, cuya población, 1,5 millones en 1914 y 3,4 millones en 1936, había crecido hasta cifrarse en 4,7 millones en 1947. Estudios recientes de la migración interna han tratado de evaluar el movimiento de salida del campo, en contraposición a los incrementos de la población urbana. Estas cifras sugieren no sólo que la tasa de movilidad fue mucho más alta de lo que habían indicado cálculos anteriores, sino también que la migración empezó a aumentar de forma acentuada durante los primeros años de la depresión en lugar de a finales del decenio de 1930. No obstante, nadie ha discutido la anterior opinión de que la migración se intensificó durante los años cuarenta y después. Los cálculos de Alfredo E. Lattes, por ejemplo, indican que el número de personas que abandonaron las zonas rurales fue de 185.000 durante el quinquenio 1930-1934, 221.000 entre 1935 y 1939 y 446.000 en 1940-1944. Durante la totalidad de los decenios de 1930 y 1940 casi dos tercios de los inmigrantes procedían de la región de las pampas, y principalmente de la provincia de Buenos Aires, en lugar del interior. Lattes calcula que el Gran Buenos Aires atrajo 1,1 millones de inmigrantes entre 1935 y 1947, de los cuales dos tercios procedían de las provincias de las pampas y Mendoza. A comienzos del decenio de 1950 las cosas cambiaron mucho, pero antes de entonces, al parecer, la mayor parte de la migración se producía entre lugares separados por distancias relativamente cortas y era frecuente que consistiera primero en un movimiento del campo a las pequeñas ciudades adyacentes seguido de otro movimiento hacia la zona metropolitana.¹¹

La manufacturación atraía personas a la ciudad; las condiciones de la agricultura las expulsaban del campo. La depresión afectó a una sociedad agraria cuyos rasgos básicos habían cambiado poco durante la generación anterior. En las pampas la población rural aún la integraban principalmente arrendatarios y jornaleros que se empleaban en grandes estancias en condiciones que con frecuencia hacían que su vida fuese extremadamente insegura. La tenencia de la tierra apenas había cambiado desde 1914. En la provincia de Buenos Aires poco más de 300 familias poseían una quinta parte de la tierra, y sólo 3.500 familias, la mitad de la tierra. Tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, las dos principales provincias de las pampas, grandes estancias de más de 1.000 hectáreas abarcaban dos tercios de la tierra. Un censo agrícola de 1937 reveló que sólo 20.000 terratenientes, en una población rural total de alrededor de 1,5 millones, poseían el 70 por ciento de la tierra pampera. Durante los primeros años treinta los terratenientes que se veían amenazados por la depresión habían constituido sociedades mercantiles para atraer nuevo capital e impedir la enajenación o subdivisión de sus propiedades.

Durante los primeros años de la depresión el gobierno hizo algunos esfuerzos por mejorar las condiciones para la población agrícola, en particular los arrendatarios. En 1932 diversas leyes establecieron contratos mínimos de cinco años para los arrendatarios e insistieron en que se reembolsara a éstos el importe de las mejoras que hicieran en las tierras que labraban. En 1933, al caer en picado los precios agrí-

11. Alfredo E. Lattes, «La dinámica de la población rural en la Argentina», *Cuadernos del CENEP*, P, n° 9, (1979).

colas en los mercados internacionales, el gobierno impuso una moratoria a las deudas de los agricultores. A menos que se encontraran con que sus arrendamientos subían, los agricultores también obtuvieron cierta protección de la depreciación del peso después de 1929 y de las subvenciones que concedía la junta de cereales. Al menos desde el punto de vista de la producción, estas medidas ayudaron a mantener la producción agrícola, que continuó subiendo hasta llegar a la cosecha sin precedentes de 1937.

Sin embargo, había otras señales de que los agricultores seguían descontentos y su posición era incierta. En el decenio de 1930 los arrendatarios agrícolas todavía sufrían a causa de una condición que los observadores no habían dejado de criticar durante los últimos cincuenta años: el crédito seguía siendo insuficiente y aún procedía en gran parte de los tenderos locales (pulperos), que a menudo eran rapaces, en vez de los bancos agrícolas; los agricultores carecían de instalaciones para almacenar sus cereales y, por tanto, tenían que desprenderse de sus cosechas a medida que iban recojiéndolas, lo cual provocaba la caída de los precios; también seguían dependiendo de los ferrocarriles para el transporte y de la buena voluntad de los exportadores de cereales de Buenos Aires, el monopolio de los llamados «Cuatro Grandes». La mayor de las grandes empresas exportadoras de cereales, Bunge y Born, exportaba ahora casi una tercera parte de la cosecha total y hacía de intermediaria en la financiación de la mitad de los cereales del país entre el momento de la recolección y el de la exportación. Sólo dos empresas se encargaban de casi tres cuartas partes de todos los envíos de cereales. En el campo la continuada práctica de arrendamiento temporal y la dependencia de los trabajadores estacionales fomentaban la debilidad de las estructuras familiares, una baja tasa de nupcialidad, una tasa también baja de natalidad y una tasa elevada de ilegitimidad.

Estas adversidades acosaban a los agricultores desde hacía decenios. Pero en los años treinta había indicios de que las condiciones iban a peor. A medida que más y más estancias se constituían en sociedades mercantiles, creció el absentismo de los terratenientes, que era otra queja perenne de los agricultores. Las relaciones entre los terratenientes y los arrendatarios se hizo todavía más impersonal, y los vínculos paternalistas que a veces los habían unido disminuyeron. A pesar de las leyes de 1932, la mayoría de los arrendatarios continuaban trabajando sin contratos por escrito, y, a pesar de las escaseces de importaciones durante la depresión, la agricultura siguió mecanizándose, y el número de cosechadoras aumentó de 28.600 en 1930 a unas 42.000 en 1940. La creciente mecanización disminuyó la necesidad de trabajadores estacionales y tendió a causar la desaparición de los pequeños agricultores marginales. En 1934 el agregado comercial británico hizo referencia al «creciente número de vagabundos [que son] motivo de grave preocupación para los propietarios de campamentos y para las compañías ferroviarias».¹² Los agricultores sufrieron su mayor golpe después de mediados de 1940 con el derrumbamiento de las exportaciones agrícolas durante la guerra. Pero incluso antes de 1940 indicios al menos fragmentarios sugerían el aumento de las diferencias entre los ingresos del campo y los de la ciudad, posible causa de la migración interna.

12. Véase Chalkley, *Economic Conditions in the Argentine Republic*, 1935, p. 174.

EL AUGE DEL NACIONALISMO

Durante el decenio de 1930 la política argentina empezó a experimentar los cambios y realineamientos que culminarían con la subida de Perón al poder. De las nuevas corrientes políticas de este período, el nacionalismo se convirtió en la más central e importante. Las raíces del nacionalismo eran complejas y se remontaban a principios del siglo XIX, pero la súbita proliferación de ideas nacionalistas después de 1930 acompañó la depresión. El nacionalismo surgió como fuerza ideológica importante en 1934 con la publicación de *La Argentina y el imperio británico: Los eslabones de una cadena, 1806-1933*, de Rodolfo y Julio Irazusta. Este libro atacaba la mentalidad de la clase gobernante liberal-conservadora que tantas concesiones había hecho, según afirmaban los Irazusta, en el Tratado Roca-Runciman, empujada por una gratitud y lealtad inmerecidas a Gran Bretaña por el apoyo británico durante la lucha por la independencia. Los Irazusta rechazaban esta idea por considerarla un mito: si Gran Bretaña había apoyado alguna vez el movimiento independentista, había sido sólo para captar a Argentina como mercado comercial y de inversiones y para establecer una nueva forma de dominación colonial que substituyera la de España.

Dentro del movimiento nacionalista en general aparecieron dos corrientes distintas que Perón uniría más adelante. La primera de ellas era la corriente nacionalista popular que había aflorado a la superficie por primera vez durante las campañas a favor de la nacionalización del petróleo a finales de los años veinte. La campaña aspiraba a extender el control del estado sobre materias primas como el petróleo y excluir a los extranjeros, cortando así la salida de riqueza que el control extranjero supuestamente inducía y potenciando nuevos campos de empleo. En 1935 el tipo de nacionalismo yrigoyenista reapareció en una pequeña organización de radicales jóvenes llamada Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA). La FORJA encarnaba sobre todo dos principios: la democracia popular («La historia de Argentina —declaraba su primer manifiesto en junio de 1935— demuestra la existencia de una lucha permanente del pueblo por la soberanía popular») y el antiimperialismo («Somos una colonia; queremos una Argentina libre»¹³).

Durante un decenio, hasta que muchos de sus miembros la abandonaron para unirse a Perón en 1945, la FORJA fue uno de los principales agentes irritantes para Alvear dentro del radicalismo. Los «forjistas» intensificaron la anglofobia que los Irazusta habían contribuido a crear. En su muy leída obra *Ferrocarriles Argentinos*, publicada en 1940, Raúl Scalabrini Ortiz, miembro marginal de la FORJA, calificaba a las compañías ferroviarias británicas de explotadoras corruptas y agentes de la dominación colonial británica. Durante la segunda guerra mundial el antiimperialismo condujo a la FORJA a una acérrima defensa de la neutralidad contra la postura a favor de los aliados que adoptaron Alvear y la mayoría de los otros radicales. Pero aunque sus campañas fueron poderosas y eficaces, la FORJA tenía sus limitaciones como movimiento antiimperialista con todas las de la ley. Sus preocupaciones y objetivos primordiales eran traspasar las propiedades o los recursos controlados por extranjeros a nativos. Al igual que los radicales en general, la FORJA tendía a pasar por

13. Citado en Arturo Jauretche, «De FORJA y la década infame», en Alberto Ciria, ed., *La década infame*, Buenos Aires, 1969, p. 91.

alto los asuntos más de fondo y en última instancia más difíciles como la industria y la reforma social, y su papel principal, totalmente en consonancia con la tradición radical, era promover los intereses de la clase media «estatista» que los radicales representaban.

El nacionalismo, movimiento de la extrema derecha cuyos orígenes y contenido eran más complejos que los de la FORJA, se convirtió en la segunda corriente nacionalista del decenio de 1930. Al principio los nacionalistas comprendían el pequeño grupo de partidarios civiles de Uriburu en 1930-1932 que había apoyado su intento de reformar el sistema de representación en el Congreso y crearon grupos paramilitares como la Legión Cívica. Hasta cierto punto el nacionalismo era un eco del federalismo del siglo XIX. Sus miembros detestaban Buenos Aires como agente de dominación interna sobre las provincias y como símbolo de «materialismo corrupto», al tiempo que idealizaban las provincias, las zonas rurales y sus habitantes porque, a su modo de ver, encarnaban las virtudes que los nacionalistas consideraban característicamente hispánicas y argentinas. Durante su período de formación antes de 1930 había sido un movimiento principalmente literario y luego había asimilado varias influencias ultraconservadoras de Europa, las más importantes de las cuales eran el clericalismo español y las doctrinas de Charles Maurras, el monárquico francés. Estas influencias europeas dieron forma a sus ingredientes básicos, el antiliberalismo y el anticomunismo. En el corazón del nacionalismo residía el convencimiento de que el liberalismo y la democracia popular representaban un mero preludio del comunismo. Un sistema político liberal, según declaró Roberto de Laferrère, uno de los principales nacionalistas de los años treinta, «permite toda clase de propaganda sediciosa. Una poderosa organización comunista ha surgido entre nosotros ... La democracia nos entrega desarmados a estas fuerzas del socialismo extremo y la anarquía».¹⁴

Los enemigos de los nacionalistas atacaban las exageraciones infundadas y la paranoia que había debajo de esta clase de declaraciones y tachaban a los nacionalistas de «fascistas criollos». De hecho, en el movimiento había muchos elementos e imitaciones fascistas. Sus miembros veneraban la dictadura en los mismos términos que Mussolini («impulsar acciones ... silenciar la disensión ... hacer trabajos constructivos») y rendían culto a la voluntad, la intuición y la virilidad, buscando la «grandeza de la vida ... mediante un salto a la disciplina esforzada».¹⁵ Al igual que el fascismo, el nacionalismo se encontraba a gusto llevando a cabo cruzadas contra antitipos míticos. Consideraba que tanto el liberalismo como el comunismo eran de origen judío y sostenía que los judíos controlaban simultáneamente el capitalismo mundial y el proletariado revolucionario del mundo. Típico de lo que escribían los nacionalistas fue el ataque contra el «nihilista judío, el explotador pero también el director secreto del proletariado mundial ... el judío sin Dios y sin nación que se está infiltrando en las mentes de nuestros jóvenes proletarios».¹⁶

Durante todo el decenio de 1930 los nacionalistas encabezaron ataques contra destacadas familias judías, cuyos trapos sucios sacaban al sol. Estos ataques quedaron íntimamente asociados con su creencia dogmática de que en Argentina la ciudad

14. Ibarguren hijo, *Laferrère*, pp. 69-70.

15. Véase Comisión de Estudios, *El nacionalismo*, pp. 110-111.

16. Federico Ibarguren, *Orígenes del nacionalismo argentino, 1927-1937*, Buenos Aires, 1969, p. 398.

explotaba al campo, toda vez que en la propaganda nacionalista lo urbano era con frecuencia sinónimo del judaísmo. Ejemplos típicos de sus campañas antisemitas fueron las denuncias del monopolio de las casas exportadoras de cereales de Buenos Aires, la mayoría de las cuales eran propiedad de judíos. Los nacionalistas no eran en modo alguno los únicos que atacaban dichas empresas, ya que desde hacía mucho tiempo éstas eran blanco favorito de todos los que apoyaban a los agricultores. Pero los nacionalistas destacaron de los demás por su racismo violento. Los Bemberg, que eran judíos, fueron otro de sus blancos principales: los nacionalistas sostenían que el cabeza de la familia Bemberg, Otto, había maniobrado para hacerse con el monopolio de la industria cervecera y había utilizado los beneficios para acaparar tierras de agricultores y estancieros arruinados cuyas hipotecas habían sido ejecutadas.

Así pues, había en el nacionalismo ecos de la Italia fascista y algunos de la Alemania nazi, unidos a un ruralismo místico y una defensa agresiva de los intereses ganaderos más pequeños y los peones que dependían de ellos. En otros aspectos el nacionalismo apareció como vástago del conservadurismo español y como una versión más débil del movimiento nacionalista español que hizo la guerra civil bajo Franco. En los primeros años treinta Argentina vivió un renacimiento del catolicismo que alcanzó su apogeo durante el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires en 1934. En ese momento sacerdotes radicales y católicos laicos llegaron a ejercer un papel dominante en el movimiento y a dar forma a sus ideas centrales. En el corazón del nacionalismo había un concepto orgánico de la sociedad que tenía sus raíces en la Antigüedad y en el escolasticismo católico. Al igual que el manifiesto que Uriburu había publicado en 1932, los nacionalistas consideraban que la misión del gobierno era servir al «público» o al «bien común» y definían la sociedad humana en los términos espirituales y corporativistas que constituían el núcleo del catolicismo conservador, rechazando el liberalismo porque trataba a la humanidad en términos falsamente individualistas y el comunismo por su ateísmo y su materialismo.

Pero la gran peculiaridad del nacionalismo que explica en gran parte su importancia después de 1940 era que yuxtaponía las actitudes más reaccionarias y un compromiso con la reforma progresista. Entre las principales influencias que recibió el nacionalismo se encontraban las encíclicas pontificias de 1891 y 1931, *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno*. Ambos documentos contenían ataques encarnizados contra el liberalismo y el socialismo, pero también planteaban el asunto de la «justicia social», esto es, un mejor ordenamiento de las relaciones entre las clases sociales para llevar a buen término la antiquísima búsqueda católica de una «sociedad armoniosa», orgánica. A mediados de los años treinta, mientras despotricaban contra los «liberales» y los «comunistas», los nacionalistas proclamaban su preocupación por la clase obrera y la reforma social. «La falta de equidad — declaró *La Voz Nacionalista* —, de bienestar, de justicia social, de moralidad, de humanidad, ha convertido el proletariado en un animal de carga ... incapaz de disfrutar de la vida o de los avances de la civilización».¹⁷ En 1937 uno de los grupos antisemitas más estridentes, la Alianza de la Juventud Nacionalista, sumó las exigencias de que se prohibiera la inmigración de judíos y se expulsara a los que ocupaban cargos públicos no sólo a la «justicia social» sino a lo que calificó de reforma agraria «revolucionaria» para acabar con la «oligarquía». Los nacionalistas destacaban entre los primeros en proponer

17. *La Voz Nacionalista*, «El nacionalismo argentino», Buenos Aires, 1935, p. 5.

la industrialización y la nacionalización de los servicios públicos de propiedad extranjera. Ya en 1931 propusieron que se creara una industria nacional del acero. En 1932 uno de sus periódicos atacó la Unión Telefónica, que era de propiedad norteamericana, tachándola de «empresa extranjera que monopoliza un servicio público y que debería haberse nacionalizado hace ya algún tiempo».¹⁸

El nacionalismo no era un «partido» político, designación que sus miembros rechazaban totalmente porque la palabra «partido» implicaba la proposición liberal de que un mero segmento de la comunidad podía mantener una identidad distinta de la sociedad en general; «los partidos», según los nacionalistas, «escinden» una entidad indivisible: la nación. Igualmente, los nacionalistas se negaban a tomar parte en todas las elecciones, toda vez que consideraban que las prácticas electorales eran otro derivado del liberalismo. Durante todo el decenio de 1930 el movimiento consistió en una docena y pico de facciones que a menudo competían y se peleaban unas con otras y al frente de las cuales había miembros de la intelectualidad cuyas principales actividades eran difundir propaganda, celebrar mítines públicos y organizar esporádicas manifestaciones callejeras. Al finalizar el decenio, además de la publicación de numerosos periódicos y revistas, los nacionalistas ya habían recurrido al «revisionismo histórico», la reescritura de la historia argentina para atacar lo que para ellos era la visión histórica tergiversada de los liberales, los héroes de la historiografía liberal, los ingleses, y sobre todo para rehabilitar la figura de Juan Manuel de Rosas como el gran modelo del liderazgo político al que aspiraban. «Es una vil mentira — declaró Marcelo Sánchez Sorondo — que debemos nuestra existencia histórica al liberalismo. Al liberalismo sólo le debemos la entrega de nuestras tierras fronterizas, y el tutelaje de los extranjeros.»¹⁹ Los gobiernos de Juan Manuel de Rosas, en cambio, eran ejemplos de la «colaboración de cada uno de los elementos de la sociedad: el líder, la minoría ilustrada y la masa».²⁰ Por tanto, poco después de 1930 los nacionalistas habían renunciado a la aspiración uriburista a la «democracia verdadera» por un compromiso con el corporativismo autocrático bajo un líder militar. A pesar de este cambio, el gobierno seguía teniendo la obligación de promover tanto el «bien común» como la «justicia social».

Durante los años treinta estas sectas derechistas empezaron a tener una influencia muy superior a la que correspondía a su importancia numérica, pues eran sólo varios centenares de activistas. Los nacionalistas interpretaron un papel importante en la formación del incipiente movimiento antiimperialista, que iba encontrando partidarios no sólo en la derecha, sino también en la izquierda y el centro. El antiimperialismo argentino creció sobre una red de teorías relativas a conspiraciones del tipo que era fundamental para las tácticas y técnicas políticas de la ultraderecha. En gran parte de la propaganda antiimperialista, por ejemplo, los ingleses y, más adelante, los norteamericanos eran vistos en términos muy parecidos al concepto que los nacionalistas tenían de los judíos, como fuerzas conspiratorias encubiertas y malévolas. Así, Raúl Scalabrini Ortiz, supuesto izquierdista, criticó a los ingleses empleando los mismos términos y el mismo vocabulario que aparecían en uno de los folletos antisemitas de los nacionalistas: «Tenemos entre nosotros un enemigo que ha alcanzado la dominación mundial por medio de la astucia y la habilidad de

18. *Crisol*, 21 de febrero de 1932.

19. Marcelo Sánchez Sorondo, *La revolución que anunciamos*, Buenos Aires, 1945, p. 35.

20. Véase Tulio Halperín Donghi, *El revisionismo histórico argentino*, Buenos Aires, 1971, p. 14.

sus maniobras indirectas, por medio de sus actos de mala fe, por medio de sus constantes mentiras».²¹

En el decenio de 1930 el movimiento nacionalista siguió siendo principalmente civil y, a pesar de las actividades de Molina, Kinkelín y un puñado de otros correli-gionarios, aún no había conseguido penetrar mucho en el ejército.

ARGENTINA EN VÍSPERAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Poco antes de la segunda guerra mundial Argentina se encontraba más o menos en la misma posición próspera y prometedora de la que gozara en vísperas de la primera. Sólo la reciente expansión del Buenos Aires industrial y la creciente salida de población de las pampas ofrecían un contraste notable con las circunstancias de treinta años antes. El país mantenía su diversidad regional, junto con la desigualdad estructural que concentraba una parte desproporcionada de la población, la riqueza y los recursos en Buenos Aires y sus alrededores. Desde 1914 habían aparecido nuevos centros de crecimiento en las regiones, tales como el cinturón algodonero del Chaco, más allá de las pampas, pero en otros sentidos el interior permanecía en gran parte igual que antes: la Patagonia era una tierra vacía de inmensas granjas ovinas; el valle del Río Negro, una zona de cultivo de fruta en pequeña escala; Mendoza y San Juan, productores de vino, y Tucumán, fuente del azúcar. En el lejano nordeste y el lejano noroeste persistían las prácticas de trabajo forzado que los reformadores bonaerenses habían denunciado hacía ya mucho tiempo. El interior seguía siendo extremadamente pobre y en gran parte despoblado. En 1941 los ingresos combinados de nueve provincias del interior ascendían a sólo el 1 por ciento del total de ingresos imponibles en toda la nación, y los ingresos per cápita de Catamarca y Santiago del Estero, dos de las provincias más pobres, representaban sólo un 10 por ciento de los de la ciudad de Buenos Aires. Las enfermedades causadas por la nutrición deficiente seguían siendo endémicas en el interior, sobre todo entre los obreros de la industria azucarera de Tucumán, que continuamente eran víctimas de la malaria, el impétigo e incluso la lepra. En Tucumán, como en gran parte del interior, el 50 por ciento de los nacimientos eran ilegítimos.

Pese al reciente desarrollo industrial, la inmensa clase media de Buenos Aires había experimentado pocos cambios durante la última generación y seguía estando muy agrupada en los servicios, las profesiones liberales, el comercio y la Administración pública. En 1944 Felix Weil describió la clase media diciendo que era:

Una masa bastante amorfa de elementos independientes formada por artesanos, mercaderes, propietarios de tiendas, oficinistas y agentes de empresas de exportación e importación, empleados de empresas de servicios públicos e innumerables beneficiarios del sistema de patronazgo político que viven de salarios y estipendios de todo tipo. Dado que no hubo industria en gran escala hasta que la industrialización aumentó después de 1930, no había ningún lugar para una clase media independiente. Lo que había eran los restos de una economía colonial unida al sistema que consistía en dar sincuras como recompensa política. Esta masa es necesariamente amorfa en la política

21. Raúl Scalabrini Ortiz, «De: Política británica en el Río de la Plata», en Ciria, ed., *La década infame*, p. 198.

y en las filosofías políticas. Se convierte fácilmente en objeto de manipulación por parte de las maquinarias políticas.²²

Durante todo el decenio de 1930 sucesivos gobiernos conservadores habían cortado deliberadamente el acceso de la clase media al poder y sus prebendas. Aunque las escuelas, academias y universidades administradas por la clase media mantenían la ciudad como centro de alta cultura, con frecuencia eran caldo de cultivo de aspiraciones sociales que luego se veían bloqueadas y de frustraciones cumulativas. Además de Weil, otros observadores hicieron comentarios sobre la congestión de las profesiones liberales, el descenso de las tasas de nupcialidad y natalidad y el aumento de la tasa de suicidios de la clase media en este período. En un artículo titulado «Esplendor y decadencia de la raza blanca», publicado en 1940, el economista Alejandro Ernesto Bunge instó a sus compatriotas, «en particular a los más bienaventurados materialmente», a practicar «matrimonios católicos» y criar familias numerosas. «A partir de ahora —declaró—, con todo nuestro vigor, nuestro patriotismo y con un abnegado espíritu cristiano, deberíamos procurar restaurar la aceptabilidad de las familias numerosas y la idea de que los hijos son una bendición».²³

A primeros de 1940 muchos observadores empezaban a tomar nota de los cambios económicos y sociales habidos en años recientes. Pero esto se reflejaba poco en la política del gobierno. Durante los años treinta los líderes conservadores reconocían frecuentemente que las restricciones que habían impuesto a las importaciones y sus intentos de reencauzar el comercio exterior fomentarían el crecimiento industrial, pero seguían estando muy lejos de adoptar un compromiso deliberado con el desarrollo industrial. Por regla general, su perspectiva había cambiado poco desde el siglo XIX: argüían que un poco de desarrollo industrial reforzaría la balanza de pagos y contribuiría a evitar el malestar laboral al crear nuevos puestos de trabajo. El economista norteamericano George Wythe exageró al declarar en 1937 que: «El nuevo camino de [industrialización] ha sido aceptado y no es posible volverse atrás».²⁴ El Banco Central pintó un cuadro más fiel a la realidad en 1938: «La capacidad del país para la industrialización es limitada ... y si incrementamos demasiado el poder adquisitivo, la producción no aumentará y subirán los precios ... con todas las consecuencias desafortunadas en el coste de la vida».²⁵

Lo que querían los miembros del gobierno y las entidades como el Banco Central no era intensificar el desarrollo industrial, sino tratar de restaurar las condiciones que existían antes de 1930. Así pues, sus medidas favorecieron los intereses exportadores y procuraron reactivar las inversiones extranjeras. Los encargados de formular la política hicieron hincapié repetidas veces en los obstáculos para el desarrollo industrial: el riesgo de inflación, las escasas e inaccesibles reservas de carbón y mineral de hierro, las insuficiencias de la electricidad y el transporte, las escaseces de capital y la pequeñez del mercado nacional, que impedía las economías de escala. Fuera del reducido grupo de nacionalistas económicos, estos puntos de vista predo-

22. Weil, *Argentine Riddle*, p. 4.

23. Alejandro E. Bunge, «Esplendor y decadencia de la raza blanca», *Revista de Economía Argentina*, n.º 259 (enero de 1940), pp. 9-23.

24. Citado en Vernon L. Phelps, *The International Economic Position of Argentina*, Filadelfia, 1938, p. 7.

25. Citado en Eduardo F. Jorge, *Industria y concentración económica*, Buenos Aires, 1971, p. 172.

minaban entre otros grupos políticos organizados, entre ellos una gran mayoría de los radicales.

A finales del decenio de 1930 la expansión industrial despertaba mayor interés entre los sindicatos al percibir éstos que la nueva industria significaba nuevos puestos de trabajo. Algunos, al igual que los nacionalistas, argüían que una política de progresiva redistribución de la renta debía acompañar al apoyo a la industria, ya que poner más dinero en manos de los asalariados contribuiría a ampliar los mercados e intensificaría el crecimiento industrial. Con todo, las ideas de esta clase recibían poco apoyo de los propios industriales, que continuaban pensando que los salarios bajos eran la clave de los beneficios elevados. Ejemplo típico de esta perspectiva era la Federación Argentina de Entidades del Comercio y la Industria, que hacía una guerra implacable contra los sindicatos porque «perturbaban» los mercados de trabajo. Algunos industriales, sin embargo, habían empezado a apoyar el proteccionismo. Poco a poco las ideas proteccionistas fueron ganando aceptación después de 1933, cuando la Unión Industrial Argentina, la mayor y la más poderosa de las asociaciones patronales urbanas, dirigió una campaña contra el «dumping» extranjero. Las campañas posteriores de la Unión atacaron las anomalías en los aranceles vigentes, que, según se alegó, con frecuencia imponían derechos más elevados a las materias primas industriales que a los productos acabados. Pero entre todos estos grupos, sindicatos y patronales por igual, no se había hecho ningún esfuerzo concertado o sostenido por promover el desarrollo industrial.

A comienzos de 1938 la presidencia de seis años de Agustín Pedro Justo llegó a su fin. En ese momento, en el epílogo de la prosperidad de antes de la guerra, no sólo crecían las influencias nacionalistas sino que habían aparecido claras diferencias en el seno de la Concordancia gobernante entre reformadores y reaccionarios. Las elecciones presidenciales de 1937, que la Concordancia volvió a ganar fácilmente gracias al fraude extenso, reflejaron esta división: la presidencia pasó a Roberto María Ortiz, que era reformador, pero la vicepresidencia fue para Ramón S. Castillo, líder de los conservadores.

Ortiz, que era hijo de un abacero vasco y hombre que se había hecho una posición por su propio esfuerzo, fue el primer presidente electo que procedía de la clase media urbana descendiente de inmigrantes. Ortiz se había ganado la vida y amasado una fortuna principalmente como abogado de varias compañías ferroviarias británicas y, por tanto, era impopularísimo entre los nacionalistas. Después de ser diputado radical durante el primer mandato de Yrigoyen (1916-1922), Ortiz ingresó en las filas de los antipersonalistas en 1924 y fue ministro de Obras Públicas bajo Alvear y luego ministro de Hacienda bajo Justo. Como sugería su carrera anterior, Ortiz era un demócrata antiyrigoyenista con unas impecables credenciales liberales-conservadoras: «liberal» por sus vínculos con los ingleses y su promesa de poner fin al fraude electoral («Creo sinceramente en los beneficios de la democracia» —dijo al aceptar la candidatura a la presidencia en julio de 1937), y «conservador» por su temor al «gobierno de la chusma» yrigoyenista. Castillo, en cambio, procedía de Catamarca, una de las provincias occidentales más subdesarrolladas, bastión de una oligarquía de hacendados. Durante muchos años había sido decano de la facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires hasta convertirse en ministro de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de Justo.

Al acceder Ortiz a la presidencia, creció la tensión entre el gobierno nacional y Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fresco era un ex con-

servador que, al igual que el propio Ortiz, había tenido vínculos con los ferrocarriles británicos pero ahora se presentaba como nacionalista. Lanzaba ataques continuos contra el «comunismo», perseguía a quienes consideraba partidarios del mismo y buscó la amistad y el patronazgo de Mussolini durante una visita a Roma en 1938. Pero también se presentaba como paladín de la reforma social. Bajo Fresco el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizó obras públicas en gran escala entre las que había planes para edificar viviendas públicas y un amplio programa de construcción de carreteras. Patrocinó leyes laborales tanto para los trabajadores urbanos como para los rurales e hizo algunos intentos de crear una red de sindicatos controlados por su administración. En la capital federal le consideraban fascista.

El gobierno de Ortiz empezó a recortar los fondos y las subvenciones federales destinados a la provincia, lo cual obligó a Fresco a incurrir en déficits presupuestarios y más adelante a reducir sus actividades. Finalmente, en marzo de 1940 Ortiz decretó una intervención federal en la provincia de Buenos Aires para derribar a Fresco, al que acusó de tramar un fraude en las próximas elecciones para gobernador. Poco después Ortiz llevó a cabo intervenciones en otras provincias, entre ellas Catamarca, lo que disgustó mucho a su vicepresidente. En las elecciones para el Congreso de mayo de 1940 los radicales obtuvieron su mayor victoria desde hacía más de un decenio y volvieron a estar en mayoría en la Cámara de Diputados. Así pues, a comienzos de 1940 la política argentina parecía seguir el mismo rumbo que después de la elección de Roque Sáenz Peña en 1910. Capitanada por Ortiz, la Concordancia, al igual que los conservadores de treinta años antes, se había comprometido a restaurar la democracia. Y, como antes, la democratización abrió la puerta a los radicales.

ECONOMÍA Y POLÍTICA, 1940-1943

En el mismo momento en que tan fuerte parecía, la Argentina liberal se encontraba al borde del derrumbamiento. En mayo de 1940 Alemania invadió y ocupó la Europa occidental, y después de evacuar sus maltrechas fuerzas de las playas de Dunkerque, Gran Bretaña impuso un bloqueo naval contra el continente. Las conquistas alemanas y el bloqueo significaron un golpe para la economía argentina que fue aún más grave que el de 1929-1930. El comercio cayó en picado inmediatamente: en 1940 las exportaciones se redujeron en un 20 por ciento. En 1938 el 40 por ciento de las exportaciones de Argentina tuvieron por destino la Europa occidental, pero en 1941 la proporción había quedado reducida a sólo un 6 por ciento, casi toda dirigida a España y Portugal, que eran neutrales. Gran Bretaña importaba la mayor parte de la carne argentina y el mercado británico permaneció abierto, pero el continente europeo se había hecho inaccesible para la mayor parte de los cereales argentinos, y el resultado fue que los efectos más graves de la guerra fueron para la agricultura y los agricultores, en vez del ganado y los ganaderos. A finales de 1940 el tráfico en los puertos argentinos había quedado reducido a la mitad. Tanto las exportaciones como las importaciones se hundieron hasta niveles inferiores al punto bajo de la depresión.

Las condiciones perjudiciales que surgieron a finales de 1940 persistieron durante los siguientes cuatro años de guerra. En 1937 Argentina había exportado 17 millones de toneladas de cereales, pero en 1942 sólo pudo exportar 6,5 millones de to-

neladas. Los precios agrícolas alcanzaron una media de sólo dos tercios de los correspondientes a finales del decenio de 1930. Dentro de la agricultura en conjunto la guerra causó los mayores daños al maíz, ya que antes de la contienda alrededor del 90 por ciento del maíz iba a la Europa continental. Durante los últimos años treinta las exportaciones de maíz alcanzaron una media de más de 6 millones de toneladas, pero en 1941-1944 la cifra fue de sólo 400.000 toneladas. En 1941 las importaciones de carbón ya eran sólo un tercio de las de 1939, y en 1943, una sexta parte. En 1942 las importaciones de petróleo representaron la mitad del nivel de 1939 y en 1943, otra vez la mitad.

Inmediatamente antes de la guerra los importadores argentinos habían hecho pocos esfuerzos por formar una reserva de maquinaria, materias primas o piezas de recambio, por lo que ahora fue necesario improvisar con los materiales disponibles. Al verse privados del abastecimiento normal de carbón, los ferrocarriles recurrieron a quemar leños de quebracho, como hicieron en 1914-1918, y luego, al disminuir las reservas de leña, echaron mano del excedente de maíz. En 1944 los cereales satisfacían alrededor de un tercio de las necesidades energéticas del país. Al disminuir las reservas de petróleo importado, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hizo grandes esfuerzos por incrementar la producción y finalmente logró doblar la de los pozos de Comodoro Rivadavia. Aun así, la escasez de petróleo obligó a recurrir al uso generalizado de linaza como sucedáneo. La disminución de las importaciones ofreció grandes y nuevas oportunidades a los fabricantes argentinos y los turnos permanentes no tardaron en ser cosa común en las fábricas de Buenos Aires. Sin embargo, la tasa de crecimiento industrial durante la guerra fue un tanto menor que a finales del decenio de 1930, puesto que los industriales se vieron perjudicados ahora por las repetidas escaseces de electricidad y por la imposibilidad de obtener los suministros que necesitaban en el extranjero. Al mismo tiempo, el paro urbano siguió siendo prácticamente inexistente porque tanto la manufacturación como los servicios absorbieron sin parar a los nuevos trabajadores, entre los que había gran número de mujeres. Las reparaciones se convirtieron en el mayor componente del nuevo sector de servicios y un ejército de mecánicos versátiles se esforzaba por mantener en funcionamiento la maquinaria, los coches y los camiones viejos así como el material rodante que llevaba treinta años circulando.

El derrumbamiento de las exportaciones agrícolas a partir de mediados de 1940 tuvo algunos efectos beneficiosos en la economía urbana, toda vez que hizo que el pan fuese barato y el coste de la vida fuera relativamente estable. Pero la decadencia de la agricultura causó problemas en el campo. Durante la guerra tuvieron lugar dos procesos simultáneos: la agricultura decayó, pero la ganadería registró una expansión porque Gran Bretaña incrementó de manera ininterrumpida sus importaciones de carne. El resultado fue un gran cambio de la agricultura a la ganadería y la extensión de tierra cultivada disminuyó en más de 3 millones de hectáreas durante la contienda. Se calcula que la tierra destinada al cultivo de trigo disminuyó en un 8,4 por ciento, pero la destinada al maíz disminuyó en más de un 40 por ciento. Los excedentes de maíz ayudaron a intensificar el cambio a la ganadería, ya que hicieron crecer la cría de cerdos, actividad cuya importancia se multiplicó por dos durante la guerra. Hasta cierto punto el crecimiento del cultivo de forraje —alfalfa, cebada y avena— para la ganadería y algunos cultivos industriales nuevos encabezados por los girasoles compensó el descenso de los cereales básicos de antes. Pero la tendencia primordial fue abandonar el cultivo de cereales por la ganadería. Entre 1937 y

1947 la cabaña de las pampas aumentó en un 25 por ciento, lo que equivalía a 3,5 millones de cabezas de ganado, mientras la población humana descendía en alrededor de medio millón. Los intentos gubernamentales de detener la salida de población, tales como el control de los arriendos que se introdujo en 1942, resultaron totalmente ineficaces y no consiguieron impedir que la gente abandonara el campo.

En cambio, las condiciones en el interior empezaron a divergir de las que existían en las pampas. Los productores del interior respondieron a la rápida expansión del mercado interno centrado en Buenos Aires incrementando la producción. El crecimiento fue especialmente acentuado en regiones como el Chaco, donde aún había tierra virgen disponible. En otras partes de las regiones campesinas colonizadas del noroeste y el nordeste el incremento de la producción para el mercado aumentó la demanda de mano de obra y, por tanto, contribuyó durante un tiempo a atraer habitantes a la región. Con todo, el crecimiento también aumentó la demanda de una reserva de tierra relativamente fija, y de esta manera, a largo plazo, provocó una expansión de las haciendas que producían para el mercado a expensas de las pequeñas propiedades campesinas orientadas a la subsistencia. El resultado final fue un proceso de cercamiento de los campesinos y el principio de una polarización latifundio-minifundio que con el tiempo se volvería aguda y a partir de los años cincuenta provocaría una segunda oleada de huidas del campo, mayor aún que la primera. De esta forma el interior acabaría substituyendo a las pampas como origen principal de inmigrantes internos.

A finales de 1940 el gobierno conservador procuró responder a la caída del comercio con un Plan de Reactivación Económica, más conocido con el nombre de Plan Pinedo, pues su autor principal era Federico Pinedo, que cumplía un segundo mandato como ministro de Hacienda. El plan se concibió basándose en la suposición de que durante el año siguiente, 1941, las exportaciones permanecerían en niveles inferiores a los de la depresión. Si así ocurría, el resultado sería «crisis industrial, paro y miseria en las ciudades, un derrumbamiento general de la actividad económica que tendría consecuencias sociales de alcance imprevisible».²⁶ Por tanto, Pinedo propuso, al estilo del New Deal, que se usara el gasto público como mecanismo anticíclico para reactivar la demanda, minimizar la inflación y salvaguardar el empleo. Sobre todo, la medida estaba relacionada con las «consecuencias sociales de alcance imprevisible», palabras que era fácil interpretar como referencia a la agitación laboral de la primera guerra mundial, que había culminado con la «huelga revolucionaria» de enero de 1919.

El Plan Pinedo representó la entrada de Argentina en el campo de la planificación económica global. En primer lugar, proponía que se ayudara al sector agrícola ampliando los planes de financiación que administraba la junta que el propio Pinedo había creado siete años antes. El gobierno aumentaría sus compras de cereales a los agricultores y ofrecería precios más altos, al tiempo que instaría a los terratenientes a ser comedidos con los arriendos para que a los arrendatarios les quedasen unos beneficios suficientes. En segundo lugar, el plan procuraba fomentar un crecimiento industrial más rápido y empezar a exportar productos industriales. Proponía que se creara un nuevo fondo crediticio respaldado por el estado para la industria y que se introdujeran reintegros, plan que la Unión Industrial pedía desde hacía mucho tiempo y que dispo-

26. Véase «El plan de reactivación económica ante el Honorable Senado», *Desarrollo Económico*, 19, n.º 75 (1979), p. 404.

nía que se reembolsaran a los exportadores de manufacturas los derechos arancelarios en que incurrieran al importar materias primas o bienes de capital. Como complemento de estas medidas, el gobierno intentaría firmar tratados de libre comercio con otras naciones de América Latina con el fin de crear mercados nuevos para las manufacturas y ayudar a los productores a beneficiarse de las economías de escala. En tercer lugar, el plan proponía que se financiara la expansión de la industria de la construcción, que el gobierno creía capaz de proporcionar más de 200.000 nuevos puestos de trabajo. Por medio de programas de construcción subvencionados por el gobierno, se ofrecerían casas baratas con hipotecas a largo plazo a los obreros y los empleados.

En 1940 el gobierno todavía era sumamente sensible a la acusación de que se inclinaba hacia la financiación mediante déficit con el consiguiente riesgo de inflación. Pinedo declaró que el plan no se financiaría imprimiendo dinero, sino recurriendo a empréstitos internacionales y que los desembolsos se dirigirían hacia las actividades productivas en vez de emplearlos como meras subvenciones para los parados. El Plan Pinedo manifestaba una preocupación mucho mayor por la agricultura que por la industria, ya que el total de las sumas asignadas para conceder créditos a la industria representaba sólo una sexta parte de las destinadas a los agricultores. Así pues, el cambio a favor de la industria siguió siendo relativamente pequeño. Pinedo declaró que el gobierno apoyaría únicamente a las «industrias naturales». Esta expresión era de uso común entre los liberales desde hacía setenta años y significaba que sólo recibirían apoyo del gobierno las industrias que empleasen una cantidad considerable de materias primas del país y que fueran competitivas. Pinedo contaba con que la industria continuase teniendo un papel secundario en la economía. Al defender la medida ante el Congreso, dijo que las exportaciones agrícolas eran la «rueda principal» de la economía; la manufacturación y la construcción se convertirían en «ruedas menores» al lado de las exportaciones.

El Plan Pinedo ofreció una fórmula para un cambio controlado y cierto grado de diversificación que serviría para contener los efectos de la guerra y minimizaría la agitación y la dislocación. Pero no pasó de ser un plan, toda vez que apareció cuando el país ya había caído en una crisis política. En julio de 1940 el presidente Ortiz, que era diabético y ahora sufría ataques de ceguera, tuvo que abandonar el cargo y traspasar el poder al archiconservador Castillo. Durante un año, hasta que Ortiz finalmente dimitió, Castillo fue sólo presidente en funciones. Pero poco después de asumir la presidencia empezó a dar marcha atrás a la política de liberalización emprendida meses antes. En septiembre de 1940 Castillo ya había reorganizado parcialmente el gabinete y, con creciente enfado de los radicales, empezó a organizar elecciones en las provincias que Ortiz había puesto bajo «intervención». En estas elecciones hubo mucho fraude y los conservadores ganaron en la mayoría de ellas. Hacía muy poco que los radicales habían estado convencidos de que por fin iban camino de recuperar el poder y ahora se encontraron en peligro de ser estafados por Castillo. Empezó entonces una racha de conflictos enconados entre los partidos cuya víctima principal fue el Plan Pinedo. Aunque el Senado, que los conservadores dominaban, aceptó el plan, la mayoría radical en la cámara baja impidió que se debatiera. Los radicales rechazaron un llamamiento de Pinedo a favor de un «acuerdo histórico» para hacer frente a la crisis económica hasta que se les ofreciera una satisfacción por las recientes elecciones.

El Plan Pinedo fracasó debido a las largas peleas entre los radicales y los conservadores que Castillo había vuelto a provocar. Sin embargo, aun en el caso de que

la política no hubiese predominado, el plan contenía ciertos supuestos y expectativas que desde el principio hicieron dudar de su éxito. Durante los meses siguientes una serie de decretos ejecutivos puso en práctica muchas de sus propuestas relativas a la agricultura, pero poco hizo por resolver la crisis agrícola o detener la creciente oleada de emigrantes que llegaban a Buenos Aires.

El Plan Pinedo también planteó un asunto que ahora era de la mayor importancia: las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de promover la industria se apoyaba en la suposición de que Argentina podría continuar importando los bienes de capital y las materias primas de los que carecía. Sin embargo, para importar tenía que exportar o, en su defecto, asegurarse de una afluencia importante y continua de empréstitos e inversiones extranjeras. En ese momento, con el cierre de los mercados europeos para sus cereales, el mercado británico era el único importante que le quedaba. Pero al movilizarse para la guerra, Gran Bretaña no pudo seguir exportando a Argentina las mercancías que eran útiles para la industria local. El resultado fue que durante toda la contienda las ganancias de exportación de Argentina se acumularon en Gran Bretaña como «saldos en libras esterlinas». A finales de 1942 dichos saldos ya ascendían a 295 millones de pesos, y un año después, a 714 millones. Se calcula que en diciembre de 1944 los saldos superaban los mil millones de pesos, es decir, unos 80 millones de libras esterlinas. Los ingleses se comprometieron a proteger los saldos en libras esterlinas de cualquier devaluación futura de la libra; pero con la esperanza de cancelar la deuda por medio de exportaciones después de la guerra, mantuvieron los saldos «bloqueados» en Gran Bretaña, completamente fuera del alcance de los argentinos. En varias ocasiones los ingleses respondieron negativamente cuando Argentina pidió que los fondos bloqueados se usaran para liquidar parte de su deuda con Gran Bretaña o se canjearan por los activos de empresas de propiedad británica en Argentina; estas empresas, encabezadas por las ferroviarias, solían comprar la mayor parte de sus suministros en Gran Bretaña y, por tanto, ayudaban a las exportaciones británicas. Además, los ingleses jamás permitirían que los argentinos convirtieran en dólares sus saldos en libras esterlinas, toda vez que esto significaría volver a las prácticas comerciales del decenio de 1920, cuando las ganancias que obtenía Argentina de sus ventas a Gran Bretaña se usaban para incrementar las compras en Estados Unidos. Los ingleses consideraban que dichas prácticas eran sumamente desfavorables. En 1940 Argentina se encontró atrapada en la relación bilateral con Gran Bretaña que tan ansiosamente había buscado en 1933, pero de una manera que no tenía ninguna utilidad para el objetivo de «reactivación económica» de Pinedo.

Al preparar el plan de 1940, tanto Pinedo como Raúl Prebisch, que seguía siendo su principal consejero, previeron que Estados Unidos se convertiría en proveedor substitutivo de las mercancías que necesitaba la industria local y en nuevo mercado para las exportaciones argentinas. «El gran mercado de Estados Unidos —declaraba el plan— ofrece enormes oportunidades. No hay ninguna razón lógica por la cual nuestros productores no deban sacar provecho de él».²⁷ Durante un breve período a finales de 1940 Pinedo intentó orquestar una campaña pro Estados Unidos en Argentina y fomentar la idea de que estrechar los vínculos con el citado país daría por resultado una oleada de prosperidad. Los cálculos de Pinedo trascendían los objetivos puramente a corto plazo. A ojos de conservadores como él, Argentina se encontraba ahora en una encrucijada histórica. El antiguo vínculo con Gran Bretaña ya no

27. «El plan de reactivación económica», p. 423.

funcionaba y, de hecho, podía derrumbarse completamente si, como ahora parecía muy probable, Gran Bretaña era invadida y derrotada por los alemanes. Una nueva relación con Estados Unidos no sólo resolvería el asunto del comercio, sino que, además, también salvaguardaría con ello el dominio político de la clase que formaban los rancheros y los comerciantes y que sostenía el conservadurismo liberal. Por estas razones Pinedo abogó ahora por una «cooperación estrecha y total» con Estados Unidos.

Sin embargo, en este momento Argentina tampoco logró salvar las barreras que durante casi un siglo habían obstaculizado de manera persistente todos los esfuerzos por crear lazos estables y duraderos con Estados Unidos. Durante el decenio anterior las relaciones entre los dos países con frecuencia habían sido frías al extender Estados Unidos sus medidas proteccionistas contra las mercancías procedentes de Argentina. En 1930 la Ley Hawley-Smoot reforzó las restricciones que afectaban a la mayor parte de la carne y los cereales argentinos al subir los aranceles sobre la carne y el trigo e imponer nuevos derechos a las pieles. En 1935 todos los artículos agrícolas importados que se vendían más baratos que sus equivalentes norteamericanos fueron prohibidos por completo. En 1936 se impusieron nuevos derechos al sebo argentino. Durante todo el decenio de 1930 Estados Unidos se valió de las normas sanitarias, aparentemente dirigidas contra la propagación de la glosopeda, para excluir otras mercancías procedentes de Argentina. Tanto Uriburu como Justo formularon protestas intermitentes pero inútiles contra estas medidas, mientras Estados Unidos rechazaba la sugerencia que hizo Justo para la firma de un tratado bilateral entre los dos países. A modo de represalia, los conservadores, al igual que los radicales a finales de los años veinte, a veces hostigaban a compañías norteamericanas como la Standard Oil al tiempo que empleaban los controles de cambios para excluir las importaciones estadounidenses. Así pues, durante todo el decenio de 1930 las importaciones procedentes de Estados Unidos fueron una mera fracción de lo que habían sido en los años veinte, a la vez que las exportaciones argentinas a Estados Unidos quedaban reducidas a la mitad.

Los conflictos comerciales de los años treinta agudizaron las corrientes contra Estados Unidos que existían en estado latente en Argentina. Los argentinos empezaron a pasar por alto o atacaban la política «de buena vecindad» del gobierno Roosevelt, que renunciaba a la intervención armada de Estados Unidos en América Latina, y veían el movimiento panamericano patrocinado por Washington como un ejemplo de «maquiavelismo yanqui» cuyo verdadero propósito era controlar todo el continente sudamericano. Después de 1935 Argentina participó, a veces de mala gana, en las sucesivas conferencias panamericanas patrocinadas por Estados Unidos, y cuando, próximo ya el estallido de la guerra, los norteamericanos intentaron crear una alianza defensiva panamericana, el gobierno Ortiz aprobó la idea con poco entusiasmo. El comercio y la diplomacia habían quedado vinculados de forma inextricable. A finales de 1939 como mínimo algunos norteamericanos empezaban a reconocer la causa principal de la poca disposición a cooperar que mostraba Argentina. «Ganarse la amistad de Argentina —declaró John W. White, diplomático norteamericano en Buenos Aires— es en gran parte cuestión de comercio y economía.» «Debemos resignarnos —prosiguió— a hacer algunos sacrificios comerciales en aras de nuestra seguridad política y militar, y permitir la importación de productos argentinos.»²⁸

28. John W. White, *The Life Story of a Nation*, Nueva York, 1942, pp. 21, 311.

Pero en 1939-1940 lo único que obtuvo Argentina de Estados Unidos fue un crédito del Export-Import Bank de Nueva York para la compra de mercancías norteamericanas. Después de la Ley de Préstamos y Arriendos de enero de 1941, Washington empezó a proporcionar armas a sus aliados latinoamericanos encabezados por Brasil, pero dio a Argentina la prioridad más baja, negándole casi totalmente los pertrechos militares debido a su postura ante la defensa del hemisferio.

Sobre este trasfondo desalentador, pero como parte de la estrategia del Plan Pinedo, el gobierno Castillo emprendió finalmente negociaciones comerciales oficiales con Estados Unidos y buscó por medio de un tratado comercial —el primero con Estados Unidos desde hacía casi un siglo— las concesiones que se le habían negado durante tanto tiempo. Durante cierto tiempo los miembros del gobierno, los partidos políticos y hasta algunos sindicatos se convirtieron en partidarios entusiasmados del panamericanismo al pensar en la llegada de abundantes fondos y mercancías estadounidenses. Pero cuando se firmó el tratado en octubre de 1941, la decepción fue total, ya que ambas partes hicieron sólo concesiones simbólicas. Estados Unidos ofreció poco más que rebajar los aranceles que gravaban las mercancías que ya importaba de Argentina, tales como linaza y pieles. Las únicas mercancías nuevas que se importarían de Argentina eran algunos minerales raros, como el tungsteno, que necesitaban los fabricantes de armas estadounidenses, y algunos productos lácteos y vinos que Estados Unidos importaba antes de Francia e Italia. Pero la puerta siguió cerrada a los grandes productos básicos de Argentina, la carne y los cereales. Estados Unidos dio así la impresión de que el tratado era simplemente un recurso que la guerra hacía necesario y que no reflejaba ningún cambio importante en su política tradicional.

El fracaso del tratado de octubre de 1941 con Estados Unidos señaló el próximo fin del plan liberal-conservador para lograr la recuperación económica y mantener así el dominio político. Durante más de un año, desde que Ortíz se vio obligado a retirarse en julio de 1940, el equilibrio de poder en la Concordancia y el gobierno había ido cambiando. A principios de 1941 Pinedo había dimitido a raíz de las acusaciones instigadas por los nacionalistas sobre su involucración en tratos corruptos con las compañías ferroviarias británicas. En marzo el ministro de Relaciones Exteriores, José Luis Cantilo, liberal-conservador, también había dimitido, con lo que los ultraconservadores acaudillados por Castillo en persona habían pasado a dominar el gobierno. Pero Castillo se veía cada vez más aislado y repondió introduciendo en el gobierno a hombres que simpatizaban con los nacionalistas. Entre ellos se encontraba el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruíz Guiñazú, cuyas simpatías por la España del general Franco eran muy conocidas.

Así pues, el nacionalismo iba dejando de ser un movimiento situado al margen de la política. A medida que surgían nuevas organizaciones nacionalistas y su propaganda se intensificaba, los nacionalistas empezaron a arrastrar al país en varias direcciones nuevas. La primera era hacia la «soberanía económica», lo cual significa principalmente aumentar la industrialización y nacionalizar las compañías extranjeras en el sector de los servicios públicos. La segunda era lo que dio en llamarse «neutralidad activa», que quería decir, como la definió sucintamente un propagandista en enero de 1941, «no somos neutrales, estamos en contra de todos».²⁹ La tercera consistió en dar nuevo énfasis a la «justicia social». A finales de 1939 los nacionalistas se quejaban de que

29. *El Fortín*, enero de 1941.

en Santiago del Estero la gente carece de agua. [En otras partes] no hay pan. En el sur los niños no van a la escuela por falta de ropa. Pero en Buenos Aires un comité formado por dos ex presidentes, un vicepresidente, senadores, etcétera ... todos ellos argentinos recauda fondos para los hospitales de guerra en Francia.³⁰

En 1941 estos sentimientos habían adquirido una forma más agresiva. La Alianza Libertadora Nacionalista declaró que ahora los nacionalistas aspiraban al «liderazgo de las masas proletarias, para ponerlas en armonía con otros elementos de la sociedad hacia la conquista de la justicia y la grandeza de la Nación».³¹ Un típico programa nacionalista de 1941 indicaba las siguientes exigencias: «emancipación económica» para que el país pudiera recuperar «todas sus fuentes de riqueza» controladas por extranjeros; creación de «grandes mercados de consumo interno» por medio de la «industrialización»; redistribución de la «tierra no cultivada “para su trabajo”»; «representación funcional»; «salarios justos»; reintroducción de la educación católica en las escuelas; defensa contra las «amenazas a la unidad nacional» (eufemismo del antisemitismo y el anticomunismo); y medidas para garantizar la «preparación militar» del país.³² Estas ideas se expresaban comúnmente en las consignas «Soberanía», «Nacionalización», «Justicia Social».

Muchos observadores consideraban que todo esto eran síntomas de la ascensión del nazi-fascismo en Argentina. Años después Raúl Prebisch instó a sus oyentes a no subestimar la influencia nazi en Argentina durante el decenio de 1930. «La he visto; la he experimentado en persona cuando estaba en el Banco Central. La penetración del nazismo en el ejército, en ciertos periódicos, ayudada por los recursos de la embajada alemana era un elemento muy preocupante en Argentina».³³ En efecto, del mismo modo que los fascistas acechaban entre los nacionalistas en los años treinta, quienes acechaban ahora eran los simpatizantes nazis, entre ellos la redacción de *El Pampero*, un periódico nuevo de Buenos Aires cuyo director, Enrique Osés, recibía subvenciones de la embajada alemana a cambio de publicar boletines de guerra nazis y un poco de propaganda del mismo signo. En 1940-1941 algunos esperaban que Alemania proporcionase el tipo de relación que el grupo de Pinedo había querido establecer con Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos nacionalistas miraban a Alemania y al nazismo con hostilidad. Para los grupos hispanófilos católicos el nazismo simbolizaba «cuatrocientos años de apostasía» que había empezado con la Reforma, y los pro nazis locales recordaban a un nacionalista (refiriéndose a Carlos de Alvear, uno de los líderes del movimiento independentista argentino) «la postura de algunos de los hombres durante la revolución de mayo [de 1810], que contribuyeron a nuestra independencia de España sólo para hacernos depender de los ingleses».³⁴ En septiembre de 1939 un diplomático nazi en Buenos Aires comentó a sus superiores en Berlín: «El sentimiento antibritánico ... no debe interpretarse como pro alemán ... La nueva Alemania se ve como anticultural [*sic*] ... debido a su supuesta amenaza a la Iglesia católica».³⁵ Más que expresar una expansión de

30. *La Maroma*, octubre de 1939.

31. Citado en Comisión de Estudios, *El nacionalismo*, p. 50.

32. Estatutos del Consejo Superior del Nacionalismo, Buenos Aires, 1941.

33. Raúl Prebisch, «Argentine Economic Policies since the 1930s — Recollections», en Guido Di Tella y D. C. M. Platt, eds., *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Londres, 1986, p. 146.

34. Ibarguren hijo, *Laferrère*, p. 94.

35. Citado en Stewart Edward Sutin, «The Impact of Nazism on Germans in Argentina», tesis doctoral, Universidad de Texas, 1975, p. 68.

la influencia nazi-alemana, el nacionalismo surgió tras el creciente sentimiento antinorteamericano y en el vacío que dejaron los liberales-conservadores al abandonar la Concordancia. A finales de 1941, tras el fracaso de la aproximación a Estados Unidos, Argentina se encontró privada de mercados y pertrechos extranjeros. Además, se hallaba ante lo que percibía como una amenaza militar por parte de Brasil, país al que los norteamericanos estaban armando más rápidamente que a cualquier otro de la región. Impulsada por los nacionalistas, la respuesta de Argentina se volvió cada vez más enérgica y recalcitrante. Mientras reafirmaba su neutralidad y se negaba a doblegarse ante la presión estadounidense para que entrase en la alianza panamericana, empezó a buscar maneras de superar su aislamiento económico y militar.

A finales de 1941 las influencias nacionalistas adquirieron más fuerza y arraigo en el seno del ejército, donde la idea de crear una industria armamentista nacional ejercía una fascinación creciente, lo que a su vez aumentó mucho el apoyo al desarrollo industrial. Los anteriores planes de promoción industrial, como el de Pinedo, hacían hincapié en la industrialización *selectiva*, es decir, la creación de empresas cuyo objetivo fuera la eficiencia competitiva y que buscasen economías de escala por medio de la exportación. Lo que iba adquiriendo forma ahora era el compromiso con la industrialización *total*, dirigida por el ejército y el estado. Presionado por el ejército, el gobierno creó la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se encargaría de proyectar armamentos. Al cabo de un año y pico el coronel Manuel S. Savio trazó los planes para la creación de una industria del acero y propuso que el estado se encargara de financiarla y dirigirla.

Durante 1941 y 1942 Castillo se aferró al poder pese a que su base de apoyo era cada vez más estrecha y al crecimiento ininterrumpido de la oposición encabezada por los radicales. Si bien algunos nacionalistas como Ruiz Guiñazú habían entrado en el gobierno, la mayoría de ellos rechazaban el régimen por considerarlo demasiado «liberal», «oligárquico» o «electoralista». Con el Congreso controlado por los radicales, el presidente empezó a gobernar casi exclusivamente por decreto. El ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941 fue el pretexto primero para la imposición del estado de sitio y luego para usar la policía para impedir las manifestaciones (generalmente a favor de los aliados) y amordazar a la prensa. Pero Castillo no logró contener a la oposición y se vio obligado a cultivar al ejército. Con intervalos regulares ofrecía espléndidos banquetes a los que asistían jefes militares. La crisis y un ambiente de decadencia invadían ahora el país. John W. White, el observador norteamericano, percibió los «problemas de 1942» como

el gobierno reaccionario de la fuerza en manos de un partido minoritario, una economía cerealista excesivamente especializada con una dependencia casi impotente de los mercados extranjeros, una concentración poco saludable de la población en las ciudades, una clase agricultora explotada que no estaba instalada en la tierra que trabajaba, una tasa de natalidad en descenso y una elevada tasa de ilegitimidad y analfabetismo.³⁶

Las dificultades de Castillo se agravaron cuando las relaciones con Estados Unidos empeoraron de manera acusada al encabezar Ruiz Guiñazú un intento de fomentar el neutralismo, a expensas del panamericanismo, en otras partes de América Latina. En enero de 1942, en la conferencia panamericana de Río de Janeiro, cuyo

36. White, *Argentina*, p. 292.

propósito principal era persuadir a las naciones latinoamericanas a romper las relaciones diplomáticas con el Eje y Japón, Ruiz Guiñazú se opuso constantemente a Estados Unidos y, aunque no logró crear un «bloque meridional» fuera de la alianza panamericana, sí consiguió impedir que se accediera a romper las relaciones. La resolución que salió de Río meramente «recomendaba» la ruptura, pero dejaba que cada país determinara su propia forma de proceder. Bajo la dirección del secretario de Estado, Cordell Hull, Washington tomó represalias e impuso a Argentina un embargo total de armas, detuvo la concesión de créditos del Export-Import Bank y canceló el suministro de petroleros y maquinaria.

Después de la conferencia de Río, Estados Unidos empezó a calificar el gobierno argentino de «fascista» y «pro Eje». En Buenos Aires corrían rumores de una inminente invasión por parte de Brasil y de planes de ocupación de Comodoro Rivadavia, la principal fuente de petróleo, por la infantería de marina norteamericana. Pero mientras esta presión iba en aumento durante todo 1942, Castillo encontró apoyo inesperado por parte de Gran Bretaña. En los primeros años cuarenta Estados Unidos y Gran Bretaña tenían objetivos muy diferentes con respecto a Argentina. Lo que más interesaba a los norteamericanos era forjar un frente militar y político unido en toda América Latina y veía Argentina como un obstáculo para ello. Gran Bretaña, sin embargo, dependía cada vez más de la carne argentina y opuso resistencia a toda forma de proceder que amenazara los envíos de carne. Además, debido a los extensos intereses comerciales y financieros de Gran Bretaña en Argentina, los ingleses eran reacios a permitir que Argentina entrara totalmente en la órbita de Estados Unidos, como parecía probable que sucediera si Argentina se comprometía plenamente con el panamericanismo. Desde 1940 Gran Bretaña había visto con aprensión los intentos estadounidenses de hacerse con el control de las compañías británicas que actuaban en Argentina. Una propuesta norteamericana de dicho año, por ejemplo, sugería que los ingleses pagaran la carne argentina con acciones de las compañías británicas, que luego Argentina utilizaría para pagar las importaciones de Estados Unidos. Debido a ello, en Gran Bretaña la opinión era a menudo favorable a una Argentina neutral. Aunque la neutralidad argentina representaba el riesgo de permitir que espías del Eje transmitieran información sobre los movimientos de los barcos británicos, ayudaría a proteger los barcos que transportaban carne bajo bandera argentina de los ataques de los submarinos alemanes.

A partir de comienzos de 1942 el Departamento de Estado norteamericano buscó pruebas que corroborasen su creencia de que debajo de la neutralidad de Argentina se ocultaba el apoyo al Eje. Sacó a la luz las subvenciones que *El Pampero* recibía de la embajada alemana; acusó al gobierno argentino de favorecer la propaganda alemana contra los aliados y de tratar de acabar con las organizaciones pro aliados; descubrió que el gobierno de Buenos Aires tenía tratos con empresas alemanas y que se habían concedido visados a personas que eran sospechosas de ser espías alemanes. Pero el ministerio de Asuntos Exteriores británico adoptaba a menudo una postura diferente. A veces reconocía las dificultades prácticas de administrar la neutralidad en un país en el cual la mayoría de las potencias beligerantes poseían considerables intereses comerciales y nutridas colonias de expatriados. Los ingleses parecían reconocer la falta de un compromiso general con la causa aliada en Argentina. En general, la opinión pública estaba a favor de la democracia y temía el totalitarismo, pero estas simpatías se veían empañadas por las animosidades que seguía despertando Gran Bretaña a causa del Tratado Roca-Runciman y por la hostilidad pro-

fundamente arraigada contra Estados Unidos. Durante todo 1942 y comienzos de 1943 la opinión británica, aunque se basara en el interés propio, ofrecía una visión más exacta de los asuntos argentinos que la de Estados Unidos: en vez de apoyar secretamente al Eje, en realidad Castillo no apoyaba a nadie. No tenía ninguna política exterior constructiva y su única intención era aguantar hasta que terminase la guerra, con la esperanza, al parecer, de que en tal momento Argentina pudiera restaurar su relación de antes de la contienda con la Europa occidental y de que disminuyera la presión estadounidense.

A mediados de 1943 Castillo tuvo que hacer frente a otra crisis política nacional, y esta vez no logró superarla. En abril se negó a apoyar a Rodolfo Moreno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pretendía sucederle y causó con ello una escisión en la Concordancia. Al cabo de un mes y pico se supo que Castillo quería que Robustiano Patrón Costas, destacado magnate del azúcar de Tucumán y conservador de la vieja guardia procedente del lejano interior como él mismo, fuese el próximo presidente. En cuestión de días la noticia de las intenciones de Castillo provocó un golpe de estado militar que, el 4 de junio de 1943, apartó al régimen con la misma facilidad con que el ejército había despachado a los liberales en 1930. Una vez más las tropas marcharon hasta el centro de Buenos Aires para ocupar la Casa Rosada, mientras durante unas horas Castillo hacía inútiles intentos de resistencia desde un destructor de la armada en el Río de la Plata en el cual se había refugiado.

LA SUBIDA DE PERÓN, 1943-1946

El golpe de junio de 1943 se diferenció del de septiembre de 1930 en que llegó sin anunciarse, sin la visible agitación civil que había presagiado la caída de Yrigoyen; pareció pillar por sorpresa a la población en general. Sin embargo, el golpe había estado en el aire desde hacía meses. En el momento de la caída de Castillo la Concordancia no era más que una sombra de lo que había sido, y durante algún tiempo el gobierno había sobrevivido gracias sólo al ejército. En dos aspectos el golpe de 1943 se pareció al de 1930: fue concebido y ejecutado exclusivamente por el ejército y sus líderes se dividían en «liberales» y «nacionalistas». Los primeros, que al principio eran más importantes en número y categoría, pretendían crear de nuevo un gobierno como el de Ortiz, libre del fraude que creían que acompañaría a la elección de Patrón Costas y respaldados por los grandes grupos de intereses liberales o «fuerzas vivas». De los liberales podía esperarse que llegaran rápidamente a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual ahora significaba, ante todo, romper las relaciones con el Eje. Los nacionalistas, en cambio, seguían comprometidos con oponer resistencia a Estados Unidos, con mantener la neutralidad y apoyar la creación de una industria nacional de armamentos.

En el corazón de la facción nacionalista había una asociación secreta de militares, el Grupo Obra de Unificación (GOU), que consistía sólo en una veintena de miembros activos, cerca de la mitad de ellos coroneles u oficiales de graduación inferior. El GOU estaba obsesionado con el comunismo. Antes de la revolución de junio sus miembros parecían menos preocupados por la perspectiva de que otro gobierno conservador fuera elegido mediante el fraude que por la posibilidad de que apareciera un frente popular controlado por los comunistas que concurriese a las elecciones de noviembre. La victoria electoral de un frente popular, según los miem-

bros del GOU, acarrearía un desastre tan grande como la revolución rusa o la guerra civil española. El GOU consideraba que su obligación era hacer que el ejército en general se diera cuenta de este peligro: de ahí su «tarea de unificación». Los miembros del GOU parecían ser nacionalistas de uniforme y no paraban de hablar de «conspiraciones internacionales». El movimiento masónico internacional, por ejemplo, era «creación de los judíos ... una temible organización secreta, de carácter internacional ... una especie de mafia corregida y aumentada ... Entre sus obras se contaban la revolución francesa, la guerra civil española ... Es anticatólica y, por tanto, por definición antiargentina». El Club de Rotarios era una «red de espionaje y propaganda del judaísmo internacional al servicio de Estados Unidos». Y el Frente Popular era «una seudodemocracia, una vulgar reunión de compañeros de viaje (comunizantes) que actuaban a instancias del judaísmo ... una organización declaradamente revolucionaria que trataba de repetir la pauta de España, donde los moderados cayeron y se convirtieron en marionetas de los comunistas». Los nacionalistas, en cambio, eran «las fuerzas más puras, las que tenían la mayor conciencia espiritual dentro del panorama de la política argentina». ³⁷ Los vínculos estrechos entre el GOU y los nacionalistas quedan demostrados por una notable afirmación que pretendía justificar la revolución de 1943 y la imposición de la dictadura militar y que cobró la forma de una larga cita de la obra de san Agustín *De libero arbitrio*:

Cuando un pueblo es moderado y serio por costumbre ... y estima el interés de todos por encima del interés particular, es justa la ley que le permite elegir sus propios magistrados. Pero cuando poco a poco empieza a poner el interés particular por encima del bien común, y si es corrompido por hombres ambiciosos, cae en la costumbre de vender sus votos y entregar el gobierno a los depravados, es justo que el hombre de buena voluntad, aunque sea un solo hombre poseedor de influencia o de la fuerza necesaria, pueda quitar el derecho de escoger gobierno y pueda someter el pueblo a la autoridad de un solo hombre. ³⁸

El líder titular del golpe de estado de junio era el general Arturo Rawson, popular y bien relacionado tanto en el ejército como en la marina y capaz de unir a las dos fuerzas contra Castillo en una promesa de extirpar la corrupción gubernamental. Pero después de asumir la presidencia, Rawson fue depuesto inmediatamente por sus colegas militares tras una serie de disputas relacionadas con la composición del nuevo gabinete. El lugar de Rawson lo ocupó el general Pedro Ramírez, que hasta pocos días antes del golpe había sido ministro de la Guerra en el gobierno de Castillo. La fuerza de la pretensión de Ramírez estaba en sus vínculos secretos con el GOU, cuyos miembros, de hecho, le habían jurado lealtad, pero también en su atractivo para los liberales y los radicales: durante los meses anteriores se había insinuado que los radicales querían que Ramírez fuese su candidato en las elecciones de noviembre.

El gabinete de Ramírez lo formaban casi exclusivamente miembros de las fuerzas armadas cuyas filiaciones políticas exactas aún no eran claras pero que, de hecho, se dividían en partes casi iguales en liberales y nacionalistas. El único miembro civil del gabinete era Jorge Santamarina, el ministro de Hacienda, liberal muy cono-

37. Citas de Robert A. Potash (comp.), *Perón y el G. O. U.: Los documentos de una logia secreta*, Buenos Aires, 1984, pp. 101-102, 103, 199, 200.

38. Citado en *ibid.*, p. 235.

cido como vástago de las fuerzas vivas o, como lo calificó el GOU, «uno de ellos».³⁹ Al menos por fuera el nuevo gobierno parecía controlado por los liberales: el Departamento de Estado norteamericano se apresuró a dar la bienvenida al golpe y a reconocer a Ramírez, mientras la embajada alemana quemaba sus archivos secretos al día siguiente del golpe. Ciertamente en ese momento los liberales controlaban la política exterior por mediación del almirante Segundo Storni, ministro de Relaciones Exteriores. A comienzos de julio Ramírez informó a Estados Unidos de que podía esperar que Argentina rompiera sus relaciones diplomáticas con Alemania en agosto. En ese momento, además, Ramírez, a pesar de sus vínculos con el GOU, parecía dispuesto a convocar elecciones al cabo de poco tiempo porque, al parecer, preveía que iba ser el candidato de una coalición encabezada por los radicales.

Antes de que transcurriera un mes desde el golpe las dos facciones se hallaban enzarzadas en una lucha por el control total del régimen militar. Los liberales querían sacar a los nacionalistas del gobierno y el lema de su campaña era «Poned los generales delante de los coroneles» y los nacionalistas contraatacaban con una campaña cuyo objetivo era impedir que Ramírez fijase una fecha para las elecciones, las cuales, según argüían, significarían la entrada del Frente Popular y, por ende, los comunistas en el poder. Hubo numerosas disputas entre los dos bandos a causa de los nombramientos gubernamentales de nivel inferior, toda vez que los dos trataban de meter a sus propios hombres en el gobierno. Finalmente, a comienzos de septiembre los liberales intentaron salir del punto muerto recabando el apoyo de Estados Unidos. En la célebre «carta de Storni» a Cordell Hull, el ministro de Relaciones Exteriores daba a entender que el régimen ya estaba preparado para romper las relaciones con el Eje, pero pedía a Hull que primero levantara el embargo de armamentos. Storni argüía que levantar el embargo representaría un gesto de buena voluntad por parte de Estados Unidos, que demostraría su disposición a restaurar el equilibrio estratégico en América del Sur, eliminando lo que Argentina percibía como la amenaza militar de Brasil. El propósito obvio de esta petición era provocar en el ejército una oleada de sentimientos a favor de Estados Unidos que los liberales pudieran aprovechar luego para vencer a los nacionalistas y acabar con ellos. Pero Hull hizo caso omiso de esta importantísima oportunidad de intervenir de una manera que favoreciese los intereses de Estados Unidos. En contra de los deseos de sus principales consejeros encabezados por Sumner Welles, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, rechazó de forma tajante la petición de Storni y exigió que Argentina rompiera las relaciones con el Eje sin ningún *quid pro quo* previo por parte de Estados Unidos. En su respuesta Hull sacaba a colación el comportamiento de Argentina durante la conferencia de Río de Janeiro dieciocho meses antes, cuando había desafiado sistemáticamente las propuestas norteamericanas. Así pues, la carta de Storni no ayudó a los liberales, sino que más bien dio la razón a los nacionalistas y reforzó el argumento que venían presentando de manera persistente desde 1941: Estados Unidos era hostil a Argentina y, por tanto, el único recurso de Argentina era obrar por cuenta propia. Pocos días después de que la respuesta de Hull llegase a Buenos Aires, todos los liberales, incluido Storni, habían dimitido del gobierno de Ramírez y habían sido substituidos por nacionalistas. Entre los nuevos nombramientos los más significativos eran los del general Edelmiro Farrell como vicepresidente y el de Gustavo Martínez Zuviría, el notorio novelista antisemita «Hugo Wast», como ministro

39. *Ibid.*, p. 220.

de Justicia e Instrucción Pública. El escenario quedó despejado para la revolución nacionalista y la subida de Perón.

Los comentarios de Ysabel Rennie sobre el golpe de estado de junio de 1943, escritos poco después del acontecimiento, eran una visión muy perceptiva del futuro rumbo de la política argentina:

Con la perspectiva del tiempo, este acontecimiento se verá tal como fue: el más importante económica, política y socialmente desde la [revolución de 1890]. Porque este golpe, descargado con rapidez, y sin advertencia previa, señaló el final de una sociedad, una economía y un estilo de vida. Con él se enterró la Argentina que vivía exclusivamente de la carne de buey, la Argentina de la Oligarquía Ilustrada, la Argentina liberal, la partidaria del libre comercio, y las esperanzas, el poder y el predominio de la aristocracia terrateniente.⁴⁰

Con todo, el juicio de Rennie era más apropiado para los meses inmediatamente posteriores al golpe de estado que para éste mismo. Fue en octubre y no en junio cuando ocurrió el cambio político más decisivo antes de la culminación de febrero de 1946, cuando Perón ganó las elecciones como presidente.

Una vez los nacionalistas hubieron obtenido el control total de la junta de Ramírez en octubre de 1943, actuaron rápidamente para consolidarse en el país y en el extranjero. Se negaron a seguir hablando con Estados Unidos de romper las relaciones con el Eje y la respuesta norteamericana fue congelar los activos argentinos depositados en bancos en Estados Unidos. Los nacionalistas reiteraron la neutralidad «activa» y reanudaron la búsqueda de aliados en América Latina. A finales de 1943 Argentina había forjado un considerable mercado de exportación de artículos manufacturados en América Latina que Ramírez procuró consolidar firmando tratados comerciales con varios estados latinoamericanos vecinos. El régimen también empezó a meterse en la política de sus vecinos; en un episodio que de nuevo creó fricciones graves entre Argentina y Estados Unidos, un golpe de estado en Bolivia en diciembre de 1943 llevó al poder un régimen neutralista y pro argentino que durante un tiempo sólo tuvo el reconocimiento diplomático de Buenos Aires.

En el plano interior, el régimen dejó de fingir que no tardaría en convocar elecciones. A causa de ello, empezó a encontrar creciente oposición capitaneada por los radicales. El régimen respondió con una mezcla de proclamações de estilo nacionalista, represión, populismo incipiente y una creciente oleada de propaganda. Impuso una reducción del 20 por ciento de los arriendos agrícolas y una congelación de los alquileres urbanos. Los tranvías de Buenos Aires, cuya empresa más importante era la Anglo-Argentine Tramway Company, fueron obligados a reducir el precio de los billetes y se abolió la odiada Corporación de Transportes. El régimen nacionalizó la Primitiva Gas Company, que era de propiedad británica. También intensificó la campaña contra la corrupción y llevó a cabo una nueva oleada de purgas. Puso las provincias bajo interventores militares y amplió la censura de prensa. A finales de 1944 abolió todos los partidos políticos porque, según afirmó, no representaban realmente la «auténtica opinión pública». Mientras tanto miembros del gobierno pronunciaron numerosos discursos repletos de consignas nacionalistas como «Honradez, Justicia, Deber»; el propio Ramírez alabó en particular a la po-

40. Ysabel Rennie, *The Argentine Republic*, Nueva York, 1945, p. 344.

blación trabajadora rural, que «no estaba contaminada —como dijo— por las ideas exóticas de las ciudades».

Martínez Zuviría comenzó su mandato como ministro de Justicia con un discurso en el que instó a tomar medidas para «cristianizar el país ... Deberíamos incrementar la tasa de natalidad y no la inmigración; debemos asegurar que el trabajo reciba la parte justa de las recompensas y poner a todas las familias bajo un techo decente; tenemos que extirpar las doctrinas basadas en los odios de clase y el ateísmo». ⁴¹ Con gran aprobación por parte de la Iglesia, Martínez Zuviría volvió a imponer la enseñanza religiosa en las escuelas por primera vez en sesenta años y luego dirigió una búsqueda de «comunistas» en las universidades, cerrándolas cuando los estudiantes respondían con huelgas. También se adoptaron medidas antisemitas. Aunque los rumores de que el gobierno había creado campos de concentración en la Patagonia resultaron falsos, suprimió varias organizaciones de beneficencia judías, despidió a algunos maestros judíos y canceló la ciudadanía de algunos judíos naturalizados. La prensa nacionalista llevó a cabo una larga campaña contra Bemberg, el magnate de la cerveza. En abril de 1944 el gobierno se hizo con el control del comercio de exportación de cereales y nacionalizó los elevadores y almacenes de cereales, medidas que algunos consideraron antisemitas porque iban dirigidas contra las casas exportadoras llamadas las Cuatro Grandes. Finalmente, hubo otra racha de ataques contra los comunistas, esta vez entre los sindicatos. Inmediatamente después de hacerse con el poder en junio de 1943, el gobierno había disuelto una facción de la CGT dirigida por los comunistas que había conseguido escindir la federación en marzo de aquel año. En ese momento también acabó con la FONC, los sindicatos de obreros de la construcción, que estaban dominados por los comunistas. A finales de 1943 hubo huelgas de los trabajadores de las empresas cárnicas en Buenos Aires y el gobierno las denunció diciendo que eran instigadas por los comunistas al tiempo que procedía a practicar detenciones en masa. Varios sindicatos, entre ellos las organizaciones de ferroviarios, ya habían sido puestos bajo el control del gobierno por medio del mecanismo de la intervención.

Gran parte de este comportamiento del gobierno manifestaba la cara negativa y puramente reaccionaria del nacionalismo, su exótica mezcla de prejuicios contra el «liberalismo», el «capitalismo» y el «comunismo», su costumbre de romantizar la ruralidad, sus ciegas antipatías contra lo «extranjero» y sus amenazadores impulsos antisemitas. A pesar de ello, el nacionalismo conservaba su compromiso con la «justicia social», cuyo propósito era reconstruir la comunidad nacional orgánica. Esta otra cara del movimiento también se dejó ver cuando aún no había transcurrido un mes desde la revolución de palacio de octubre de 1943 y se procedió al nombramiento, el 28 de octubre, del coronel Juan Domingo Perón como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Los allegados al régimen reconocieron de inmediato la gran importancia de su nombramiento. Perón, según dijo *Cabildo*, que ahora era el principal diario nacionalista, daría «peso y eficiencia a los problemas laborales», porque conocía las «verdaderas necesidades de las organizaciones obreras», y apoyaría la unidad del movimiento sindical, «tratando siempre de evitar y resolver [*sic*] los conflictos». La tarea de Perón era la «organización de los sindicatos». ⁴²

41. *Cabildo*, 15 de noviembre de 1943, 1 de enero de 1944, 2 de noviembre de 1943.

42. *Ibid.*, 28 de octubre de 1943, 30 de octubre de 1943.

Aunque todavía no formaba parte del gabinete, y no era nada conocido del público, Perón apareció así en las primeras filas del régimen nacionalista. Había sido uno de los fundadores y líderes del GOU, participando activamente en la «tarea de unificación» en el ejército, en la conspiración contra Castillo, como partidario de Ramírez contra Rawson en junio y más recientemente como una de las figuras principales en la lucha entre los liberales y los nacionalistas. De la carrera anterior de Perón, que desde la adolescencia había pasado en el ejército, el rasgo más sobresaliente era su larga experiencia en la política militar. Inmediatamente antes de la revolución de 1930 Perón había interpretado un papel secundario como intermediario entre las facciones de Uriburu y Justo, aunque había evitado que se le identificara con una u otra. Inmediatamente antes y después de que estallara la guerra en 1939 había estado en misión oficial en varios países europeos y se había familiarizado con los regímenes de Mussolini y Franco además de ser testigo de la caída de Francia. Perón gozaba de cierto prestigio en el ejército por su talento de organizador y por sus ideas sobre el papel del ejército en la sociedad moderna. Sus opiniones al respecto eran típicas de los nacionalistas. A diferencia de los liberales, que veían al ejército en un papel negativo de vigilante y simple apéndice del estado, Perón y los nacionalistas lo consideraban el epicentro mismo de la comunidad nacional, el encargado de dirigir y movilizar la sociedad. Como miembro del GOU Perón había evitado las toscas diatribas antisemitas y xenófobas de los demás oficiales, pero se había distinguido como anticomunista extremo, temeroso de las intrigas comunistas para formar un frente popular y, sobre todo, temeroso de la influencia comunista en los sindicatos. La intervención de Perón en los asuntos laborales precedió a su nombramiento como jefe del Departamento Nacional del Trabajo. Había buscado activamente contactos en los sindicatos desde el golpe de estado de junio, sobre todo en la «intervenida» Unión Ferroviaria, que ahora era administrada por su íntimo colaborador y amigo personal el coronel Domingo Mercante.

A finales de 1943 los diversos subtemas de la «justicia social» habían pasado a ser objeto de debates casi diarios en los círculos derechistas, católicos y nacionalistas de Argentina. Durante varios años la Alianza Libertadora Argentina había conceptualizado la justicia social como un sistema de sindicatos controlados por el estado. Después del golpe de junio de 1943, al tiempo que de manera típica exigía medidas contra los «comunistas» y los «judíos», la Alianza instaba a formar un «estado protector de la clase obrera argentina».⁴³ En 1943 la prestigiosa *Revista de Economía Argentina* prestó mucha atención al Plan Beveridge que acababa de hacerse público en Gran Bretaña y juzgaba que la formación de un «estado benefactor» era la mejor manera de evitar una revolución comunista. Otros nacionalistas percibían la clase obrera bajo su control y tutelaje como el instrumento que los llevaría al poder: «La conquista del estado empieza por la conquista de la multitud» —había declarado Marcelo Sánchez Sorondo en mayo de 1943.⁴⁴ La mayoría de estas ideas sobre la movilización de las masas y el tutelaje de la clase obrera surgieron del fascismo europeo. Pero los nacionalistas que buscaban inspiración externa para crear sus programas y estrategias ya no tenían que concentrarse en el régimen fascista de Italia, que se estaba desmoronando rápidamente, sino que ahora había un modelo mucho más cercano en el Brasil de Getúlio Vargas: «Vargas ha dado un impulso extraordi-

43. *La Razón*, 8 de junio de 1943.

44. Sánchez Sorondo, *La revolución que anunciamos*, p. 246.

nario a los derechos de los obreros en Brasil. Empezó esta actividad con la creación del ministerio de Trabajo ... La manera en que se ocupan de esta cuestión en Brasil ... nos invita a considerar esto como base para el estudio y las ideas».⁴⁵

Así pues, la entrada de Perón en el Departamento Nacional del Trabajo en octubre de 1943 podría verse como la ejecución de una estrategia nacionalista que venía de mucho antes y que Perón adoptó con pleno conocimiento y apoyo de sus colegas de la junta militar. Hizo varias declaraciones muy explícitas sobre sus intenciones y objetivos, la primera en una entrevista con un periodista chileno, Abel Valdés, transcurridas apenas dos semanas desde que tomara posesión de su cargo. A lo largo de toda esta entrevista Perón hizo referencias constantes a conceptos nacionalistas relacionados con asuntos obreros y también empleó el fraseo y el vocabulario clásicos de los nacionalistas:

Nuestra revolución es esencialmente espiritualista. En Argentina la riqueza del pueblo [debería permanecer] en nuestras manos, de manera que cada argentino pueda percibir el mejor rendimiento de sus esfuerzos. Yo mismo soy sindicalista y como tal soy anticomunista, pero también creo que el trabajo debería organizarse en forma de sindicatos, para que los propios trabajadores, y no los agitadores que los controlan, sean los que cosechen los beneficios de sus esfuerzos.

Su objetivo, según declaró Perón, era

mejorar el nivel de vida de los trabajadores, pero sin tolerar el conflicto social ... No daré carta blanca a los agentes de la destrucción y la agitación, que con frecuencia ni siquiera son argentinos, sino extranjeros. Tengo los asuntos obreros totalmente controlados, y no por la fuerza sino por la conciliación ... No crea usted que somos anticapitalistas. Nada de eso. [Pero] el capitalismo internacional está muy equivocado si cree que puede vencer al espíritu nacional de Argentina que este gobierno encarna.⁴⁶

Así pues, según Perón, los nacionalistas trataban de llevar a cabo una revolución espiritualista: la palabra, tomada en préstamo del conservadurismo español, era una de las más comunes del léxico del nacionalismo. La revolución nacionalista significaba mantener la riqueza nacional en el país y dar al trabajo la parte que le correspondía; el propósito de la organización sindical era tener a los «agitadores» a raya y mejorar los niveles de vida sin provocar conflictos de clase. Los comentarios de Perón sobre el «capitalismo internacional» también eran ecos de los nacionalistas, y sus insinuaciones en el sentido de que el capitalismo debía hacer concesiones para impedir que el trabajo se volviera revolucionario parafraseaban las grandes encíclicas pontificias *Rerum Novarum* y *Quadragesimo Anno*. De nuevo había evitado Perón comentarios antisemitas explícitos, pero sus críticas simultáneas contra el comunismo y el «capitalismo internacional» adoptaban las suposiciones generales y la perspectiva en que se basaba el antisemitismo en Argentina.

Con la entrevista con Valdés Perón se presentó al público en general por primera vez. Su aire era de confianza en sí mismo; su actuación fue atractiva y empujó al propio Valdés a hacer una predicción memorable: «Mi impresión general es que el actual gobierno argentino está unido, poderoso y fuerte ... Otra de mis impresiones

45. *La Razón*, 8 de junio de 1943.

46. *Cabildo*, 11 de noviembre de 1943.

es que ... el coronel Juan Perón puede convertirse muy pronto en el caudillo máximo de la República Argentina, y quién sabe durante cuánto tiempo». ⁴⁷ Poco después, en una carta abierta dirigida a Ramírez, Perón negó modestamente que aspirase a algo más que al puesto que ocupaba en ese momento, pero era claro a ojos de todo el mundo que estaba cobrando rápidamente ímpetu personal y estatura política.

A finales de noviembre, en un decreto que firmó la totalidad de los ocho miembros del gabinete, el gobierno substituyó el Departamento Nacional del Trabajo por la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social, con lo que Perón, su jefe, pasó a formar parte del gabinete. En un largo preámbulo del decreto Perón esbozaba de manera todavía más explícita sus planes relacionados con el trabajo. El preámbulo decía que la Secretaría de Trabajo serviría como «organización que centralice y controle», para producir «mayor armonía entre las fuerzas productivas: reforzar la unidad nacional mediante un grado mayor de justicia social y distributiva ... concebida de manera cristiana a la luz de las grandes encíclicas».

Al hablar con un grupo de obreros unos cuantos días después, Perón declaró «Soy un soldado en el gremio más poderoso de todos: el militar. Y, por tanto, os aconsejo que para conseguir la misma cohesión y fuerza que tenemos nosotros, permanezcáis siempre unidos». ⁴⁸

Mientras Perón explicaba sus intenciones para con los sindicatos, había algunas señales indudables de que el trabajo estaba dispuesto a colaborar. En diciembre de 1943 la Secretaría de Trabajo llegó a un acuerdo sobre salarios y beneficios marginales con la Unión Ferroviaria que equivalía a conceder al sindicato virtualmente todo lo que había exigido pero se le había negado de manera continua desde 1929. Poco después, los líderes sindicales encabezados por el secretario de la CGT, José Domenech, saludaron a Perón como «Trabajador Número Uno de Argentina». Perón terminó el año haciendo un llamamiento público a los hombres de negocios para que pagasen voluntariamente a sus trabajadores un aguinaldo navideño consistente en una mensualidad extra. La campaña destinada a fomentar la «justicia social» continuó hasta bien entrado el año 1944. Perón destacó aún más al dirigir las operaciones de socorro después de que un terremoto devastador arrasara la ciudad de San Juan. También en este momento empezó Perón lo que pronto sería su notoria relación con la actriz Eva Duarte, que formaba parte de un grupo de artistas populares que participó en la campaña para socorrer San Juan.

Poco después del desastre de San Juan, sin embargo, una nueva crisis en los asuntos exteriores eclipsó de repente las actividades de Perón entre los sindicatos. A raíz del asunto de la carta de Storni Estados Unidos había intensificado su boicot económico y reanudado su campaña propagandística contra Argentina, después de que ambos fueran suspendidos brevemente desde el derrocamiento de Castillo. La campaña alcanzó su apogeo en diciembre de 1943 tras el golpe de estado en Bolivia, en medio de noticias que afirmaban que Argentina estaba envuelta en una conspiración parecida para derribar al gobierno de Uruguay. El régimen nacionalista redobló entonces sus esfuerzos por crear una industria armamentista, pero en un intento desesperado de aliviar sus debilidades militares inmediatas empezó a tramitar la compra de armas a la Alemania nazi. Esta medida resultó un error desastroso, toda vez que Osmar Hellmuth, el agente secreto de Ramírez, fue detenido por los ingleses en Tri-

47. *Ibid.*, 11 de noviembre de 1943.

48. *Ibid.*, 30 de noviembre de 1943; *La Razón*, 10 de diciembre de 1943.

nidad cuando iba camino de España y Alemania y los ingleses pasaron información sobre sus actividades al Departamento de Estado. El caso Hellmuth proporcionó finalmente a Estados Unidos lo que parecía una prueba concreta de la colusión de Argentina con el Eje, y armado con esta prueba, el Departamento de Estado amenazó inmediatamente con hacerla pública, colocando así a Ramírez en una posición insostenible. Ramírez no tardó en rendirse y el 26 de enero decretó la ruptura de relaciones diplomáticas que Estados Unidos venía exigiendo inútilmente desde 1942.

Excepto para el puñado de personas que conocían los detalles del caso Hellmuth y sus consecuencias, la ruptura diplomática carecía de toda explicación racional y parecía una capitulación incomprensible ante las presiones norteamericanas. La ruptura de relaciones, por tanto, precipitó inmediatamente una crisis política que llegó a un punto culminante en la segunda semana de febrero, cuando el gobierno trató de acallar la creciente avalancha de críticas de los nacionalistas disolviendo y prohibiendo de pronto todas las asociaciones nacionalistas. Después de la prohibición hubo una racha de dimisiones en el gabinete, entre ellas la del coronel Alberto Gilbert, que, como ministro de Relaciones Exteriores, se convirtió en el chivo expiatorio directo de la misión de Hellmuth, y la de Martínez Zuviría, que dejó el gobierno en señal de protesta tanto por la ruptura de relaciones diplomáticas como por la proscripción de los nacionalistas. Pero luego los nacionalistas contraatacaron y el propio Ramírez fue depuesto el 25 de febrero por sus críticos, que le obligaron a dejar la presidencia, primero temporalmente y poco después de manera permanente. El caso Hellmuth había provocado así la caída de Ramírez y otros, pero el régimen nacionalista en conjunto no resultó afectado, como demostró el hecho de que Estados Unidos se negara a reconocer diplomáticamente al nuevo gobierno. El episodio fue otra etapa importantísima de la subida de Perón. Al substituir a Ramírez en la presidencia, el vicepresidente Farrell renunció al cargo que había ostentado hasta entonces, el de ministro de la Guerra, que fue para Perón, primero de forma provisional pero poco después permanentemente. Gracias a la caída de Ramírez, Perón controlaba ahora dos puestos del gabinete.

Bajo Farrell, Argentina siguió distanciada de Estados Unidos y, aunque continuaron los envíos de carne a Gran Bretaña, Washington mantuvo un bloqueo virtual de los suministros a Argentina. El régimen replicó a su aislamiento forzoso con una inmensa movilización militar de hombres y recursos. A finales de 1945 había triplicado los efectivos del ejército al tiempo que incrementaba la participación militar en el gasto público del 17 por ciento en 1943 al 43 por ciento en 1945. Al crecer el ejército, se empleó el personal militar en la construcción de carreteras; se formaron nuevas plantas experimentales bajo el control y la supervisión del ejército; el ejército dirigió la búsqueda afanosa de materias primas industriales en la región andina. En abril de 1944 el gobierno creó un Banco Industrial que se encargaría de financiar las industrias que se considerasen de interés nacional, lo cual significaba principalmente las compañías estatales dedicadas a producir armamentos. La rápida militarización en 1944, que empezó sobre todo como respuesta a las presiones norteamericanas, se convirtió así rápidamente en un instrumento de la política económica, un medio de encauzar los recursos hacia la industrialización. La militarización se correspondía con los principios fundamentales del nacionalismo, que consideraba al ejército un instrumento para reestructurar la sociedad. Pero ahora se estaba formando una estructura visiblemente autoritaria. Al ampliar las fuerzas armadas, el gobierno impuso todavía más restricciones a la prensa y en abril de 1944 aplicó una

prohibición de cinco días a *La Prensa*. A finales de julio Farrell ofició en una gran concentración con antorchas en la Avenida Nueve de Julio de Buenos Aires. Ante un público que se calcula en un cuarto de millón de personas dio a conocer una «Declaración de Soberanía»:

Hoy ... todo el pueblo de la República ... ha comprendido las verdades fundamentales del nacionalismo ... [Esta manifestación] revela la existencia de una poderosa fuerza nacional que va en pos de objetivos que son puramente nacionales y que, por tanto, no puede ser un partido político, porque no defiende los intereses de ninguna «parte» contra otra parte cualquiera, sino la grandeza de toda la nación.⁴⁹

El gobierno promulgó edictos aún más nacionalistas, entre ellos un «estatuto del peón» que fijaba salarios mínimos para los trabajadores rurales y era así ejemplo de la vieja preocupación de los nacionalistas por la población rural. A mediados de octubre Farrell presidió una ceremonia que «consagró» simbólicamente las fuerzas armadas a «la Virgen», acto cuyo propósito era evocar la «unión de la Cruz y la Espada» que constituía la visión nacionalista de la conquista de América por los españoles.

De este modo, a pesar de la confusión del caso Hellmuth, el régimen nacionalista continuó cobrando ímpetu y adquiriendo un carácter cada vez más agresivo. Tras la caída de Ramírez, Perón reanudó sus actividades en la Secretaría de Trabajo y se ocupó de eliminar a los adversarios en los sindicatos, principalmente socialistas. En junio, después de eliminar a su líder, Francisco Pérez Leiros, se había hecho con el control del gran sindicato de obreros metalúrgicos, la Unión Obrera Metalúrgica. Aparecieron ahora señales inconfundibles de que había empezado a movilizar a una inmensa base popular. En marzo de 1944 gran número de ferroviarios se manifestaron a su favor. Por primera vez en la historia la CGT participó en el desfile anual del 25 de mayo que conmemoraba la revolución de mayo de 1810. Durante todo este período Perón permaneció en constante comunicación con los líderes sindicales, prometiendo, exhortando y si hacía falta amenazándoles. Su mensaje seguía siendo el mismo que a finales de 1943: instaba a la unidad y promulgaba constantemente el clásico precepto católico de la «justicia social»:

... la nueva política social ... se basa en la necesidad ... de evitar una situación en que algunos hombres sean demasiado ricos y otros demasiado pobres. La sabiduría del «*in medio veritas*» continúa siendo válida ... La verdad se encuentra en el punto medio, en que se mantenga el debido equilibrio en el reparto de la riqueza con el fin de eliminar la absurda polarización ... entre la clase de los ricos y poderosos y la clase de los mendigos ... un sano equilibrio ... comprensión y conciliación entre las clases ... En su discurso ... Perón mencionó todos los puntos que comprenden el concepto cristiano de la justicia social que contienen las grandes encíclicas pontificias.⁵⁰

Desde su otro puesto, el de ministro de la Guerra, Perón supervisó activamente la expansión del ejército al tiempo que incrementaba su poder y su prestigio en el seno del mismo. Como ministro controlaba las comunicaciones entre el gobierno y los militares, y aprovechaba plenamente su poder sobre los suministros, el patronaz-

49. *Cabildo*, 12 de enero de 1944.

50. *Ibid.*, 25 de junio de 1944.

go y los ascensos en un momento en que el presupuesto militar crecía a ritmo acelerado. Perón aparecía como el ideólogo más destacado de la proposición nacionalista de que el papel del ejército era dirigir la política pública y construir una sociedad nueva. El 11 de junio de 1944 pronunció su discurso más impresionante hasta la fecha, en el cual presentó su concepto de la «nación en armas». Perón declaró que la guerra era una consecuencia inevitable de la condición humana. Pero el mejor medio de evitarla que tenía cada nación consistía en hacerse militarmente fuerte, y la fuerza militar requería la movilización de todos los recursos disponibles; a su vez, movilización significaba industrialización y «justicia social». «Si vis pacem, para bellum» —proclamó: «Si deseas la paz, prepárate para la guerra».⁵¹

En Estados Unidos el discurso de Perón fue atacado por «totalitario» y provocó un nuevo enfriamiento de las relaciones. A partir de entonces, el Departamento de Estado utilizaría con frecuencia la palabra «nazi» para referirse al régimen argentino. Pero en Argentina misma el discurso favoreció la posición política de Perón. Miles de sindicalistas respondieron con manifestaciones populares a los ataques norteamericanos contra Perón. Aprovechando su creciente estatura, menos de un mes después del discurso Perón provocó un conflicto sobre las esferas de autoridad con el general Luis Perlinger, que, como ministro del Interior, se había convertido en su rival principal en la junta. En este conflicto Perón demostró ser irresistible y logró que el resto del gobierno secundara su exigencia de que Perlinger dimitiese. Cuando así hizo Perlinger, Perón adquirió un tercer cargo, la vicepresidencia, que había estado vacante desde la caída de Ramírez en febrero.

En apenas un año a partir del golpe de estado de junio de 1943 contra Castillo, Perón se había convertido de manera indiscutible en la figura principal del régimen militar; Farrell se replegó y a partir de entonces su papel fue el de figura decorativa como presidente. A mediados de 1944 a Perón ya sólo le quedaban dos adversarios: el Departamento de Estado norteamericano y una masa amorfa pero numerosa de oponentes en el país, encabezados por los radicales y las fuerzas vivas, beneficiarias de la vieja economía liberal que se veía amenazada por la política de industrialización y reforma social dirigidas por el estado. Durante el resto de 1944 el Departamento de Estado norteamericano mostró poco interés por Argentina. Las sanciones económicas permanecieron vigentes, pero Estados Unidos resultó incapaz de tomar nuevas medidas contra Argentina, principalmente debido a la oposición británica. A finales de 1944 la oposición interior a Perón iba en aumento, pero seguía siendo extremadamente desunida y difusa. La liberación de París en agosto provocó grandes manifestaciones callejeras en Buenos Aires que se convirtieron en estallidos de cólera contra el régimen por sus «simpatías nazis». Los portavoces de los partidos políticos, que seguían prohibidos, exigían de vez en cuando que se convocaran elecciones, y el «estatuto del peón» provocó una oleada de críticas de las asociaciones de estancieros y agricultores capitaneadas por la Sociedad Rural Argentina. A finales de año Perón se vio envuelto en una enconada disputa con la Unión Industrial Argentina, la principal organización de patronos industriales, al instituir una paga extra obligatoria de fin de año para los obreros, el «aguinaldo», que el año anterior había sido puramente voluntaria. Pero la naturaleza de la política argentina se estaba transformando rápidamente: cada vez que los adversarios de Perón, en el país y en el extranjero, arremetían contra él, sus partidarios sindicales y obreros respondían inmediatamente apoyándole.

51. *La Prensa*, 11 de junio de 1944.

Al formar su alianza popular, Perón se benefició de varias circunstancias que contribuyeron a que el mundo del trabajo fuese receptivo a su llamada. En primer lugar, era inevitable que una política de industrialización que incrementaba el empleo urbano resultara popular entre una clase obrera que crecía con rapidez. En segundo lugar, aunque entre 1941 y 1944 el número total de *obreros* afiliados a sindicatos de la CGT aumentó con relativa lentitud de 441.000 a 528.000, es decir, en un 17,7 por ciento, el número de *sindicatos* afiliados a la CGT durante el mismo período aumentó de 356 a 969, lo que equivale a un 285 por ciento, tendencia que ilustraba la propagación del sindicalismo en los nuevos sectores de manufacturación en pequeña escala. A resultas de ello, al empezar a funcionar, la Secretaría de Trabajo tenía una masa de contactos en potencia a los que podía vincularse en toda la población activa. Sin embargo, a los patronos, ante un mercado de trabajo favorable al vendedor y separados unos de otros por enormes diferencias de escala, les resultaba difícil unirse para oponer resistencia en común a los sindicatos o a Perón. En tercer lugar, a diferencia del período 1914-1919, en el que se registró un descenso vertiginoso de los salarios reales, en los años 1939-1945 hubo un lento incremento de los salarios reales, principalmente debido a la creación de nuevos puestos de trabajo industriales y a la abundancia de cereales baratos. En 1940 los salarios reales medios estaban más o menos en el mismo nivel que en 1929 y crecieron en un 10 por ciento antes de 1944. Las huelgas fueron mucho menos frecuentes durante los primeros años cuarenta en comparación con veinticinco años antes. Entre 1940 y 1944 la incidencia de huelgas, medida por horas-hombre perdidas, fue de sólo un tercio de la de 1915-1919, aunque la población activa más o menos se había doblado entre los dos períodos. Así pues, durante la segunda guerra mundial no sólo se mostró el trabajo menos militante que veinticinco años antes, sino que los sindicatos tendieron a preocuparse menos por los salarios que por beneficios marginales como el subsidio de enfermedad, las pagas extras, las vacaciones pagadas y la compensación por accidente.

Los beneficios marginales eran más fáciles de dar que los incrementos salariales y eran exactamente el tipo de recompensas que la Secretaría de Trabajo podía gestionar. Asimismo, resultaba mucho más fácil tratar con el trabajo cuando el asunto principal se refería a mejoras relativamente superficiales de condiciones que ya eran bastante aceptables, en lugar de la supervivencia de obreros desesperados, a menudo al borde de la rebelión, como sucedía veinticinco años antes. Las técnicas básicas que empleaba Perón eran hacer cumplir la legislación laboral que ya existía, apoyar los aumentos salariales en sectores donde los sindicatos ya estaban organizados y promover sindicatos nuevos donde no existiera ninguno. Perón obtuvo alguna ventaja de la purga de líderes sindicales comunistas poco después del golpe de junio de 1943. Los comunistas eran los líderes sindicales que probablemente se hubieran resistido a él con mayor tenacidad. Sin embargo, su número seguía siendo escaso y el gobierno exageraba constantemente su influencia. Tampoco era muy seguro el prestigio de los comunistas entre los obreros, ya que durante toda la guerra habían evitado las posturas extremistas que pudieran afectar al esfuerzo bélico. Aunque muchos líderes sindicales en 1943-1945 rehusaron tratar con Perón e intentaron guardar las distancias, las presiones de las bases con frecuencia les obligaron a tratar con la Secretaría de Trabajo. A finales de 1944 la Secretaría había empezado a tratar sólo con los sindicatos que poseyeran *personería gremial*, es decir, personalidad jurídica plena conferida por el gobierno. Pero para adquirir esta personalidad los sindicatos te-

nían que ser controlados por líderes que Perón considerase aceptables, lo cual quería decir líderes que estuvieran dispuestos a seguir sus órdenes.

En el plano internacional, después de la dimisión de Cordell Hull como secretario de estado en noviembre de 1944, la responsabilidad de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado pasó a Nelson Rockefeller, el nuevo subsecretario. Apoyado por numerosas asociaciones de fabricantes de Estados Unidos que veían Argentina como un gran mercado potencial en la posguerra, Rockefeller trató de obtener mayor cooperación de Argentina haciendo concesiones. Poco después de noviembre Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas, suavizó los embargos comercial y financiero y dio a entender que estaba dispuesto a levantar la prohibición de vender armas a Argentina que había impuesto durante la guerra. Esta diplomacia de nuevo cuño tuvo casi al instante varios resultados positivos. En febrero de 1945 Argentina firmó el Acta de Chapultepec, que prometía la cooperación interamericana en la defensa y el comercio mutuos. Finalmente, a finales de marzo, Argentina declaró la guerra a Alemania y Japón. En ese momento, cuando apenas faltaba un mes para la capitulación de Alemania, la declaración de guerra fue sólo simbólica, pero el gesto sirvió para que Argentina fuera admitida en las Naciones Unidas al tiempo que sugería que estaba dispuesta a que las futuras relaciones con Estados Unidos fuesen muy diferentes. Durante un período fugaz pareció, pues, que las aspiraciones del Plan Pinedo de finales de 1940 acabarían cumpliéndose bajo la junta militar.

Sin embargo, el nuevo trato dispensado a Argentina bajo Rockefeller cesó bruscamente después de mediados de abril, cuando Truman substituyó a Roosevelt en la presidencia y el Departamento de Estado experimentó una reorganización más. Aunque Rockefeller permaneció en su puesto durante un tiempo, el control de la política para con Argentina pasó a Spruille Braden, uno de los principales críticos de la neutralidad argentina durante la contienda así como del gobierno argentino del momento. Al terminar la guerra en Europa, Estados Unidos se libró por fin de las restricciones británicas y, encabezado por Braden, aplicó sus energías a una campaña cuyo objetivo era apartar a Perón y al régimen nacionalista. En mayo Braden fue nombrado embajador en Argentina y en junio ya recorría el país atacando al gobierno y exigiendo elecciones inmediatas; instó a Washington a no prestar más ayuda a Argentina «hasta el momento en que el control militarista nazi de este país haya sido substituido por una democracia constitucional y cooperante [sic]».⁵²

Mientras tanto, Perón había seguido ampliando y consolidando su alianza con los sindicatos. En su discurso más destacado de este período definió su objetivo como «la revolución pacífica de las masas»:

Si no llevamos a cabo la Revolución Pacífica, el Pueblo mismo tomará el camino de la Revolución Violenta ... Y la solución de todo el problema es la justicia social para con las masas ... Naturalmente, esta idea no es popular entre los ricos ... Pero ellos son sus propios peores enemigos. Mejor ofrecer el 30 por ciento ahora que dentro de años, o quizá incluso meses, arriesgarse a perder todo lo que tienen, incluidas las orejas.⁵³

52. Cable del 11 de julio de 1945. Citado en Bryce Wood, *The Dismantling of the Good Neighbor Policy*, Austin, Texas, 1985, p. 96.

53. Citado en Darío Cantón, «El ejército en 1930: El antes y el después», en Haydée Gorostegui de Torres, ed., *Historia integral Argentina*, vol. 7, Buenos Aires, 1970, p. 11.

En efecto, el mensaje no era popular entre los «ricos», y a mediados de 1945 las actividades de Spruille Braden reavivaron rápidamente la oposición a Perón que había permanecido dormida en gran parte durante algunos meses. En junio un «Manifiesto de las Fuerzas Vivas» atacó las reformas sociales del gobierno, pero este documento fue seguido al cabo de muy poco por un contramanifiesto de los sindicatos «en defensa de los beneficios conquistados por medio de la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social».

Finalmente, el 19 de septiembre, después de tres meses de creciente tensión, miles y miles de adversarios de Perón se reunieron en las calles de Buenos Aires en una «Marcha de la Constitución y la Libertad». Cinco días después el general Arturo Rawson, que había sido presidente por un día en junio de 1943, capitaneó un golpe de estado fallido desde Córdoba. A finales de septiembre la marina se pronunció a favor de una vuelta al poder civil. Poco después, el gobierno mismo se dividió entre los adversarios de Perón, encabezados por el general Eduardo Ávalos, y sus partidarios. El 9 de octubre Ávalos consiguió obligar a Perón a dimitir de sus múltiples puestos en el gobierno. Tres días después fue encarcelado en la isla de Martín García. Parecía que el «peronismo» se había derrumbado bajo los ataques y que Farrell no tardaría en satisfacer las principales exigencias de los «constitucionalistas» liberales: fijar una fecha para celebrar elecciones al tiempo que cedía el control a un gobierno provisional encabezado por los jueces del Tribunal Supremo.

Tuvo lugar entonces lo que según sir David Kelly, el embajador británico, fue una «comedia increíble». Con la victoria a su alcance, el movimiento que pretendía acabar con Perón flaqueó. En los días que siguieron a su caída, las discusiones en el seno de la coalición liberal retrasaron los esfuerzos de Juan Álvarez, el presidente del Tribunal Supremo, por organizar un gobierno provisional. Surgieron otros conflictos entre los líderes de la coalición y el ejército. Aunque éste, capitaneado por Ávalos, había acabado doblegándose ante la presión y sacrificando a Perón, no quiso tomar más medidas que hubieran significado el derrumbamiento y el fin de la revolución de 1943. En el seno del ejército, en parte debido a la preocupación ante futuras represalias pero también porque no quería renunciar a sus nuevos poderes tanto en el gobierno como en la economía, creció rápidamente la resistencia al plan de entregar el gobierno al Tribunal Supremo. Se llegó a un punto muerto que continuó hasta que los acontecimientos dieron un giro repentino y decisivo cuando el 17 de octubre miles de obreros marcharon hasta el centro de Buenos Aires para exigir la puesta en libertad de Perón. Si el ejército hubiera querido un gobierno nuevo dominado por los liberales, hubiera podido actuar rápidamente para impedir la marcha de los obreros. No sólo permitió la marcha, sino que autorizó a Perón, que dos días antes había regresado a Buenos Aires desde Martín García, después de convencer a sus carceleros de que necesitaba tratamiento médico, a dirigir la palabra desde la Casa Rosada a las inmensas multitudes reunidas en la Plaza de Mayo. Proclamó una «indestructible unión de hermandad entre el pueblo [y] el ejército».⁵⁴ Después del 17 de octubre la facción de Ávalos en el gobierno de Farrell dimitió; Perón y sus partidarios volvieron al poder.

Para todos los observadores contemporáneos la marcha de los obreros ocurrió de forma totalmente espontánea. Sin embargo, era obvio que Perón había planeado un

54. La traducción literal de esta expresión dice «hermandad entre el pueblo, el ejército y la policía». Véase Félix Luna, *El '45*, Buenos Aires, 1971, p. 295.

acontecimiento de este tipo como parte de su estrategia para la supervivencia política. Al despedirse de su estado mayor el 10 de octubre, instó a tratar de conseguir el apoyo popular. Después de su caída, sus principales colaboradores encabezados por Domingo Mercante recorrieron los distritos industriales y obreros de la ciudad instando a la acción en su nombre. Muchos obreros ya se habían declarado en huelga el 13 de octubre, después de que numerosos patronos rehusaran cumplir la orden de Perón de que el día 12, el «Día de la Raza», fuera fiesta laboral. Los intentos de los obreros de cruzar el río Riachuelo, que dividía la capital federal de la provincia de Buenos Aires, empezaron el 16 de octubre. La gran marcha del 17 de octubre no debía prácticamente nada a la CGT, cuyos líderes no se reunieron hasta la tarde del día 16 mientras las manifestaciones iban in crescendo. Incluso entonces la CGT votó a favor de apoyar a los obreros por un escaso margen de 21 a 19. Sobre todo el «17 de octubre» pareció ser una demostración de comportamiento arraigado, ya que durante un año y pico los sindicatos y los obreros se habían ido acostumbrando a responder a las amenazas contra Perón con la movilización popular.

Los acontecimientos de septiembre-octubre de 1945 demostraron hasta qué punto, en sólo dos años, Perón había transformado totalmente la política argentina: había hecho que la pelea de cincuenta años entre los radicales y los conservadores resultara un anacronismo; había empujado a la clase obrera a participar en la política, al tiempo que prácticamente eliminaba los tradicionales partidos obreros, en particular el socialista; había dividido el país entre los partidarios «peronistas» de la «independencia económica» y la «justicia social» y los defensores «antiperonistas» del antiguo orden liberal. En noviembre, aunque continuó resistiéndose a dar paso a un gobierno bajo el Tribunal Supremo, la junta anunció que se celebrarían elecciones en febrero de 1946. En diciembre de 1945 los adversarios de Perón habían superado finalmente sus diferencias internas y habían formado una Unión Democrática (UD) para concurrir a las elecciones. Los radicales dominaban esta coalición, pero a su lado había una mezcla dispar que incluía restos del conservador Partido Democrático Nacional, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La UD representaba lo más parecido que surgió en Argentina al Frente Popular contra el que se había movilizado el GOU en 1943. Pero la UD carecía del ingrediente principal del Frente Popular: el apoyo de la clase obrera organizada. Detrás de su fachada reformista la coalición subsistía con poco más que el impulso de oponerse a Perón. No obstante, acaudillada por José Tamborini, ex radical con unos antecedentes políticos parecidos a los de Roberto María Ortiz, la UD seguía confiando en obtener una arrolladora victoria electoral.

Para Perón la crisis de septiembre-octubre de 1945 había terminado en un escape casi milagroso del olvido político y, sin embargo, pese al 17 de octubre, no en una victoria definitiva. Ahora se enfrentaba al reto de presentarse con poca organización propia a unas elecciones contra una coalición que comprendía a casi todos los partidos políticos. Tenía el apoyo de los sindicatos de Buenos Aires, pero casi nada más. En menos de cinco meses tenía que formar una coalición nacional. En primer lugar, Perón se aseguró el apoyo del Partido Laborista, nuevo partido obrero respaldado por los sindicatos cuyo modelo era más o menos el Partido Laborista británico. En segundo lugar, después de numerosos fracasos durante 1944 y 1945, Perón logró finalmente ganarse a una minoría considerable de los radicales. Hortensio Quijano, el líder de la facción radical disidente, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, que ahora apoyaba a Perón, se convirtió en su compañero de candidatura y ayudó a pro-

yectar el movimiento a las provincias. Entre los otros desertores radicales que se unieron a Perón a finales de 1945 había varios miembros destacados de la FORJA, junto con algunos nacionalistas conservadores capitaneados por la Alianza Libertadora Nacionalista. En las provincias Perón aumentó sus partidarios atrayendo a unos cuantos caciques políticos de talante conservador que habían probado por última vez el poder bajo Castillo y seguían oponiéndose a toda costa a los radicales. Finalmente, Perón gozaba del apoyo de la Iglesia, ya que se comprometió a conservar la enseñanza religiosa en las escuelas que Martínez Zuviría había vuelto a introducir en 1943 y recordaba continuamente a la jerarquía eclesiástica que los comunistas formaban parte de la UD. A finales de 1945 el «peronismo» creció así rápidamente más allá de su base en los sindicatos bonaerenses y se convirtió en un movimiento heterogéneo con nuevas fuentes de apoyo en las provincias y la población rural.

A medida que se acercaban las elecciones de febrero, y tras haber empezado muy a la zaga de su adversario Tamborini, Perón iba ganando terreno rápidamente. Entonces, cuando faltaban sólo unos días para los comicios, el Departamento de Estado norteamericano publicó un libro azul titulado «A Blue Book: A Memorandum of the United States Government [a otros gobiernos latinoamericanos] With Respect to the Argentine Situation». Spruille Braden, que ahora era subsecretario de Estado, había instigado la preparación y distribución de este documento, cuyo propósito era demostrar «cómo agentes nazis en Argentina ... se habían combinado con grupos totalitarios para crear un estado nazi-fascista». ⁵⁵ El informe presentaba materiales recogidos por Estados Unidos durante la guerra que trataban de demostrar que miembros de sucesivos gobiernos argentinos y personal militar de alta graduación, entre ellos el mismísimo Perón, habían actuado en colusión con el Eje. Repetía las acusaciones de que Argentina había tolerado o alentado el espionaje y la propaganda alemanes; citaba los discursos pro Eje de líderes militares, tratos entre los gobiernos y empresas alemanas y empréstitos concedidos por bancos alemanes a políticos argentinos.

El «Libro Azul» fue recibido por casi todos los bandos argentinos como una burda treta extranjera cuya intención era influir en las elecciones. Reavivó instantáneamente las simpatías nacionalistas, inutilizó a la UD y dio a Perón un asunto importante para unir al electorado a su alrededor. En una entrevista que le hizo un periodista brasileño Perón dio sarcásticamente las gracias a Braden «por los votos que me ha dado. Si me llevo dos tercios del electorado, un tercio se lo deberé a Braden». ⁵⁶ En la recta final de las elecciones, en la campaña peronista resonaba el grito de «¡Braden o Perón!»: la rendición ante las presiones norteamericanas o un audaz compromiso al lado de Perón con un programa de cambio revolucionario. Al hacerse el recuento de votos, se vio que Perón había ganado el 52,4 por ciento frente al 42,5 por ciento de Tamborini (1,49 millones de votos contra 1,21 millones), con el resto de los votos para los partidos menos importantes. Pero habiendo vencido en once de las quince provincias, incluida la capital federal, Perón obtuvo una mayoría arrolladora en el colegio electoral. Tomaría posesión de la presidencia el 4 de junio de 1946, tercer aniversario del golpe de 1943.

Las elecciones de 1946 demostraron que los bastiones del peronismo estaban en la capital y en dos de las tres provincias principales del litoral, Buenos Aires y San-

55. Citado en Wood, *Dismantling of the Good Neighbor Policy*, p. 113.

56. Citado en Enrique Díaz Araujo, *La conspiración del '43*, Buenos Aires, 1971, p. 95.

ta Fe. En las tres jurisdicciones sin excepción la alianza peronista obtuvo más del 50 por ciento del voto popular. Dentro del litoral sólo Córdoba cayó en poder de la UD, gracias a una alianza frágil y formada apresuradamente entre los liberales y los conservadores. Los peronistas obtuvieron una mayoría en Mendoza y Tucumán, las principales provincias vinateras y azucareras, en las cuales había gran número de trabajadores rurales y urbanos, y en las provincias más atrasadas del oeste y el norte, donde vivían grandes comunidades de campesinos: Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. En las ciudades del este, sobre todo en Buenos Aires, el Partido Laborista obtuvo el voto de casi toda la clase obrera, tanto los trabajadores «nuevos» que se componían de emigrantes empleados en nuevas fábricas y nuevos servicios como el proletariado «viejo» que antes votaba a los socialistas.⁵⁷ En la capital y sus principales barrios periféricos empezando por Avellaneda el peronismo apareció así como un movimiento formado en su inmensa mayoría por obreros que obtuvo el apoyo de una pequeña minoría perteneciente a otros sectores. Pero en otras partes el apoyo a Perón fue mucho más heterogéneo e incluía a numerosos grupos rurales que a menudo habían apoyado a candidatos conservadores. La facción disidente radical Junta Renovadora que apoyaba a Perón desempeñó un papel importante en las elecciones al llevarse votos de la facción radical ortodoxa (la Unión Cívica Radical).

En 1946 Argentina se embarcó así en la versión revisada y popular de la revolución nacionalista que proponía Perón. Hasta finales de 1940 pocos habían sido los indicios de la inminencia de esta gran transición. Que el cambio tuviera lugar reflejaba en parte el accidente que representó la retirada y la muerte prematura de Ortiz, ya que, de haber vivido éste, los conflictos entre los radicales y los conservadores que debilitaron a Castillo tal vez hubieran sido mucho menos agudos. Sin embargo, el cambio de presidente no bastó para desatar las fuerzas que acabaron con el conservadurismo liberal. Igual importancia para su caída tuvieron la segunda guerra mundial y el fracaso de los intentos de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, lo cual proporcionó a los nacionalistas la oportunidad de difundir su visión alternativa del futuro de Argentina.

57. La distinción entre las clases obreras «vieja» y «nueva» y su contribución al apoyo electoral a Perón en 1946 se documenta y debate en Peter H. Smith, «La base social del peronismo», y Gino Germani, «El surgimiento del peronismo: El rol de los obreros y de los migrantes internos», en Manuel Mora y Araujo e Ignacio Llorente, eds., *El voto peronista: Ensayos de sociología electoral argentina*, Buenos Aires, 1980, pp. 39-164.

Capítulo 2

ARGENTINA, 1946-c. 1990*

LA DÉCADA PERONISTA, 1946-1955

El día 24 de febrero de 1946 el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de Argentina en una elección sin fraude. Esta victoria fue la culminación de su vertiginoso ascenso político, que había empezado unos cuantos años antes, cuando la revolución militar de junio de 1943 puso fin a una década de gobiernos conservadores y llevó al poder a un grupo de coroneles del ejército con simpatías filo-fascistas. El naciente régimen militar había avanzado a tientas entre la hostilidad que sus tendencias autoritarias y clericales habían despertado en las clases media y alta y la cuarentena diplomática organizada por Estados Unidos como represalia por la postura neutral de Argentina en la segunda guerra mundial. Por medio de astutas maniobras palaciegas Perón se convirtió en la figura dominante del régimen y puso fin al aislamiento político de la elite militar emprendiendo una serie de reformas laborales que surtieron un gran efecto en la clase obrera, numéricamente incrementada por obra del proceso de industrialización y urbanización acelerado a partir de los años treinta. Desde la perspectiva de Perón, la función de estas reformas era prevenir la radicalización de los conflictos y la propagación del comunismo. Sin embargo, la burguesía argentina no temía una inminente revolución social, temor que, en otras épocas y en otros lugares, había facilitado la aceptación de reformas parecidas. De resultas de ello, se sumó al frente antifascista que organizó la clase media, impregnando las divisiones políticas de un visible sesgo clasista.

En 1945 el nuevo clima creado por el inminente triunfo de las fuerzas aliadas empujó a las autoridades militares a buscar una solución institucional. Luego de intentar con éxito limitado obtener el respaldo de los partidos tradicionales, Perón decidió lanzar su candidatura presidencial apelando al apoyo popular que había cultivado durante su permanencia en el poder. En octubre de 1945, ese apoyo resultó decisivo cuando un complot militar instigado por la oposición estuvo a punto de interrumpir su carrera política, al forzar su renuncia y su posterior detención. Una mo-

* Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a Guido Di Tella, cuyo manuscrito sobre la historia económica de este período nos fue de suma utilidad, si bien la responsabilidad final de este capítulo es exclusivamente nuestra.

vilización popular, organizada por los sindicatos y secundada por los partidarios de Perón en el ejército y la policía, logró sacarlo de la cárcel y reinstalarlo en la contienda electoral. La candidatura de Perón fue apoyada por los sindicatos, que eran la fuerza principal detrás del recién creado Partido Laborista, junto con los disidentes del Partido Radical organizados en la UCR-Junta Renovadora. La oposición se agrupó en torno de la Unión Democrática, coalición de partidos centristas e izquierdistas que recibió el ostensible respaldo del sector empresarial y de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Perón aprovechó plenamente estas circunstancias para presentarse como paladín de la justicia social y los intereses nacionales y ganar las elecciones celebradas en febrero de 1946.

Una vez concluidas las elecciones, la coalición peronista, formada en un plazo relativamente breve, reuniendo sectores de orígenes diferentes, se encontró al borde de la desintegración. En el centro del conflicto se encontraban los líderes sindicales del Partido Laborista y los políticos radicales disidentes de la Junta Renovadora. De acuerdo con las reglas constitucionales, los representantes en el Senado eran elegidos indirectamente por las legislaturas provinciales. Antes de los comicios, los laboristas y la Junta Renovadora habían acordado compartir los escaños del Senado a partes iguales, pero cuando llegó la hora los políticos utilizaron argumentos caprichosos y el soborno para desplazar a los líderes laboristas del Senado y los gabinetes provinciales. En este conflicto Perón decidió apoyar a los elementos más dóciles provenientes de los partidos tradicionales y disminuir la influencia de los laboristas. Unos días antes de asumir la presidencia en junio de 1946, ordenó la disolución de los partidos de la alianza electoral y la creación de un nuevo partido, invocando la necesidad de contar con un movimiento cohesionado con el fin de gobernar con eficacia y unidad. Los líderes del Partido Laborista, que insistía en su propia autonomía más que la Junta Renovadora en la suya, debatieron durante varios días la actitud a adoptar. Finalmente, los argumentos a favor de la unidad se impusieron. A cambio de renunciar a sus antiguas ambiciones políticas se les prometió un lugar representativo en el nuevo partido. Los beneficios potenciales que conllevaba su incorporación en el orden político oficial prometían demasiado para arriesgarlos en la defensa de una independencia que les hubiera colocado en los márgenes de la naciente Argentina peronista.

Así pues, la breve resistencia de los laboristas terminó a mediados de junio de 1946. Perón nombró a los organizadores del nuevo partido entre los legisladores recién elegidos. Aunque había unos cuantos sindicalistas, la mayoría eran políticos de clase media. Esta tendencia se acentuaría con el tiempo. No había lugar en el esquema de la nueva organización para sectores que tenían una base de poder independiente del partido mismo.

En enero de 1947, cuando los organizadores del nuevo partido solicitaron a Perón que aprobase el nombre de «Partido Peronista», sancionaron explícitamente otro rasgo, más decisivo, de la estructura política del movimiento. El personalismo fue una consecuencia casi inevitable de un movimiento formado en un período tan breve y partiendo de la convergencia de fuerzas heterogéneas. Por otro lado, Perón procuró recortar la influencia de las fuerzas que le apoyaban en la nueva organización. El Artículo 31 de los estatutos del Partido Peronista, aprobados en diciembre de 1947, le autorizaba a modificar todas las decisiones que tomara el partido además de revisar todas las candidaturas. Aunque Perón tenía contraída una obvia deuda ideológica con la tradición autoritaria en la cual se había formado, el conflicto en el seno

del bloque triunfante de 1946 también gravitó para imponer un liderazgo fuerte y centralizado. La anarquía fue, de hecho, el rasgo distintivo del movimiento peronista durante los primeros años. Sólo el ejercicio constante de la autoridad por parte del propio Perón neutralizó la falta general de disciplina entre sus seguidores.

Poco después de tomar posesión de su cargo Perón resolvió varios conflictos políticos provinciales, empezando en la provincia de Catamarca, substituyendo a las autoridades locales por un interventor nombrado por la Administración central. Este mecanismo de control, previsto en la Constitución, se utilizó abundantemente durante el primer año: en Córdoba en 1947, La Rioja, Santiago del Estero y de nuevo Catamarca en 1948 y Santa Fe en 1949. Incluso Corrientes, la única provincia donde la oposición había triunfado en 1946, fue sometida a la intervención en 1947.

Perón también apuntó hacia el último baluarte de los supervivientes del Partido Laborista. En noviembre de 1946 Luis Gay, ex presidente del partido, fue elegido secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y, desde allí, trató de seguir una línea independiente. La controvertida visita de una delegación de líderes obreros norteamericanos brindó a Perón la oportunidad de acusar a Gay de tramar el retiro del apoyo que la CGT prestaba al gobierno y el ingreso en el movimiento sindical interamericano que promovía Estados Unidos. La acusación desencadenó una campaña violenta de la prensa oficial contra Gay, que tuvo que dimitir en enero de 1947. Unos cuantos de sus colaboradores más allegados dimitieron con él, pero la mayoría optó por adaptarse al nuevo orden. A partir de entonces la CGT, encabezada por figuras de segundo orden, se convirtió en una agencia de las directivas oficiales dentro del movimiento laboral.

Paso a paso, Perón fue recuperando los márgenes de poder independiente que había debido tolerar durante la campaña electoral. Además del Partido Peronista y la CGT, el otro pilar fundamental del régimen eran las fuerzas armadas. La franca ruptura entre los militares y la oposición democrática en 1945 había permitido a Perón lanzarse a la conquista de la presidencia. Después de ser elegido, procuró presentarse como hombre de armas en un esfuerzo por granjearse el apoyo de los militares. Para ello, se esforzó por definir sus relaciones con éstos sobre bases estrictamente institucionales, y aunque muchos oficiales sirvieron en el gobierno, la institución en conjunto no fue involucrada. El objetivo de Perón era la neutralidad del cuerpo de oficiales y, con el fin de alcanzarlo, se abocó ante todo a satisfacer sus exigencias profesionales.

Estos fueron los años de la expansión y la modernización en las fuerzas armadas. Como resultado del auge de las inversiones militares que siguió al golpe de 1943, los gastos militares ya representaban el 38,4 por ciento del presupuesto nacional en 1945. En los años sucesivos, el porcentaje descendió hasta el 20,6 por ciento en 1951, pero, aún así esta cifra estaba muy por encima del nivel de antes de la guerra, que era del 18,2 por ciento, y Argentina continuó destinando más fondos de su presupuesto a la defensa que cualquier otro país latinoamericano. La ampliación del cuerpo de oficiales a un ritmo más rápido que el incremento del número de soldados rasos (el número de generales se dobló entre 1946 y 1951) y la compra de material moderno permitieron ganar la tolerancia de las fuerzas armadas a las políticas del régimen durante los primeros años.

Este intercambio político no habría sido posible sin algún grado de identificación de los militares con los principios generales del gobierno de Perón. El nacionalismo, la industrialización y la justicia social coincidían con creencias profundamente arraigadas entre los oficiales. Además, una prudente manipulación de las rivalidades in-

ternas y el reparto de favores menudos contribuyeron a aislar a los elementos menos confiables y a recompensar la lealtad de los más adictos. Confinadas a un papel profesional que les reportaba beneficios tangibles, las fuerzas armadas se insertaron discretamente en el régimen peronista.

La Iglesia contribuyó, asimismo, a la consolidación del nuevo régimen. Ya durante la campaña de 1946 había desempeñado un papel positivo. Hostigada por el anticlericalismo de las fuerzas políticas tradicionales, imbuida de ideología antiliberal, la jerarquía eclesiástica recibió con agrado el homenaje constante de Perón a la doctrina social de la Iglesia. En vísperas de las elecciones recomendó a sus fieles no votar a los candidatos cuyos programas y actitudes contradijeran el mensaje católico. Fue obvio que esta advertencia apuntaba a la Unión Democrática, que objetaba la decisión del gobierno militar imponiendo por decreto la enseñanza religiosa en las escuelas en 1943. Una vez en el poder, Perón transformó el decreto en ley. Más adelante, la actividad oficial en el campo del bienestar social y la educación habría de enfriar el entusiasmo de los obispos, que no hallaban tampoco fácil conciliar su apoyo a Perón con sus vínculos tradicionales con la clase alta. No obstante ello, se abstuvieron inicialmente de hacer públicas sus reservas, en un esfuerzo por lograr una pacífica coexistencia con el nuevo orden político.

Con el respaldo del ejército y la Iglesia, y la lealtad de una masa popular muy pronto encuadrada bajo un liderazgo centralizado, el nuevo régimen había levantado cimientos seguros para su sustentación. Empero, Perón decidió reforzar igualmente su gobierno por medio de mecanismos burocráticos y represivos. La primera víctima fue la Corte Suprema, que había opuesto resistencia a las reformas sociales de Perón desde el principio. En septiembre de 1946 sus miembros fueron acusados en el Congreso de, entre otras cosas, haber reconocido como legítimos los gobiernos de hecho que surgieron de los golpes militares de 1930 y 1943. Ocho meses más tarde fueron destituidos como parte de una purga general del poder judicial. Otro baluarte de resistencia en 1945, la universidad, pasó por un proceso parecido con la expulsión de miles de profesores. En 1947 fueron cerrados los semanarios políticos de la oposición, y grupos económicos vinculados al régimen empezaron a adueñarse del sistema de radiodifusión nacional. En 1951 la expropiación de uno de los periódicos más tradicionales, *La Prensa*, y su traspaso a la CGT crearon un virtual monopolio estatal de los medios de comunicación. Los pocos que sobrevivieron con cierto grado de independencia se cuidaron bien de no desafiar francamente el tono uniforme y proselitista utilizado por los medios oficiales para celebrar la política del régimen.

Con esta supresión gradual de las libertades públicas, la oposición política se encontró limitada a la esfera del Congreso. Sin embargo, el estrecho margen de votos que había dado la victoria a la coalición peronista fue transformado por la legislación electoral en una abrumadora mayoría gubernamental. La aplicación de la ley Sáenz Peña, que otorgaba dos tercios de los escaños electorales a la mayoría y el tercio restante al principal partido minoritario, dio a los peronistas el control no sólo del poder ejecutivo, sino también de la cámara baja, con 109 de 158 diputados. Además, los peronistas triunfaron en 1946 en trece de los catorce gobiernos provinciales y esto les dio el control del Senado.

La conmoción psicológica que experimentaron las fuerzas de la oposición a raíz de la derrota en las elecciones se vio magnificada cuando se dieron cuenta de que prácticamente habían desaparecido del mapa político. El Partido Demócrata y la facción antipersonalista Unión Cívica Radical (UCR), que había gobernado entre 1932

y 1943, quedaron reducidos a tres diputados y dos senadores. El Partido Socialista, cuya presencia en el Congreso había sido continua desde 1904, no tenía ni un solo representante; lo mismo ocurría con el Partido Comunista. Sólo los radicales habían logrado sobrevivir al colapso, aunque quedaron reducidos a cuarenta y cuatro diputados.

Las tendencias autoritarias del régimen estuvieron lejos de facilitar un apaciguamiento de los antagonismos políticos. El pequeño y combativo bloque de la oposición no dio tampoco tregua al movimiento oficialista, pero sus críticas no lograron traspasar el recinto del Congreso e incluso allí se veían acalladas por la presión de la gran mayoría peronista. En las elecciones legislativas de 1948, el 52 por ciento que la coalición peronista obtuvo en 1946 aumentó hasta situarse en un 57 por ciento, con lo que el poder político quedó todavía más concentrado.

Garantizada su legitimidad en el plano interno, el nuevo gobierno buscó restablecer sus relaciones con Estados Unidos. Unas semanas después de asumir el poder, Perón envió al Congreso el Acta de Chapultepec (marzo de 1945) para su ratificación y oficializar, así, el reingreso de Argentina en la comunidad interamericana. Simultáneamente, se permitió un gesto de independencia y renovó las relaciones con la Unión Soviética, que habían estado suspendidas desde 1917. A esto le siguió la deportación de un número de espías nazis y la adquisición por el estado de compañías de propiedad alemana y japonesa. En junio de 1947 el presidente Truman declaró su satisfacción con la conducta argentina. En la muy demorada conferencia interamericana convocada en Río de Janeiro en septiembre de 1947 el ministro de Exteriores de Perón, con una actitud muy diferente de la de su predecesor en la anterior conferencia de Río, celebrada en 1942, firmó el Tratado de Seguridad del Hemisferio. La recompensa fue el levantamiento del embargo de armas por parte de Estados Unidos.

Al terminar la segunda guerra mundial, Argentina se encontró libre de deuda externa y en posesión de importantes reservas de divisas extranjeras, al tiempo que se beneficiaba de la gran demanda y los precios elevados de sus exportaciones de alimentos y de una industria en crecimiento. Dentro de este marco, el gobierno peronista puso en práctica una política económica con tres objetivos principales: la expansión del gasto público, reforzando el papel del estado en la producción y la distribución; la alteración de los precios relativos con el fin de fomentar una distribución más igualitaria de la renta nacional; y el progresivo establecimiento de un sistema de incentivos que premió las actividades orientadas al mercado interno y desestimuló la producción destinada a los mercados internacionales.

Esta combinación de intervención estatal, justicia social y economía orientada hacia adentro no fue una experiencia aislada en América Latina en la década de 1940. Es cierto que en el caso argentino, caracterizado por un mercado de trabajo sin grandes bolsas de marginalidad y un movimiento sindical muy activo, el sesgo igualitario fue más acentuado que en otros países de la región. No obstante, el destacado papel del sector público en la acumulación de capital y el énfasis creciente en el mercado interno constituían, casi sin excepción, la contraparte regional del keynesianismo en boga en los países principales de Occidente.

La economía peronista no fue fruto de una estrategia económica deliberada. Las bases sociales del régimen condicionaron sus opciones económicas. Entre el proyecto de la industrialización para la defensa nacional, a partir de la industria pesada, auspiciado por oficiales del ejército durante la guerra, y la continuación de la industrialización liviana, Perón escogió la segunda opción, que era más congruente con

una distribución progresiva de la renta. En sólo tres años —entre 1946 y comienzos de 1949— el salario real aumentó más de un 40 por ciento. Esta alteración de los precios relativos, casi sin precedente nacional o incluso internacional, produjo una rápida expansión del consumo y un crecimiento industrial que alcanzó el 10,3 por ciento en 1946, el 12,1 por ciento en 1947 y el 6,9 por ciento en 1948. En este contexto el clima de optimismo prevaleciente en el sector empresarial venció la inquietud causada por la audaz política de ingresos y el poder de los sindicatos, preparando el camino para una euforia prolongada en la Bolsa y una oleada de inversiones por parte de las empresas privadas. La idea de que el beneficio capitalista podría aumentar al mismo tiempo que subían los salarios dejó de ser una paradoja ensalzada por la propaganda oficial y se convirtió en una convicción generalizada.

El rápido crecimiento del aparato económico estatal y las restricciones a los flujos del comercio exterior no fueron tampoco decisiones que se derivaron racionalmente de una estrategia económica original. Es verdad que a partir de 1946 el gobierno peronista llevó a cabo una política de nacionalización de los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, marina mercante, líneas aéreas, gasolina, etcétera). Estas decisiones, junto con los crecientes fondos del presupuesto asignados a la política de bienestar social, condujeron a una ampliación progresiva de la esfera de acción del estado y un salto de alrededor del 30 por ciento del gasto público. También es cierto que a través de la política cambiaria y a la imposición de restricciones cuantitativas a las importaciones —especialmente después de 1948— se fue moldeando una economía volcada hacia adentro de sus propias fronteras con un bajo grado de exposición a la competencia internacional.

Sin embargo, parecía no haber ninguna alternativa a estos fenómenos, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el de la principal oposición. Ambos estaban convencidos del inminente estallido de una tercera guerra mundial y creían que ésta acabaría asestando un fuerte golpe al comercio internacional. También albergaban cierta desconfianza, común en América Latina, ante el liderazgo del capital privado en el proceso de desarrollo. Partiendo de estas premisas, ambos bandos coincidían en pensar que la construcción de un estado fuerte y extenso y la protección de las empresas nacionales —intrínsecamente débiles ante la competencia extranjera— eran necesarias para el crecimiento económico y, sobre todo, para el mantenimiento de un elevado nivel de empleo. Además, el estatismo generalizado en la mayoría de los países occidentales, la calma tensa de la guerra fría y la lenta expansión de las oportunidades comerciales en el mercado mundial para la industria argentina parecían corroborar el diagnóstico dominante.

La política económica del peronismo, con sus rasgos nacionalistas, keynesianos y distribucionistas, fue posible gracias a la combinación de una serie de circunstancias favorables que no se repetirían en la historia de la economía argentina. Después de casi dos décadas de crisis comercial, la abrupta mejora de los precios de las exportaciones agrícolas y, por consiguiente, de los términos de intercambio permitió que la nueva prosperidad se financiara con divisas extranjeras y abriera un cauce a las medidas de redistribución necesarias para consolidar el régimen peronista. Las reservas de fondos extranjeros acumulados durante la guerra —gran proporción de los cuales no era convertible— también permitieron financiar la nacionalización de servicios públicos.

Además, la relativa abundancia de recursos fiscales fáciles de recaudar significó que el nuevo nivel de gasto público pudo alcanzarse y mantenerse sin grandes dificultades. La creación del Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio

(IAPI), entidad que tenía el monopolio virtual del comercio exterior, proporcionó al gobierno acceso indirecto a la principal fuente de acumulación de capital y permitió desviar el alza de los precios de exportación en beneficio del sector público. Con este objeto, el IAPI compraba cereales a los productores locales a un precio que fijaban las autoridades y los vendía en el mercado internacional a precios más altos. Los recursos obtenidos por medio de este mecanismo, junto con los ahorros forzosos procedentes de un sistema de pensiones con importante superávit y una amplia batería de impuestos directos e indirectos que recayeron, en particular, sobre los grupos de renta más elevada, fueron conformando la imagen veraz de un estado rico y generoso.

Finalmente, la nacionalización del sistema financiero y la notable expansión de sus depósitos, resultante en buena medida del ascenso económico de los pequeños ahorradores beneficiados por la redistribución de la renta, permitieron incrementar los créditos subvencionados hacia las empresas públicas y privadas. Esta política crediticia constituyó una parte importante de la economía peronista, ya que estimuló las inversiones en capital y abarató el capital de trabajo, compensando así los efectos del mayor coste de la mano de obra mediante los beneficios financieros.

Así, la economía peronista se vio favorecida por la evolución excepcional del mercado internacional de la posguerra, los crecientes ingresos fiscales y la masificación del ahorro institucionalizado. Esta estrategia de desarrollo, que se basaba en el poder adquisitivo del estado y en los salarios altos, y que, por estar orientada al mercado interno, pudo hacer caso omiso de los inevitables costos en términos de eficacia y competitividad, duró apenas tres años. No obstante, fueron los años que grabaron una imagen duradera de la economía del peronismo en la memoria colectiva.

Entre 1946 y 1948 Argentina debió hacer frente a las trabas a su comercio externo creadas por el boicot impuesto por los Estados Unidos como consecuencia de la neutralidad argentina en la segunda guerra mundial. El boicot había empezado ya en 1942 y hasta finales de la década la política comercial norteamericana trató a Argentina como nación enemiga. Se aplicó un embargo parcial de combustible y se negaron al país otras importaciones fundamentales, por encima de las restricciones que imponía la guerra. De 1946 a 1949 el foco del boicot se desvió desde las trabas al abastecimiento de insumos industriales críticos hacia un esfuerzo por reducir las exportaciones argentinas, con vistas a forzar a un régimen considerado hostil a hacer concesiones políticas. Cuando se normalizaron las relaciones en 1947 el hostigamiento económico por parte del gobierno de Estados Unidos continuó de forma encubierta, a través de la Economic Cooperation Administration (ECA). Este poderoso organismo, encargado de distribuir los fondos del Plan Marshall a sus beneficiarios europeos, desalentó las compras de alimentos argentinos al tiempo que fomentó las de sus competidores, como Canadá y Australia. Esta política estaba, empero en contradicción con las directivas del Departamento de Estado norteamericano. Sus efectos fueron lo bastante perjudiciales como para suscitar el reconocimiento extraoficial por parte de funcionarios norteamericanos de que la discriminación de la ECA había contribuido a la escasez de dólares de Argentina y colocado al país en la ruta de una futura catástrofe económica. Cuando los obstáculos puestos a la principal fuente de divisas externas del país coincidieron con la declaración unilateral de Gran Bretaña de la inconvertibilidad de la esterlina en agosto de 1947, la situación se hizo cada vez más difícil de manejar.

Dirigiendo ahora la atención a las fuerzas económicas hay que destacar que los terratenientes argentinos demostraron una gran flexibilidad ante el nuevo régimen. Perón contribuyó a ello al escoger a un miembro de la Sociedad Rural para el cargo

de ministro de Agricultura. Además, les aseguró que las veladas amenazas de expropiación de la tierra hechas durante la campaña electoral serían archivadas. La asociación representativa de los propietarios rurales pronto hizo las paces con el nuevo presidente y mantuvo intacta su estructura institucional. La suerte que corrió la Unión Industrial fue distinta. Los empresarios industriales desafiaron al nuevo gobierno nombrando a líderes anticorporacionistas al frente de su asociación. El precio que pagaron por su audacia fue una decisión gubernamental poniendo fin a la independencia de la central empresaria. Poco a poco, sin embargo, los empresarios fueron acomodándose a la nueva situación cuando se dieron cuenta de que la política oficial no llegaría al extremo de confiscar los beneficios del auge económico y su franca resistencia inicial se transformó en un forzado conformismo.

Por su parte, los sindicatos continuaron reclutando nuevos afiliados con apoyo oficial. Los 877.300 obreros sindicalizados que había en 1946 se convirtieron en 1.532.900 en 1948. En la mayoría de los sectores de la economía urbana la tasa de sindicalización se situó entre un 50 y un 70 por ciento. El aumento de la influencia sindical corrió paralela con la extensión y la unificación de las instituciones que regulaban las relaciones laborales. Durante los años previos, las normas laborales habían reflejado grandes desequilibrios de fuerza en el seno del movimiento laboral; las condiciones de trabajo de que gozaban, por ejemplo, los empleados de los ferrocarriles eran desconocidas en otros sectores. La política laboral de Perón acabó con este tipo de elitismo sindical. A partir de 1946 las negociaciones colectivas penetraron profundamente en el mercado laboral; el sistema de pensiones se hizo extensivo a los empleados y trabajadores de la industria y el comercio; y se introdujeron las vacaciones pagadas y las indemnizaciones por despido. La tolerancia oficial y una situación próxima al pleno empleo se tradujeron en un aumento del activismo sindical dirigido contra las empresas. En 1945 las huelgas en la ciudad de Buenos Aires afectaron a 50.000 trabajadores; en 1946 el número de huelguistas aumentó hasta situarse en 335.000; y la cifra correspondiente al año siguiente fue de 550.000.

El clima social que acompañó al desarrollo del régimen necesitaba una vigilancia constante, para la cual Perón encontró a la colaboradora ideal en la persona de su propia esposa. Eva Duarte había nacido en el seno de una familia de clase media baja en la provincia de Buenos Aires y era hija ilegítima de un estanciero que se negó a reconocerla a ella y a sus hermanos. A la edad de quince años llegó a Buenos Aires, atraída por el encanto de la ciudad e interpretó pequeños papeles en olvidables obras de teatro y programas de radio hasta que conoció a Perón en 1944. Eva asimiló rápidamente las nociones elementales de una educación política que le impartió el extrovertido oficial del ejército que le profesaba admiración. En 1946 Evita —como pronto fue llamada— tenía veintisiete años de edad y en seguida resultó obvio que no pensaba aceptar un papel decorativo como primera dama del régimen. Mientras Perón se concentraba en las tareas de gobierno, Evita tomó para sí la activación política del movimiento oficial, a cuyo servicio puso una retórica vibrante y deliberadamente brutal que enardecía a sus seguidores y despertaba miedo y odio entre sus enemigos. Tal como escribió en su autobiografía:

Porque conozco las tragedias personales de los pobres, de las víctimas de los ricos y poderosos explotadores del pueblo, debido a esto, mis discursos suelen contener veneno y amargura... Y cuando digo que se hará justicia de manera inexorable, cueste lo que cueste y afecta a quien afecte, estoy segura de que Dios me perdonará por insultar

a mis oyentes, ¡porque he insultado empujada por el amor a mi pueblo! Él les hará pagar por todo lo que han sufrido los pobres, ¡hasta la última gota de su sangre!¹

Su injerencia se hizo visible primero desde su despacho del ministerio de Trabajo, donde administraba recompensas y castigos y enseñaba a los líderes sindicales la férrea disciplina del nuevo régimen. Más adelante tendió la mano a los sectores más marginados de la población, el subproletariado urbano y las clases más atrasadas de las provincias, para las cuales los nuevos derechos laborales tenían sólo importancia limitada. Evita creó una red de servicios sociales y hospitalarios para ellos por medio de la Fundación Eva Perón, que substituyó y superó largamente las organizaciones de caridad de inspiración religiosa de las clases altas. La fundación se convirtió en un eficaz instrumento para hacer proselitismo entre los sectores más pobres y sus actividades llegaron hasta todos los rincones del país con envíos de máquinas de coser, bicicletas y pelotas de fútbol. Más tarde, Evita encontró otra cruzada a la que podía dedicar sus energías en la condición política de las mujeres: dirigió la campaña a favor del sufragio femenino y, una vez instaurada por ley en 1949, organizó la rama femenina del partido oficial. Por medio de su intervención, el peronismo continuó la movilización política iniciada en 1945; nuevos sectores se sumaron al vasto séquito popular del régimen, complementando y al tiempo recortando el papel de los sindicatos dentro del mismo.

La prosperidad económica, el apoyo popular y el autoritarismo se combinaron para garantizar el desarrollo del régimen, que trató de afianzarse por medio de la reforma constitucional de 1949. Una asamblea constitucional en la cual los seguidores de Perón tenían una mayoría holgada introdujo modificaciones en la Constitución liberal de 1853. Algunas de estas medidas consolidaron los avances en los derechos civiles y laborales. Un artículo basado en la Constitución mexicana instauró la propiedad estatal de los recursos energéticos, pero la modificación política más significativa consistió en revocar la disposición que prohibía que el presidente fuera reelegido de manera consecutiva.

Una vez aprobada la reforma, se inició una campaña para que Perón fuese reelegido en 1951. Los sindicatos propusieron que Evita también formara parte de la candidatura presidencial, pero la idea no contó con la aprobación de los jefes militares, que aconsejaron a Perón su rechazo. El presidente se inclinó ante el veto militar y Evita anunció luego que retiraba su candidatura. La victoria arrolladora de Perón en las elecciones de noviembre de 1951, con Hortensio Quijano como candidato a la vicepresidencia para un segundo mandato, defraudó todas las esperanzas de vencer al peronismo por la vía electoral. La lista de candidatos oficiales obtuvo 4.580.000 votos, mientras que los candidatos del Partido Radical, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, a quienes se les había negado el acceso a los medios de comunicación, obtuvieron 2.300.000 votos.

Al votar a favor de Perón por un margen de 2 a 1, el electorado le autorizó a seguir avanzando por el camino autoritario. En 1952, el Congreso, en el cual los cuarenta y cuatro diputados de la oposición habían quedado reducidos a catorce, elevó la ideología peronista a la condición de doctrina nacional bajo el nombre de «justicialismo». Esta «nueva filosofía de la vida, sencilla, práctica, popular y fundamentalmente cristiana y humanística», tenía como «supremo objetivo garantizar la feli-

1. Eva Perón, *La razón de mi vida*, Peuser, Buenos Aires, 1951, p. 122.

cidad del pueblo y la grandeza de la Nación por medio de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad».² Su imposición obligatoria a funcionarios y ciudadanos eliminó todo rastro de pluralismo en la vida política y condenó a los demás partidos a una existencia prácticamente clandestina.

Una vez que el peronismo se consideró a sí mismo el único movimiento nacional, sus relaciones con el resto de la sociedad estaban destinadas a cambiar. Uno de los cambios más importantes después del comienzo del segundo mandato de Perón en junio de 1952 fue la reorganización de los vínculos entre el estado y los intereses sociales. El orden corporativista erigido por Perón fue congruente con su ideología; prometía una sociedad armoniosa libre de luchas de clases. El nuevo equilibrio entre las fuerzas sociales habría de facilitar la instauración de una «comunidad organizada» cuyos principales componentes rivales se unían para actuar como un conjunto orgánicamente interdependiente bajo la conducción del estado. Después de las elecciones de 1951, el incipiente orden corporativista se amplió de manera sucesiva. A la CGT se sumaron la Confederación General Económica (CGE), organización que aglutinaba al sector empresario, y, poco después, la Confederación General de Profesionales, la Confederación General Universitaria y la Unión de Estudiantes Secundarios.

Las motivaciones ideológicas no eran el único factor que inspiró la nueva arquitectura del régimen. También gravitó la aspiración a construir un orden político que se centrara menos en los sectores obrero y popular y otorgara claramente al estado el papel de árbitro entre las fuerzas sociales. La creación de esta nueva estructura de poder modificó asimismo la posición que ocupaban las fuerzas armadas, que ya habían empezado a perder la relativa autonomía de que habían gozado entre 1946 y 1949. Perón comenzó a exigir una creciente integración de las instituciones militares en el movimiento político oficial, mientras procuraba ganar a los oficiales de alta graduación por medio de nuevos favores y privilegios. Las reiteradas pruebas de la fuerza electoral del peronismo convencieron, a su vez, a la oposición política de que el camino de las urnas no contenía ningún futuro para ella; apoyada por varios militares retirados que habían sido víctimas de las purgas de 1945, hizo diversos intentos vanos de derrocar al presidente. Sin embargo, su suerte pareció cambiar hacia 1951 debido al descontento existente entre los militares ante las claras señales de que Perón se estaba preparando para ser reelegido y que, más grave aún, Evita le acompañaría en la candidatura presidencial. Esta amenaza ayudó a vencer la resistencia de los altos mandos militares, que empezaron a discutir la destitución de Perón. Pero diferencias tácticas y rivalidades personales primero y luego el retiro de la candidatura de Evita dificultaron la gestación de un levantamiento coordinado; el general retirado Benjamín Menéndez hizo un intento aislado que fue sofocado rápidamente. La reelección de Perón por un 62 por ciento de los votos provocó un repliegue de los conspiradores y despejó la vía para una intensificación del control político de las fuerzas armadas. A partir de 1952 los intentos de substituir la subordinación constitucional al jefe del estado por la lealtad al liderazgo personal de Perón se hicieron más manifiestos. Los militares cedieron ante las nuevas exigencias, pero su descontento permaneció vivo, en particular entre los oficiales de los cuerpos intermedios.

2. Véase Alberto Ciria, *Política y cultura popular. La Argentina peronista*, De la Flor, Buenos Aires, 1984, p. 62.

La reorientación de los militares con respecto al peronismo formó parte de un proceso más amplio. Debido a su nivel de vida y a su procedencia social, los miembros del cuerpo de oficiales compartían la preocupación con que las antiguas clases medias seguían la presencia abrumadora de las masas en la vida pública. La rapidez con que se había producido el cambio social hizo flaquear el espíritu tradicionalmente progresista de la clase media urbana. Países más antiguos habían pasado por cambios estructurales parecidos a los de Argentina con la intensificación de la industrialización, pero en ellos las instituciones habían absorbido estos cambios en forma más gradual y lenta, por lo que la transición a la democracia de masas había sido menos brusca. En cambio, en la Argentina de Perón todo parecía suceder a la vez y demasiado rápido: el crecimiento de los sectores obreros, el desarrollo de los sindicatos, la expansión del bienestar social y, en un nivel más profundo, la quiebra de la deferencia que el antiguo orden acostumbraba a esperar de los estratos más bajos de la sociedad.

Esta subversión de las pautas tradicionales de poder y prestigio se vio agravada por una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde llegaría el peronismo? ¿Cuándo consideraría Perón que la reparación histórica a las masas populares había quedado completada? Para que la clase media urbana advirtiera que detrás del lenguaje agresivo de la pareja gobernante existía un respeto no menos sincero por las bases últimas del orden existente, se hubiera necesitado una capacidad de percepción que, en aquellas circunstancias, apenas poseía. Movidas por una profunda aversión al tono plebeyo que teñía los logros del régimen, se convirtieron en la masa de maniobras de la oposición conservadora. Un movimiento de resistencia civil comenzó a tomar forma, al principio de manera subrepticia y consistente en pequeños y simbólicos gestos de rebelión.

El 26 de julio de 1952 murió Evita, víctima del cáncer. Con ella desapareció la figura que mejor representaba al movimiento peronista para las masas populares, pero también cuanto éste tenía de intolerable para sus adversarios. El sentimiento de hondo dolor colectivo que provocó su desaparición inauguró, de forma ominosa, el segundo mandato de Perón. Desaparecido el elemento clave del activismo popular, el gobierno apareció desde entonces como una máquina burocrática que carecía del atractivo político de los primeros años y mostraba los vicios asociados con un poder demasiado seguro de sí mismo; a principios de 1953 el círculo íntimo de Perón se vio envuelto en un escandaloso caso de corrupción que tuvo por protagonista a Juan Duarte, hermano de Evita. La CGT respondió apoyando los esfuerzos del presidente por rectificar las cosas, pero el acto público en solidaridad con Perón terminó de manera dramática, al estallar varias bombas puestas por comandos opositores, que causaron heridos y muertos. La respuesta inmediata de los peronistas fue incendiar el Jockey Club, la sede tradicional de la clase alta, y destruir las oficinas centrales de los partidos de la oposición. Una oleada de detenciones en masa siguió a estos sucesos y descargó un duro golpe sobre el embrionario movimiento de resistencia.

Tras esos incidentes, Perón pareció darse cuenta de la necesidad de disipar la tensión política. Las puertas del palacio presidencial se abrieron a los líderes de la oposición, pero los interlocutores que importaban eran los radicales. Diez años después de la revolución de 1943, el apoyo electoral tanto de los conservadores como de los socialistas prácticamente había desaparecido. Los radicales, que habían ampliado su audiencia al presentarse como la única alternativa al peronismo, se mostraron poco dispuestos a llegar a un entendimiento que, si daba buenos resultados, entrañaría la

renuncia a su papel de ferviente oposición. El gobierno tampoco fue muy lejos en la busca de la reconciliación. Hacia finales de 1953 se declaró una amnistía, pero sus beneficiarios descubrieron que estar fuera de la cárcel pocas cosas cambiaba, toda vez que las restricciones a la actividad política se mantuvieron en plena vigencia.

Para entonces la prosperidad económica que había acompañado a la instauración del régimen peronista se estaba disipando. Las primeras señales de deterioro de la economía ya eran evidentes en 1949. Después de cuatro años consecutivos de superávit, el déficit comercial ascendió a 160 millones de dólares, debido en gran parte a un descenso de los términos de intercambio. El índice de los términos de intercambio (1935 = 100) fue de 133 en 1947 y 132 en 1948. En 1949 retrocedió hasta 110, y en 1950, hasta 93. Al mismo tiempo, la inflación, que había sido del 3, 6 por ciento en 1947, aumentó hasta alcanzar un 15, 3 por ciento en 1948 y un 23, 2 por ciento en 1949. La expansión del gasto público y el consiguiente crecimiento del déficit fiscal completaban un panorama de crecientes dificultades.

Aunque entre los miembros del gobierno crecía la conciencia del comienzo de la crisis, se limitaron a corregir los precios relativos y, careciendo de una política de austeridad fiscal, durante un tiempo titubearon entre la continuidad y el cambio. Para un modelo de crecimiento que desde el principio se había basado en el liderazgo del sector público y en el crédito barato para financiar la expansión del mercado interno y los salarios altos, la estabilización tenía un coste muy elevado en términos del nivel de actividad, el empleo y los niveles salariales.

Por estas razones, las primeras medidas fueron parciales y muy poco eficaces. Miguel Miranda, que había presidido los asuntos económicos durante los años de bonanza, fue substituido por Alfredo Gómez Morales, al que se encargó que tomara una nueva dirección. Sus primeras medidas consistieron en una devaluación moderada de la moneda y un racionamiento del crédito tanto para el sector privado como para el público. No obstante, los tipos de interés que el Banco Central cargaba sobre las líneas de crédito especiales continuaron siendo negativos y se mantuvieron los salarios reales en los elevados niveles de años anteriores. Los resultados de esta primera prueba de estabilización, de 1949 a 1950, fueron, por tanto ambiguos: la prosperidad de los primeros tiempos se interrumpió al entrar la economía en una fase recesiva, pero los precios relativos y el modelo distributivo existente no se modificaron.

La crisis alcanzó su nivel más alto en 1951 y expuso las debilidades de una estrategia económica que había dado buenos resultados gracias a excepcionales circunstancias internas y externas. Durante 1951 y 1952 los términos de intercambio continuaron cayendo y colocaron al país en una situación de estrangulamiento externo que más adelante se repetiría con frecuencia pero que en esta etapa hizo añicos el optimismo oficial sobre la evolución de los mercados internacionales. La balanza comercial tuvo 304 millones de dólares de déficit en 1951 y 455 millones de dólares en 1952. Al mismo tiempo, la inflación volvió a acelerarse y alcanzó un índice de más del 30 por ciento en 1952. Fue entonces que el gobierno decidió efectuar un cambio radical de su política económica y revisar sus prioridades iniciales. La nueva estrategia favoreció entonces la estabilidad a expensas de la expansión económica y el consumo, la agricultura a expensas de la industria, la iniciativa privada y el capital extranjero a expensas del crecimiento del sector público.

Convencido de que la lucha distribucionista tenía un papel principal en la inflación el Gobierno impuso una tregua social a las empresas y los sindicatos. El instrumento que empleó con tal fin fue una congelación de salarios y precios durante dos

años, de mayo de 1952 a mayo de 1954, luego de reajustar los salarios y los precios. Se encomendó a la Comisión de Precios y Salarios, formada por representantes de la CGT, las empresas y el gobierno, la misión de controlar la marcha del acuerdo social y estudiar el otorgamiento de incrementos salariales en función de la productividad del trabajo. La aceptación de las restricciones salariales por parte de los trabajadores se vio facilitada por el control de los precios y por las subvenciones concedidas a los alimentos y a los costes de las empresas de servicio público.

La prioridad que se dio a la política contra la inflación y la conciencia clara del apoyo popular que sostenía al régimen hicieron que Perón prescindiese de la opción de una nueva devaluación, aunque representaba una manera rápida de eliminar el déficit de la balanza de pagos. El tipo de cambio se mantuvo constante en términos reales, debido a que una devaluación desviaría los mayores ingresos hacia los agricultores pero a costa de incrementar los precios de los alimentos en el mercado interno. Con el fin de controlar el desequilibrio exterior, las autoridades recurrieron primero a un mecanismo que se había empleado de forma selectiva desde 1948: las restricciones cuantitativas a la importación. Estas restricciones se habían aplicado en diciembre de 1950, cuando el estallido de la guerra de Corea pareció el preludio de una tercera contienda mundial y llevó a la compra de productos importados que podían escasear en el futuro inmediato. En 1952 estas compras tuvieron que reducirse drásticamente mientras una grave sequía obligaba a Argentina a importar trigo por primera vez en su historia.

Una vez descartada la opción de la devaluación, se estimuló la producción agrícola por medio de una reorientación de las subvenciones. El IAPI, que hasta entonces había servido para transferir recursos del campo a los centros urbanos, subvencionó ahora los precios que cobraban los agricultores por las cosechas que exportaban. Herramientas clave de esta operación fueron asimismo, una política monetaria más restrictiva para con la industria y una caída de las inversiones públicas. .

Esta política de ajuste y austeridad tuvo tanto beneficios como costos. La inflación empezó a bajar y alcanzó un mínimo de 3, 8 por ciento en 1954. Los desequilibrios de las finanzas públicas fueron reducidos al 9, 8 por ciento del PIB en 1949 y un poco más del 5 por ciento en 1952. Al mismo tiempo, la producción industrial cayó en un 7 por ciento en 1952 y un 2 por ciento en 1953. Los salarios reales disminuyeron un 25 por ciento en dos años. A pesar de estos costes, se pusieron los cimientos para una rápida y sorprendente reactivación económica. Esta recuperación se apoyó también en una política crediticia más moderada, una mayor ayuda financiera al sector agrícola y una política de ingresos más restrictiva.

La reorientación de la política económica incluyó un papel nuevo para las inversiones extranjeras. Para entonces, Argentina era casi autosuficiente en bienes de consumo final. La demanda de importaciones estaba concentrada en los combustibles y las materias primas y los bienes de capital que requería un sector industrial más diversificado que el que existía antes de la guerra. Los problemas del suministro y los obstáculos a la modernización industrial creados por la escasez de divisas fuertes indujeron a Perón a hacer un llamamiento a las inversiones extranjeras. Este cambio en la ideología estatista y nacionalista del régimen empezó en 1953 con una nueva ley de inversiones extranjeras, más permisiva, a la que siguieron acuerdos con varias compañías, entre ellas Mercedes Benz y Kaiser Motors. La iniciativa más audaz se tomó en el campo de la explotación del petróleo, bastión sagrado del nacionalismo argentino, en el cual se hizo un intento de atraer a una subsidiaria de la Standard Oil

Company. Tratando de convencer a un grupo de líderes sindicales de la bondad de su nueva política, Perón dijo:

Y, por tanto, si trabajan para la YPF [la compañía petrolera estatal], no perdemos absolutamente nada, porque incluso les pagamos con el mismo petróleo que ellos extraen. Es bueno, pues, que vengan a darnos todo el petróleo que necesitamos. Antes, ninguna compañía quería venir si no se le daba el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan, ¿por qué no debería ser una transacción comercial, una transacción importante, si todos los años gastamos más de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos cuando lo tenemos bajo tierra y no nos cuesta ni un centavo? ¿Cómo podemos seguir pagando esto? ¿Para que ellos saquen beneficios? Por supuesto, no van a trabajar por amor al arte. Ellos se llevarán sus beneficios y nosotros, los nuestros; eso es justo.³

La apertura al capital extranjero supuso, si no el abandono, al menos una modificación de muchos aspectos de la política exterior peronista. Esta política se había inspirado en lo que dio en llamarse la Tercera Posición, un esfuerzo por encontrar un lugar entre los dos bloques rivales que nacieron de la segunda guerra mundial. La Tercera Posición, que puso de manifiesto la influencia de la corriente de no alineamiento entre los países que habían alcanzado la independencia en el proceso de descolonización de la posguerra, fue, sobre todo, un instrumento que utilizó Perón para negociar el precio de su apoyo a Estados Unidos en los asuntos internacionales. Después de 1953, esta política fue substituida progresivamente por una franca búsqueda de buenas relaciones con la nueva administración de Eisenhower.

La crisis que habría de provocar la caída del régimen peronista tuvo sus orígenes menos en la situación económica que en los conflictos políticos que el propio Perón desató. De hecho, la economía argentina de 1953 a 1955 gozó de buena salud, comparada con la emergencia de 1952. El índice de inflación anual, después de haber subido hasta superar el 30 por ciento, descendió hasta quedar en un 4 por ciento en 1953 y un 3, 8 por ciento en 1954. Después del brusco descenso de 1952, los salarios reales industriales aumentaron, aunque sin volver a alcanzar el nivel de 1950. Lo mismo ocurrió con las ganancias de las compañías. La actividad económica se recuperó con un crecimiento acumulativo del producto interior bruto del 5 por ciento entre 1953 y 1955. La balanza de comercio exterior fue positiva en 1953 y 1954, aunque fue deficitaria a finales de 1955. Había, por cierto, problemas pendientes de resolución. A pesar de los excelentes resultados de 1953, la producción agrícola no pudo aumentar su volumen de saldos exportables. Al mismo tiempo, la reevaluación de la divisa local y el desfase de los precios de los servicios públicos constituían factores de inflación reprimida. Pero el panorama económico no mostraba señales de crisis inminente. Además, el acercamiento en las relaciones con Estados Unidos y la apertura al capital extranjero habían galvanizado la imagen del régimen peronista en el extranjero.

La causa más directa de la conspiración militar que puso fin al régimen peronista la suministró el enfrentamiento del gobierno con la Iglesia. Para las fuerzas armadas, el apoyo de la jerarquía eclesíastica a la política oficial había sido la confirmación del carácter culturalmente conservador del peronismo. Sin embargo, a finales

3. *La Nación*, 17 de septiembre de 1953; citado en Robert Potash, *El ejército y la política en la Argentina, 1945-1962*, Sudamericana, Buenos Aires, 1981, p. 225.

de 1954 una sucesión de iniciativas del gobierno empezó a debilitar los intereses y la influencia de la Iglesia en la vida nacional. Entre ellas, la eliminación de las subvenciones estatales para las escuelas privadas, la legalización de la prostitución y la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. ¿Qué había detrás de esta súbita ofensiva contra la Iglesia?

Esta cuestión ha dado pie a innumerables interrogantes, toda vez que Perón nunca explicó claramente las causas del conflicto. Se ha sugerido que la razón podría haber estado en el malestar de Perón frente al abandono de la neutralidad política por parte de la jerarquía eclesiástica al decidirse a apoyar la creación de un Partido Cristiano Demócrata; otros han sostenido que el conflicto fue creado deliberadamente en la búsqueda de un nuevo elemento de cohesión del movimiento peronista en unos momentos en que el régimen debía archivar definitivamente su nacionalismo económico. Sea cual fuere la explicación, lo cierto es que Perón desencadenó un conflicto que aumentó hasta escapar a su control y precipitó así el fin de su régimen.

Las reformas legales antes mencionadas fueron secundadas por una masiva campaña anticlerical en la prensa oficial. Perón irritó a los obispos al dedicar mayor atención oficial al clero de otros cultos religiosos, incluso a los adeptos al espiritismo. Durante la primera mitad de 1955 el enfrentamiento revistió un tono más amenazante al anunciarse una nueva reforma constitucional para decidir la separación de la Iglesia y el estado. Ante estos ataques, la jerarquía eclesiástica optó por la prudencia, pero los sectores católicos activistas cerraron filas y convirtieron los templos en tribunas de protesta moral y política. Los más diversos grupos de la oposición antiperonista acudieron en su ayuda al percatarse de que el conflicto brindaba la oportunidad de reactivar el movimiento de resistencia. Bajo una nueva bandera, la alianza de 1945 entre la clase media, los círculos conservadores y los estudiantes volvió a apoderarse de las calles. El 11 de junio de 1955, día del Corpus Christi en el calendario católico, una multitudinaria procesión desfiló por el centro de Buenos Aires desafiando las prohibiciones de la policía.

Los acontecimientos de los tres meses siguientes revelarían un fenómeno novedoso: un Perón desprovisto de la astucia política que en ocasiones anteriores le había permitido hacer frente a las situaciones más difíciles. El día después de la procesión del Corpus Christi, el gobierno acusó a los católicos de haber quemado una bandera nacional y deportó a dos clérigos, a los que acusó de agitación antigubernamental. A la protesta civil le siguió el 16 de junio un intento de golpe de estado. Un sector de la marina de guerra y la fuerza aérea se alzó en rebeldía bombardeando y ametrallando los alrededores del palacio presidencial, causando numerosos muertos y heridos. Esa noche, sofocado el levantamiento, las principales iglesias del centro de la ciudad fueron saqueadas e incendiadas por peronistas.

El estupor causado por estos actos de violencia, sin precedentes en la historia reciente, ensombreció la victoria de Perón. Además, la intervención de la CGT, que proporcionó armas a los obreros, creó una justificada alarma entre los jefes militares que seguían siendo leales al régimen. Unos días después de estos sombríos sucesos, Perón, siguiendo los consejos del alto mando, anunció una política de conciliación. Se levantó el estado de sitio, las figuras más irritantes del gabinete —en particular los ministros de Educación y del Interior, a los que se asociaba abiertamente con la campaña anticlerical— fueron substituidos y se invitó a los líderes de la oposición a discutir una tregua política. Perón declaró a sus seguidores que «la revolución pero-

nista ha terminado» y prometió que a partir de aquel momento sería «el presidente de todos los argentinos».

La llamada a la pacificación, cuyo objetivo era aislar al movimiento de resistencia, no tuvo el eco esperado. De hecho, exacerbó la oposición civil y militar. Los líderes políticos, a los que se dio acceso a la radio por primera vez en doce años, aprovecharon la concesión del gobierno para dejar claro que no estaban dispuestos a transigir. Arturo Frondizi, que hablaba en nombre del Partido Radical, prometió llevar a cabo, en paz y libertad, la revolución económica y social a la que renunciaba el peronismo y, con la confianza propia de un vencedor, prometió un indulto generoso para los colaboradores del régimen.

El fracaso de la tregua hizo que Perón cambiase de táctica. El 31 de agosto, en una carta al Partido Peronista y la CGT, reveló su decisión de dejar el gobierno con el fin de garantizar la paz. Como era de prever, los sindicatos organizaron una gran manifestación de apoyo. La Plaza de Mayo fue testigo de una nueva versión del 17 de octubre de 1945. Siguiendo un texto preparado, Perón dijo a la multitud que retiraba su dimisión y seguidamente pronunció el discurso más violento de su carrera política. Empezó diciendo que había ofrecido la paz a sus adversarios pero que éstos no la querían y terminó autorizando a sus seguidores a tomarse la justicia por su mano:

Con nuestra tolerancia exagerada, nos hemos ganado el derecho a reprimirlos violentamente. Y a partir de ahora establecemos una regla permanente para nuestro movimiento: Quienquiera que en cualquier lugar trate de alterar el orden contra las autoridades constituidas, o contra la ley y la constitución, puede ser muerto por cualquier argentino... La consigna para todo peronista, ya sea solo o dentro de una organización, es responder a un acto violento con otro acto violento. Y cuandoquiera que caiga uno de nosotros, caerán cinco de ellos.⁴

Esta inesperada declaración de guerra venció la resistencia de muchos militares indecisos. Una iniciativa encabezada por la CGT también contribuyó a precipitar el desenlace. Poco después de la arenga de Perón, la CGT hizo saber a los militares que ponía los obreros a disposición del ejército para custodiar conjuntamente los destinos del régimen. Los jefes militares, inquietos desde hacía tiempo por la perspectiva de la creación de milicias obreras, se apresuraron a rechazar el ofrecimiento. El 16 de septiembre estalló finalmente la decisiva revuelta militar. Tropas rebeldes bajo el mando del general Eduardo Lonardi ocuparon las guarniciones de Córdoba y la rebelión se extendió por el resto del país con mayor o menor fortuna. Las fuerzas leales al gobierno eran superiores en número, pero, en la emergencia, carecieron de la voluntad de luchar. Durante cinco días el resultado del conflicto estuvo en el aire, hasta que los comandantes leales recibieron un mensaje de Perón que decía que estaba dispuesto a facilitar una solución pero se abstenía de dimitir. La confusión se aclaró al día siguiente cuando Perón se refugió en la embajada de Paraguay. El 23 de septiembre, mientras la CGT reclamaba a los obreros que conservaran la tranquilidad, una multitud se congregó en la Plaza de Mayo, esta vez para celebrar el juramento del general Lonardi como presidente provisional de la República Argentina.

4. *La Nación*, 1 de septiembre de 1955; citado en Potash, *op. cit.*, p. 268.

LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA, 1955-1957

Los integrantes de la coalición política y económica que respaldó el movimiento armado en 1955 tenían un objetivo en común: dismantelar el sistema de controles autoritarios creado por Perón. Pero a la hora de definir el perfil del nuevo orden social y económico que habría de emerger de la urgente tarea de reconstrucción sus coincidencias se revelaron más bien escasas.

Los portavoces de la vieja elite, vinculada al campo y a la economía de exportación, aprovecharon los debates que siguieron a la caída de Perón para transmitir un mensaje brutal y sencillo: el origen de los problemas del país estaba en el equivocado intento del peronismo por subvertir la economía «natural» de Argentina. En consecuencia, propusieron hacer tabla rasa con la estrategia que había llevado a la creación de una infraestructura industrial excesivamente protegida, que imponía una pesada carga a los productores rurales y fomentaba una incorporación prematura y excesiva de los trabajadores en el mercado de consumo. En su lugar, abogaron por un retorno a la estrategia económica basada en el librecambio y sus ventajas relativas, bajo cuyas líneas maestras Argentina había experimentado un formidable crecimiento hasta 1929. En el corto plazo, el objetivo prioritario fue ajustar la economía a los efectos de compensar el creciente déficit de la balanza de pagos, apelando a fuertes devaluaciones para reducir las importaciones y promover las exportaciones agrícolas, a severas restricciones monetarias y crediticias y a una reducción de los salarios de modo tal que el consumo interno estuviera en consonancia con las limitaciones financieras del país. En el largo plazo, el objetivo era recrear la estructura económica y el equilibrio político y social de antes de la segunda guerra mundial.

Después de una década de crecimiento industrial y redistribución de ingresos, de movilidad social y ampliación de la participación política, ésta era una empresa difícilmente factible. Es verdad que la experiencia peronista no había logrado alterar las bases sobre las cuales la clase política conservadora de los años treinta levantó la arquitectura económica del país: una industrialización liviana y complementaria para un país agroexportador. Sin embargo, al convertir lo que fuera una política de emergencia ante la crisis de 1929 en un programa más permanente, reorientando los recursos nacionales a la sustitución extensiva de las manufacturas importadas, el peronismo había contribuido a profundizar la diferenciación interna de la estructura económica y social existente. Junto a los sectores terratenientes, los grandes capitalistas extranjeros y agrarios y la vieja clase media comercial y burocrática, se fue consolidando un vasto mundo industrial, débil por su poder económico, dependiente por su conformación productiva, pero dotado de una gravitación social considerable debido a su incidencia en el empleo y las transacciones de la economía urbana.

Cuando en 1955 los portavoces de la vieja elite procuraron poner en marcha su estrategia encontraron frente a sí la resistencia no siempre coordinada pero siempre perturbadora de ese complejo urbano-industrial crecido a sus expensas. Si al principio de los años cincuenta era ya evidente que la industria liviana orientada al mercado interno estaba perdiendo su ímpetu expansivo, en 1955 fue igualmente claro que una regresión a la Argentina de antes de la guerra era insostenible desde el punto de vista político. Las transformaciones en la sociedad y la economía durante el peronismo no habían eliminado el viejo orden jerárquico; más bien superpusieron sobre él un nuevo orden industrial y participativo. Así, los terratenientes, los hombres de negocios, la clase media, la clase obrera — todos estos sectores — dieron lugar a un

compacto nudo de intereses, que se atrincheró detrás de sus propias y diferenciadas instituciones. Si bien ninguno de estos sectores pudo por sí solo conducir el proceso de cambio, cada uno de ellos fue, no obstante, lo suficientemente poderoso como para impedir que los demás lo hicieran. Después de 1955 las opciones políticas del país habrían de decidirse en el contexto de este pluralismo negativo.

El derrocamiento de Perón, lejos de responder a un plan político y militar concertado, fue fruto de los esfuerzos aislados de líderes militares y políticos en muchos terrenos opuestos entre sí. Ello condujo a una premonitory crisis política durante los primeros días de la Revolución Libertadora. La unanimidad con que los revolucionarios celebraron el fin del régimen peronista se evaporó en cuanto fue necesario decidir el rumbo político del período de transición. La etapa posrevolucionaria se vio sacudida así por una sorda lucha dentro del estamento militar. La actitud a adoptar ante el movimiento peronista constituyó la cuestión más difícil.

Un sector, de filiación nacionalista, era partidario de una política de conciliación. Con el lema de «Ni vencedores ni vencidos», formulado por el presidente Lonardi al asumir el gobierno, tenían la esperanza de recoger el legado político del régimen depuesto, negociando con los líderes del sindicalismo peronista. A esta política se opuso desde un principio otro sector que, en nombre de la democracia, se declaró categóricamente contrario a todo trato con los enemigos de la democracia, previsiblemente identificados en los seguidores de Perón. No obstante sus propuestas diferentes, las dos facciones militares tenían una creencia en común, el convencimiento de que el peronismo no sobreviviría como fuerza política después de la caída del régimen que lo había creado. Para los nacionalistas esto significaba encauzar el movimiento y eliminar sus excesos bajo un nuevo liderazgo. Con este propósito, el presidente Lonardi nombró a un abogado sindical peronista al frente del Ministerio de Trabajo. Los destinatarios de estos gestos de conciliación respondieron favorablemente y de esta manera consiguieron poner a salvo sus organizaciones; luego de exhortar a los trabajadores a evitar conflictos acordaron renovar las conducciones de los sindicatos por medio de elecciones supervisadas por el Ministerio de Trabajo.

El proyecto político de los nacionalistas no logró, empero, levantar el vuelo. Todo en él despertaba la desconfianza del núcleo mayoritario de la coalición política y militar de la Revolución Libertadora. Varios de los militares nacionalistas habían sido leales al régimen derrocado hasta el último momento; sus consejeros políticos eran destacados intelectuales católicos de tendencias antiliberales. Algunos de ellos intentaron, a su vez, utilizar en beneficio propio las fuerzas que habían apoyado a Perón suscitando comprensiblemente sospechas muy verosímiles de una vuelta a la situación política que acababa de concluir. Aún no habían transcurrido dos meses desde el levantamiento armado cuando la presión concertada de militares y políticos provocó, el 13 de noviembre, la dimisión del presidente Lonardi y de sus colaboradores nacionalistas. A partir de ahí la revolución habría de seguir su camino bajo el liderazgo del nuevo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, en busca de la «regeneración democrática» del país.

Esta empresa descansaba en la convicción muy difundida según la cual Argentina había transcurrido los últimos diez años bajo una pesadilla totalitaria. Por tanto, la misión del gobierno era convencer a las masas, engañadas por la demagogia de Perón, de la necesidad de abandonar sus viejas lealtades y unirse, en forma individual, a la familia de los partidos democráticos. En la emergencia, la Revolución Libertadora recurrió a la represión y la proscripción para llevar a cabo su tarea de ree-

ducación política. Después de un intento fallido de huelga general, la CGT y los sindicatos quedaron intervenidos por el gobierno, el Partido Peronista fue disuelto oficialmente y se impuso un decreto que prohibía la utilización de símbolos peronistas e incluso mencionar el nombre de quien había sido y seguía siendo desde el exilio su líder indiscutido.

La firme actitud adoptada frente a los peronistas no tuvo su correspondencia en el momento de actuar ante los problemas económicos heredados del régimen anterior. Durante la última parte de su gestión Perón ya había reconocido la necesidad imperiosa de cambiar el rumbo económico. Las correcciones que introdujo en la política agraria y en el terreno de las inversiones extranjeras señalaron una nueva dirección que sus compromisos políticos le impidieron proseguir. La Revolución Libertadora no tuvo mejor suerte; tropezó con los obstáculos puestos por los conflictos internos del frente antiperonista y también ella dejó las grandes decisiones en manos de las futuras autoridades constitucionales. Una de las primeras iniciativas del presidente Lonardi fue solicitar al doctor Raúl Prebisch —el reputado economista argentino director de la Cepal— que estudiase la situación económica en que se hallaba el país y recomendará una política. El informe de Prebisch soslayó una definición neta al dilema de la nación agraria frente a la nación industrial, disyuntiva que algunos sectores nostálgicos pretendían plantear de nuevo, y abogó por continuar el proceso de industrialización. No obstante y con el fin de resolver el problema del déficit de la balanza de pagos, aconsejó una política de precios favorable a las exportaciones agrícolas.

Las medidas menos controvertidas del programa se adoptaron sin demora. Se devaluó el peso, se privatizaron los depósitos bancarios, el país ingresó en organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y se eliminaron los controles sobre el comercio exterior al tiempo que se disolvía el IAPI. La política relativa al capital extranjero había sido uno de los asuntos más controvertidos en los años de Perón y volvería a serlo nuevamente. La oposición política, habiendo criticado a Perón por la actitud más liberal de su última época, no estaba dispuesta ahora a abandonar sus convicciones nacionalistas e influyó sobre el gobierno militar para que cancelase sus negociaciones en curso con la California Petroleum Company. A resultas de ello cayó la afluencia de inversiones extranjeras.

Las medidas destinadas a estimular la economía agropecuaria fueron en parte neutralizadas por el descenso de los precios internacionales de las exportaciones argentinas. No obstante el mayor volumen de las exportaciones, su valor en dólares aumentó sólo en un 7 por ciento entre 1955 y 1958. Además, la supresión de los controles a la importación provocó una explosión de la demanda de divisas extranjeras, durante mucho tiempo reprimida. Esta presión se observó de forma especial en la demanda de automóviles importados, cuyo volumen se dobló entre 1955 y 1957.

La decisión del régimen militar de convocar elecciones para elegir un nuevo gobierno civil le aconsejó renunciar a cambios bruscos en el equilibrio social, que hubiesen afectado negativamente el proyecto de regeneración democrática de las masas peronistas. Esta preocupación por evitar un fuerte deterioro de los niveles de ingresos limitó el viraje de la economía a favor del sector rural y pospuso el ataque contra los desequilibrios de la estructura productiva. En este marco, los salarios de los trabajadores registraron un aumento y los empresarios respondieron con un alza de los precios. Después de un descenso en los últimos años del régimen de Perón, la

inflación volvió a acelerarse y en 1957 el coste de vida subió en un 25 por ciento. En ese año se hizo un intento de estabilización que tuvo un éxito moderado pero la mayor parte del tiempo los responsables de la economía estuvieron a la defensiva, manejando como mejor podían la situación. En fin, la contradicción entre sus objetivos económicos y políticos, la diversidad de intereses de los miembros del gabinete, entre los que había representantes del mundo de los negocios así como miembros del Partido Radical, imprimieron a la Revolución Libertadora un rumbo económico vacilante y dejó pendientes de solución los problemas que había heredado.

A diferencia de lo que harían futuros gobiernos militares, la presidencia del general Aramburu no reprimió la actividad sindical ni interrumpió la negociación colectiva. Su plan laboral puso, más bien, el acento en la eliminación de la influencia peronista en el movimiento obrero. En abril de 1956, fue dado a conocer un decreto inhabilitando para el desempeño de cargos gremiales a todos los dirigentes que hubiesen ocupado esas posiciones entre 1952 y 1955. Por medio de la proscripción y también la cárcel las autoridades procuraron purgar a los sindicatos como paso previo a devolverlos a los trabajadores, junto con el ejercicio de sus derechos. Contradiciendo las expectativas oficiales, las elecciones sindicales celebradas a finales de 1956 y principios de 1957 marcaron el comienzo del retorno del peronismo.

La decisión de participar en esas elecciones fue la ocasión para el estallido de un primer conflicto entre Perón y la nueva generación de dirigentes sindicales peronistas. Desde su exilio, Perón ordenó la abstención y el reconocimiento como autoridades legales las anteriores a 1955, reunidas en una central obrera clandestina. Desoyendo esas instrucciones, la camada de dirigentes surgida después de 1955 eligió participar y logró el control de importantes sindicatos industriales, levantando por toda plataforma electoral su identidad peronista. Durante 1957 acciones más concertadas siguieron a las huelgas sectoriales típicas de 1956 y en los meses de junio y julio dos huelgas generales volvieron a reponer la presencia del sindicalismo peronista en el centro del escenario político.

El debut político de estas nuevas direcciones gremiales tuvo lugar en el congreso convocado por el gobierno en agosto de 1957 para normalizar a la CGT. Una alianza de peronistas y comunistas logró la mayoría de los escaños y ello provocó la suspensión de las deliberaciones. Los delegados peronistas en el fallido congreso se agruparon luego en lo que se llamó las «62 Organizaciones» y bajo este nombre se incorporaron como un actor central a la vida política argentina.

Los avances realizados por el sindicalismo peronista eran, aunque firmes, todavía limitados en comparación con el retroceso sobre las posiciones ocupadas en el pasado inmediato. Si hasta 1955 la incorporación política de la clase obrera organizada había sido continua, ahora entre ella y las instituciones se había abierto un abismo. En estas condiciones, la única opción que parecía viable era replegarse sobre su identidad, sobre la defensa de sus símbolos y creencias y radicalizar sus luchas. Perón compartió en un principio esa actitud, desde el exilio en Paraguay, Panamá y Venezuela. Había, empero, otro camino, que comenzó a delinearse al compás de la crisis del principal partido de la coalición antiperonista, el Partido Radical.

El antiguo partido de Yrigoyen no había salido incólume de la traumática experiencia de 1946. Tras la derrota electoral, una de las facciones internas, el ala intransigente, desplazó progresivamente a los viejos líderes moderados, demasiado asociados al sesgo conservador que tomó la Unión Democrática. En 1954 lograron elegir presidente del Comité Nacional a uno de los suyos, Arturo Frondizi, quien ese

mismo año dio a conocer en su libro *Petróleo y política* un mensaje de fuerte tono nacionalista y antiimperialista. Mientras que la facción moderada rechazaba abiertamente el régimen peronista, los intransigentes trataron de situarse a su izquierda, cuestionando ya no sus objetivos, sino su debilidad para encararlos, en particular, la política hacia el capital extranjero y las relaciones internacionales.

Derrocado Perón, la suerte de la política de desperonización de la Revolución Libertadora dependía de que el frente democrático se mantuviera unido detrás de la condena de Perón y su legado. En esas condiciones cuando se reabriera el juego electoral a los seguidores de Perón no les habría quedado otra opción que sumarse a los partidos políticos tradicionales. Pero ello no fue lo que, en definitiva, ocurrió. Desde los primeros días del gobierno del presidente Aramburu, el Partido Radical se alineó en el campo de la oposición con el fin de presentarse como el nuevo paladín de los intereses nacionales y populares. Así, Frondizi denunció la política económica del régimen, caracterizándola como un plan orquestado por la oligarquía y el imperialismo y, para ganarse las simpatías de los obreros peronistas, exigió el fin de las persecuciones y la preservación de las estructuras sindicales previas. El objetivo de la estrategia de Frondizi pronto resultó obvio a los ojos de todos: convertirse en el heredero de la Revolución Libertadora y ser la alternativa políticamente viable para las masas peronistas proscritas. Para ocupar ese lugar primero debía encontrar apoyos dentro del Partido Radical, en el que sus actitudes despertaban las justificadas suspicacias de los sectores moderados. Al cabo de varios meses dominados por los conflictos internos, en noviembre de 1956 se reunieron los congresistas del partido a fin de escoger candidatos a las próximas elecciones presidenciales. Disconformes con el trámite de la asamblea los sectores moderados y una facción de los intransigentes decidieron abandonarla, pero Frondizi se las arregló para conservar el quórum necesario y ser propuesto candidato a la primera magistratura. Poco después la división adquirió carácter oficial: en enero de 1957 los sectores disidentes se unieron bajo el nombre de Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), mientras el sector victorioso en la convención del partido se encuadró detrás de la sigla Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

La crisis radical tuvo repercusiones en las filas del gobierno, donde las maniobras políticas de Frondizi eran seguidas con preocupación. En un gesto francamente favorable a la UCRP, cuyo líder más importante era Ricardo Balbín, el presidente Aramburu le ofreció tres puestos en el gabinete, entre ellos la cartera clave del Ministerio del Interior. Con esta decisión dejó claro dónde estaba para él el mayor peligro que se cernía sobre el futuro de la Revolución Libertadora, pero, a la vez, fue una la confesión implícita de que no podía afrontarlo con sus propias fuerzas. Quienes mejor expresaban los intereses y aspiraciones del gobierno militar, los sectores políticos conservadores, no contaban mucho desde el punto de vista electoral. Este fenómeno, que sería una de las constantes de la vida política argentina a partir de 1955, indujo a los militares a apoyar al partido de Balbín, con cuya retórica yrigoyenista tenían poco en común. Así pues, el conflicto entre el peronismo y el antiperonismo se libraría detrás de los hombres y las tradiciones del, ahora fragmentado, Partido Radical.

La primera de las confrontaciones para las cuales se estaban preparando los argentinos tuvo lugar en julio de 1957. En esa fecha, el gobierno militar convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente con el fin de dar carácter oficial a la revocación de la reforma constitucional promulgada por Perón en 1949; el otro objetivo complementario era medir la importancia electoral de las diversas fuerzas políti-

cas antes de llamar a las elecciones presidenciales. Durante la campaña electoral Frondizi hizo lo imposible tanto por atraer al electorado peronista como para neutralizar la campaña en favor del voto en blanco organizada por los partidarios de Perón. Los resultados electorales de 1957 indicaron que el número de votos en blanco era mayor que los recibidos por cualquiera de los demás partidos. Sin embargo, los 2.100.000 votos en blanco eran menos de la mitad del número de sufragios conseguidos por los peronistas tres años antes. Con una pequeña diferencia, la UCRP se situó en segundo lugar mientras el partido de Frondizi recibía 1.800.000 votos; los votos que obtuvieron los partidos Conservador y Socialista apenas pasaban del medio millón. A pesar de haber logrado un considerable apoyo electoral, la UCRI debió admitir el fracaso de su política de cooptación del electorado peronista.

Cuando la Asamblea Constituyente inició sus deliberaciones, los representantes de la UCRI cumplieron su promesa de boicotearla. Muy pronto les siguieron los representantes de otros partidos minoritarios; incluso una facción de la UCRP decidió retirarse. Desde un comienzo las recriminaciones mutuas entre los radicales y los conservadores dominaron las sesiones de la asamblea. En este ambiente, escasamente cooperativo, las reformas a la Constitución de 1853, otra vez en vigencia, fueron pocas y limitadas. La Asamblea Constituyente pronto perdió su importancia y los partidos se entregaron de lleno a hacer campaña para las próximas elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el gobierno militar había ido perdiendo el control de la situación económica. Uno tras otro, sus ministros de Economía —cuatro en el plazo de tres años— se revelaron incapaces de detener el alza de los precios o atraer inversiones extranjeras. Una absorbente obsesión ganó entonces a los líderes del gobierno: entregar cuanto antes el poder a las futuras autoridades constitucionales. Ello no implicó que renunciaran a influir sobre quienes habrían de sucederlos. El apoyo oficial se volcó sin disimulos a favor de la candidatura de Balbín, quien fue convocado a defender las banderas del antiperonismo, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como político progresista.

El futuro político de Frondizi, en cambio, no podía ser más incierto. El electorado peronista no se había mostrado receptivo a sus tentativas de acercamiento, a la vez que los sectores antiperonistas parecían tomarlas demasiado en serio. En un esfuerzo por romper su aislamiento, Frondizi se movió pragmáticamente en varias direcciones. Las elecciones para la Asamblea Constituyente habían puesto claramente de manifiesto la vitalidad que conservaba el movimiento proscrito; de este modo, si las masas peronistas no se mostraban dispuestas a escuchar, entonces era necesario negociar en forma directa con Perón. Envueltos en gran secreto, emisarios de Frondizi viajaron a Caracas, donde el líder exiliado vivía bajo la protección del dictador Marcos Pérez Jiménez, y le prometieron poner fin a las proscripciones políticas y restaurar las leyes sindicales vigentes durante su pasada gestión, a cambio de que apoyase al candidato de la UCRI.

Mientras se producían estas negociaciones, Frondizi entró de lleno en el debate público sosteniendo la tesis de que el dilema argentino no pasaba por escoger entre peronismo y antiperonismo, como afirmaban los líderes de la Revolución Libertadora; la verdadera disyuntiva nacional estaba entre industrialización y subdesarrollo. Levantando esta consigna, llamó a la formación de un frente nacional y popular integrado por los sectores obreros, la burguesía nacional, el ejército y la Iglesia. La ideología de esta nueva alianza de clases, convocada en nombre del desarrollo económi-

co y la integración política, fue la obra de un grupo de intelectuales disidentes de izquierda, liderado por Rogelio Frigerio, que soslayó al candidato de la UCRI y relegó a un segundo plano a los militantes del partido.

Esta convergencia entre intelectuales y dirigentes políticos constituía toda una novedad en la vida política reciente y fue acentuada por la propia personalidad de Frondizi. Más un maestro que un político, el jefe de la UCRI adoptó un lenguaje árido y tecnocrático, sin hacer concesión alguna a la tradicional retórica política que dominaba Balbín, su rival en la carrera hacia la presidencia. Esa imagen de racionalidad, el intento mismo de modificar los términos del conflicto político que dividía al país, tuvo un efecto positivo en las clases medias modernas y cautivó a la nueva generación que había alcanzado la mayoría de edad después de 1955. A estas fuerzas, Frondizi procuró sumar apoyos más decisivos. En un intento de ganar cierta influencia en el ejército, hizo contactos con el sector nacionalista militar desplazado en noviembre de 1955 con la renuncia del general Lonardi; al mismo tiempo se esforzó por apaciguar a la opinión pública conservadora declarándose partidario de la postura de la Iglesia a favor de la libertad de enseñanza y contra el divorcio. La clave fundamental de esta compleja operación política estaba, sin embargo, en manos de Perón, quien a dos años y medio de su derrocamiento continuaba siendo el árbitro del equilibrio político argentino.

Finalmente, desde la República Dominicana, donde el general Trujillo le brindó hospitalidad al caer la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, Perón abandonó su postura abstencionista y se declaró francamente en favor del voto afirmativo por la candidatura de Frondizi. El 23 de febrero de 1958 las masas peronistas acudieron a las urnas siguiendo las instrucciones del caudillo exiliado. Y doce años después de 1946 volvieron a decidir el resultado de los comicios, premiando ahora el virtuosismo político de Frondizi con 4.100.000 votos frente a los 2.550.000 que obtuvo Balbín. En el cómputo electoral se registraron también unos 800.000 votos en blanco, certificando la existencia de un sentimiento de alienación y resistencia política que ni siquiera las órdenes de Perón habían logrado alterar.

LA PRESIDENCIA DE ARTURO FRONDIZI, 1958-1962

Aunque la victoria de Frondizi había sido arrolladora, su significado distaba mucho de ser claro. El júbilo con que los partidarios de Perón celebraron los resultados de los comicios aclaró buena parte de los interrogantes al identificar al verdadero artífice de la victoria. Ello no hizo más que crear un extendido malestar en los círculos militares. Sectores del ejército y de la marina insinuaron la posibilidad de no reconocer las credenciales del candidato elegido con los votos peronistas. Pero el presidente Aramburu se apresuró a felicitar a Frondizi el mismo día de su triunfo y, con su gesto, bloqueó esa alternativa y articuló los apoyos necesarios para hacer honor a la palabra de los revolucionarios de 1955 de encaminar al país hacia la democracia.

Las elecciones de 1958 pusieron fin al optimismo con que las fuerzas armadas habían emprendido la tarea de dismantelar las estructuras del régimen peronista. Frente a una realidad política que se resistía al cambio, optaron por respetarla oficialmente y se replegaron a sus cuarteles para desde allí influir sobre la futura Administración. En estas condiciones, la que habría de emerger sería una democracia tutelada.

Con la resistencia apenas disimulada de los militares y la franca oposición de la UCRP, que había visto desvanecerse una victoria segura, el presidente electo se dispuso a cumplir las numerosas promesas hechas durante la campaña electoral. Si en sus cálculos había contemplado la posibilidad de institucionalizar la coalición victoriosa en un movimiento político que trascendiera sus antiguas diferencias, esa fue una fantasía de corta duración. La naturaleza contradictoria de las aspiraciones de quienes lo habían votado era muy poco apropiada para semejante proyecto. No obstante, lo que lo hizo, en definitiva, imposible fue la desconfianza que rodeaba a la persona de Frondizi, compartida incluso por los aliados que reclutara en su trayectoria al poder. Frondizi justificó con creces esa desconfianza cuando, al asumir la presidencia el 1 de Mayo, reveló a amigos y adversarios las principales líneas de su plan político.

Las medidas iniciales del nuevo presidente estuvieron dirigidas a saldar su deuda con Perón: la revocación del decreto que prohibía las actividades peronistas; la promulgación de una ley de amnistía; la anulación de un decreto, promulgado en los últimos tramos del gobierno militar, que había entregado la CGT a un grupo de sindicalistas no peronistas; la devolución de varios sindicatos importantes intervenidos por el gobierno a dirigentes peronistas; el restablecimiento del sistema de monopolio sindical vigente hasta 1955; y un aumento general de salarios. La revisión de la política antiperonista de la Revolución Libertadora se detuvo antes de llegar a un capítulo crucial: el decreto que disolviera el Partido Peronista no fue anulado, por lo que los peronistas, aunque podían volver a actuar y difundir sus ideas, seguían sin poder concurrir a las elecciones con sus propias banderas y sus candidatos.

Esta política de conciliación con el peronismo suscitó las denuncias y acusaciones de grupos antiperonistas civiles y militares, que vieron en ella la confirmación de sus peores temores. En agosto hubo una reacción igualmente hostil en las filas de la coalición vencedora cuando Frondizi decidió autorizar la concesión de títulos académicos por las universidades privadas. La nueva legislación, concebida por el anterior gobierno militar pero abandonada luego para evitar conflictos, figuraba entre las promesas hechas por Frondizi a la Iglesia. La autorización de la enseñanza religiosa en un campo hasta entonces reservado al estado conmovió creencias muy arraigadas en el movimiento estudiantil y reavivó los sentimientos anticlericales en segmentos importantes de las clases medias. Grandes multitudes ocuparon las calles para defender la tradición laica al tiempo que la opinión católica hacía lo mismo demandando la libertad de enseñanza. Finalmente, el Congreso aprobó la controvertida iniciativa y puso fin al conflicto pero no a la hostilidad que desde entonces el gobierno encontraría en las filas del movimiento estudiantil.

La medida que tuvo las mayores repercusiones se conoció el 25 de julio cuando Frondizi anunció el lanzamiento de la «batalla del petróleo». El ex intelectual nacionalista sorprendió a la opinión pública al comunicar haber firmado varios contratos con compañías extranjeras para la extracción y la explotación de petróleo con estos argumentos:

El principal obstáculo al avance del país es su extrema dependencia de la importación de combustibles y acero. Esta dependencia debilita nuestra capacidad de autodefinición y pone en peligro nuestra soberanía, especialmente en el caso de una crisis armada a escala mundial. De hecho, Argentina importa alrededor del 65 por ciento del combustible que consume. De los 14 millones de metros cúbicos consumidos en

1957, aproximadamente 10 millones procedían del extranjero. Argentina se ha visto obligada a convertirse sencillamente en exportadora de materias primas, que se intercambian por petróleo y carbón. El país trabaja para pagar el petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros propios pies. Argentina no puede continuar en este camino, que se ha convertido en una peligrosa pendiente hacia la dominación.⁵

Con este iniciativa Frondizi retomó el camino que el régimen peronista había intentado explorar, con escasa convicción, en sus últimos días. Ahora, al igual que entonces, el objetivo consistía en deducir la demanda de petróleo, bienes de capital y bienes intermedios que tanto pesaban en el déficit de la balanza de pagos. La «batalla del petróleo» habría de ser el comienzo de un nuevo intento por avanzar en la sustitución de importaciones a los efectos de potenciar la industria básica y construir una estructura industrial más integrada. El proyecto auspiciado por el principal consejero de Frondizi, Rogelio Frigerio, comportaba una marcha forzada hacia la industrialización, por cualquier medio y a cualquier coste. A pesar del crecimiento registrado en la industria liviana desde mediados de los años treinta, Argentina continuaba siendo un país productor de alimentos e importador de combustible, maquinaria e insumos para las manufacturas locales. Según Frigerio, la causa del subdesarrollo y la dependencia de Argentina estaba en la posición que ocupaba el país dentro de la división internacional del trabajo. En consecuencia, el estímulo a la industrialización, en particular a la producción de acero, complejos petroquímicos y refinerías de petróleo, modificaría el patrón de desarrollo basado en la exportación de materias primas y, por ende, habría de ser el factor clave para el logro de la liberación nacional.

El viejo sueño de la autarquía económica alentado por los militares durante la segunda guerra mundial reaparecía formulado en un nuevo lenguaje. El proceso de acumulación de capital había tropezado entonces con las urgencias políticas del régimen peronista, que optó por una política de industrialización más limitada y compatible con la redistribución de la renta. Colocado ante la misma ecuación, Frondizi decidió financiar el esfuerzo industrializador acudiendo a los capitales extranjeros. Esta propuesta le permitió sacar partido de un fenómeno novedoso en América Latina: el aumento en el flujo de las inversiones de las compañías multinacionales en las industrias locales. Al igual que otros en la región, el gobierno argentino ofreció a los inversores un mercado cerrado por altas barreras proteccionistas, con óptimas posibilidades de expansión, garantizadas por una demanda preexistente y un control oligopólico de sus condiciones de operación.

Para justificar este proyecto heterodoxo sin abandonar su adhesión al nacionalismo, Frondizi sostuvo que el origen del capital no era importante en la medida que éste se invirtiera, con la apropiada dirección del gobierno, en áreas de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Los prejuicios contrarios al capital extranjero —argumentó— sólo servían para consolidar la estructura de subdesarrollo al dejar el petróleo bajo tierra y postergar la integración del aparato industrial.

Mientras maduraban los frutos de la nueva estrategia, y consciente de la fragilidad política del poder que había recibido, otorgó un aumento general de salarios apenas unos días después de tomar posesión del cargo. A esta medida le siguió una mayor flexibilidad de la política monetaria y fiscal, todo lo cual agravó la situación económica y preparó las condiciones para una grave crisis inflacionaria y de balan-

5. Arturo Frondizi, *Mensajes presidenciales*, Buenos Aires, 1978, p. 133.

za de pagos. Las señales premonitorias de una crisis inminente no parecieron alarmar al presidente ni a sus consejeros económicos, ocupados como estaban en ganarse la buena voluntad de los peronistas para su estrategia económica.

Hablar de peronismo era entonces hablar de los dirigentes sindicales. Con Perón en el exilio y con la ausencia de un partido legalizado, las organizaciones sindicales se transformaron en los portavoces naturales de las masas peronistas. Este desplazamiento de la representación del movimiento político hacia los dirigentes sindicales habría de tener importantes consecuencias en la vida institucional del país. A corto plazo, le permitió al gobierno negociar por ejemplo una nueva ley de Asociaciones Profesionales en sintonía con sus intereses a cambio de la neutralidad sindical ante el abandono de aspectos del programa del 23 de febrero que eran, en todo caso, los mismos que el propio régimen peronista había intentado archivar en sus últimos días. El acercamiento del sindicalismo peronista y el gobierno duró muy poco sin embargo.

A pesar de los esfuerzos hechos desde ambas partes por evitarla, a fines de 1958 estalló la crisis. En el mes de septiembre se prorrogaron por un año más los contratos laborales, lo que entrañaba una virtual congelación de salarios, al tiempo que trascendió que estaba en estudio la regulación del derecho a la huelga. Esto era más de lo que las 62 Organizaciones estaban dispuestas a tolerar sin decir nada; y a mediados de octubre decidieron contra su reciente aliado una primera huelga general. En su manejo de la cuestión sindical el gobierno se movió en medio de presiones contrapuestas. Cada medida destinada a apaciguar a los sindicatos peronistas provocaba la alarma de sus adversarios civiles y militares. Frente a este dilema, Frondizi creyó encontrar una salida complementando la búsqueda de una tregua laboral con gestos ejemplares revestidos de firmeza política. La huelga de trabajadores del petróleo en Mendoza fue un primer ensayo de esta compleja estrategia. Argumentando que el conflicto formaba parte de un complot insurreccional, Frondizi impuso la ley marcial durante treinta días y metió en prisión a numerosos militantes obreros. La réplica de las 62 Organizaciones fue la convocatoria a una nueva huelga general de cuarenta y ocho horas. Por un momento pareció que el enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos era inevitable. No obstante, la ruptura no se produjo y a ello contribuyó la voluntad de acuerdo de las 62 Organizaciones, reacias a desestabilizar un orden constitucional en el que esperaban consolidar sus posiciones corporativas.

La audacia de Frondizi no quedó limitada al abandono de las causas ideológicas con las que se había identificado durante tanto tiempo. Trató asimismo de modificar la relación de fuerzas dentro del estamento militar para disminuir la influencia de los sectores que le eran hostiles. Para ese atrevido intento buscó el respaldo de los oficiales nacionalistas y de quienes habían sido excluidos del servicio activo en las recientes purgas internas. A principios de septiembre el presidente y su secretario de la fuerza aérea intentaron reincorporar a un oficial que Aramburu había dado de baja en 1957. La resistencia ofrecida por el grueso de los jefes y oficiales provocó un estado de rebelión en la fuerza aérea que no desapareció hasta que el presidente retiró su controvertida decisión y reemplazó a su secretario. Al precio de un grave debilitamiento de su autoridad, Frondizi debió reconocer que la estabilidad de su gobierno dependía del mantenimiento de la distribución del poder heredada dentro de la corporación militar.

Por su parte, los jefes militares argentinos reaccionaron redoblando su vigilancia sobre las actividades del gobierno. Vocero de sus inquietudes fue el ex presidente ge-

neral Aramburu, quien, al tiempo que reiteraba el respaldo al orden constitucional, le reclamó a Frondizi la destitución de su eminencia gris, Rogelio Frigerio. En su cargo de Secretario de Relaciones Socioeconómicas, Frigerio despertaba una profunda desconfianza en los círculos militares debido a sus orígenes izquierdistas, a su ascenso político al margen de las estructuras de partido y el papel que desempeñaba en las negociaciones con los peronistas. Inicialmente el presidente pareció acceder a esa demanda y el 10 de noviembre relevó a Frigerio de sus funciones oficiales; sin embargo, exhibiendo esa duplicidad que tanto enfurecía a sus enemigos, poco más tarde lo reincorporó por la puerta de atrás como miembro de su círculo íntimo.

En estas circunstancias, comenzaron a circular rumores insistentes de golpe de estado. La presunta existencia de un pacto secreto entre Frondizi y Perón en 1958, denunciada por los partidos opositores y negada con escaso éxito por el gobierno, agregó una nueva y más profunda duda sobre la estabilidad del gobierno. La incertidumbre reinante acerca de las verdaderas intenciones de Frondizi convirtió la hipótesis de un levantamiento armado en una alternativa plausible. El clima de conspiración que conociera el país en vísperas de la caída de Perón volvió a apoderarse de la vida política. Y, como entonces pudo escucharse a través de la palabra de Balbín, la encendida defensa de la revolución como un derecho natural de toda sociedad ante el peligro de una amenaza totalitaria. La campaña de la oposición civil contra Frondizi tropezó, sin embargo, con los escrúpulos de los militares, todavía indecisos acerca de si debían o no clausurar el incipiente experimento constitucional. A la vista de este estado de cosas, los líderes de las 62 Organizaciones decidieron suspender la huelga general de noviembre. Aunque de Frondizi sólo habían recibido promesas, optaron por frenar la movilización de los trabajadores a fin de no dar a los militares nuevas excusas para tomar el poder. La continuidad de la tregua entre el gobierno y los sindicatos requería, empero, que ambos pudiesen controlar sus propias decisiones. Pronto resultó evidente que ni uno ni otros estaban en condiciones de hacerlo.

El 29 de diciembre fue anunciado el plan de estabilización acordado con el FMI con el propósito de obtener la asistencia financiera necesaria para aliviar la crisis de la balanza de pagos heredada y agudizada aún más por la propia gestión de Frondizi. Sus medidas principales incluyeron una más rígida política monetaria, estímulos a la exportación y a las nuevas inversiones y la abolición de los sistemas de controles y subvenciones oficiales. Sus consecuencias inmediatas fueron previsible. Los salarios cayeron un 25 por ciento y el PBI descendió en un 6,4 por ciento. Después de la unificación de los tipos de cambio hubo una devaluación del 50 por ciento que provocó un incremento de precios de tales proporciones que hacia finales de 1959 la tasa de inflación duplicaba la del año anterior. En términos reales la devaluación terminó siendo del 17 por ciento y contribuyó a transformar el déficit comercial de 1958 en un modesto superávit en 1959.

Las negociaciones con los sindicatos no tenían cabida en la nueva política económica. Pero el enfrentamiento ocurrió mucho antes de que sus efectos se hicieran sentir plenamente. El incidente que lo precipitó fue la decisión de Frondizi de utilizar la fuerza para desalojar a los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, que habían ocupado las instalaciones en protesta contra su próxima privatización. Al ordenar la intervención del ejército Frondizi clausuró su política de acercamiento al sindicalismo y contrajo una deuda con los militares. De ahí en adelante se ocupó de satisfacer las exigencias de los altos mandos. En los meses siguientes fue revisada la política laboral, el ministro de Trabajo (ex líder obrero y colaborador de Frigerio) di-

mitió, se suspendieron las elecciones sindicales previstas y varios sindicatos importantes de los que poco antes se habían hecho cargo líderes peronistas volvieron a ser intervenidos.

El nuevo rumbo político no se limitó a la política laboral. Adicionalmente, Frondizi hizo otros gestos para aplacar a los militares: en abril prohibió las actividades del Partido Comunista, expulsó a varios diplomáticos soviéticos y despidió del gobierno a estrechos colaboradores de Frigerio, quien otra vez presentó la renuncia. Estos gestos no bastaron para ponerlo a salvo de una nueva crisis política cuando Perón, en junio de 1959, y confirmando las sospechas de muchos, distribuyó a la prensa en Santo Domingo, donde estaba radicado, copias de su pacto con Frondizi en vísperas de las elecciones de 1958. Disgustado con su antiguo aliado, Perón ofrecía así un nuevo pretexto a los sectores antiperonistas y antifronquizistas para poner en cuestión la lealtad de los militares a las autoridades constitucionales. Los desmentidos de Frondizi no convencieron a nadie. En el cuarto aniversario del levantamiento antiperonista del 16 de junio de 1955, un grupo de militares retirados se trasladó en avión a Córdoba para ponerse al frente de una rebelión de las tropas locales. La intentona golpista no tuvo repercusión alguna. A pesar de su postura crítica hacia las actitudes y la política de Frondizi, el alto mando militar prefería aún evitar el recurso a medidas extremas.

El desenlace de la crisis de junio de 1959 fue otro e inesperado viraje de Frondizi. Con el fin de mejorar su deteriorada imagen en los círculos de poder, promovió una vasta reorganización del gabinete. El 24 de junio ofreció a Álvaro Alsogaray, un crítico persistente de su gobierno, las carteras de Economía y Trabajo. Ferviente defensor de la empresa privada y la economía de mercado, Alsogaray parecía un candidato imposible para Frondizi, que con esta decisión dio otra prueba más de la falta de escrúpulos políticos que alarmaba a sus partidarios y sorprendía a sus enemigos. Ciertamente, las credenciales de Alsogaray eran las más apropiadas para llevar tranquilidad a la jerarquía militar y poner en práctica el plan de austeridad acordado con el FMI.

Bajo las directivas de este plan, 1959 fue un año de fuerte recesión económica. Argentina nunca había llevado a cabo una tentativa de tal envergadura por llevar a la práctica las recetas monetaristas. A la drástica disminución de la liquidez general de la economía se sumó el incremento rápido del coste de vida provocado por la eliminación de los controles de precios. Los sindicatos no demoraron su respuesta y lanzaron una ola de movilizaciones a gran escala. La ofensiva sindical se estrelló sin embargo contra la sólida defensa que secundó la política económica de Frondizi. El mundo de los grandes negocios y el estamento militar silenciaron sus reservas ante un gobierno de origen tan espurio y a la hora de la confrontación le dieron todo su apoyo. La mayoría de las huelgas fue derrotada, un gran número de militantes sindicales preso, y los principales gremios intervenidos.

Los salarios experimentaron una caída del 30 por ciento —que tardarían diez años en recuperar— devolviendo a las empresas los incentivos postergados durante la década de distribucionismo peronista. El colapso de las huelgas de 1959 y 1960 cerró el ciclo de movilizaciones obreras iniciado en 1956. Los días-hombre perdidos a causa de las huelgas fueron más de 10 millones en 1959, casi 1,5 millones en 1960 y sólo 268.000 en 1961. Bajo los efectos de la represión y la penuria económica comenzó un proceso de desmovilización y desmoralización de los militantes obreros que habían sido el núcleo del renacimiento del sindicalismo peronista.

La sujeción de su política económica al monetarismo ortodoxo recomendado por Alsogaray no libró al presidente de nuevas presiones militares. Desde mediados de 1959 hasta marzo de 1962 Frondizi debió gobernar bajo la atenta supervisión de los altos mandos, que actuaron convencidos de que bastaba con presionar al presidente para obtener de él las políticas que consideraban adecuadas: no era necesario ni deseable apartarle del poder. La figura más sobresaliente en el ejercicio de esta omnipotente tutela fue el general C. Toranzo Montero, designado comandante en jefe del ejército después de la crisis de junio de 1959. En sus nuevas funciones Toranzo Montero incorporó al alto mando hombres de su confianza que, como él, temían por la suerte de los ideales de la Revolución Libertadora. Con esta preocupación no tardó en enfrentarse con el secretario de Guerra de Frondizi, quien, a su vez, le ordenó abandonar su puesto. Por toda respuesta, Toranzo Montero se declaró en rebeldía. Durante los días 3 y 4 de septiembre el país se mantuvo en vilo, esperando la batalla entre los tanques desplegados por ambos bandos por todo el centro de Buenos Aires. El choque fue evitado al acceder Frondizi a las exigencias del general rebelde y sacrificar a su secretario de Guerra. Con gran consternación del partido gobernante, a partir de aquel momento Frondizi tuvo que convivir con un caudillo militar cuya autoridad provenía precisamente de su exitoso desafío a los poderes del presidente.

Las preocupaciones del ejército liderado por Toranzo Montero reflejaban fielmente el nuevo clima político creado por la influencia de la revolución cubana. En un principio la prensa antiperonista interpretó el triunfo de Fidel Castro en 1959 como otra manifestación de la cruzada democrática que había derrocado a Perón. Luego, tras la rápida radicalización del régimen de La Habana y el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, esa actitud positiva dejó paso a una alarma creciente frente al flamante modelo de revolución latinoamericana. Debido a su reciente estancia en Washington como delegado argentino ante la Junta de Defensa Interamericana, Toranzo Montero se encontraba en una ventajosa posición para encarnar las inquietudes de los círculos militares del continente. En sintonía con ellas encaró una reorganización del ejército con vistas a su participación en una futura guerra antirrevolucionaria.

En marzo de 1960 Frondizi capituló ante las demandas de los militares y puso en marcha el Plan Conintes, que asignaba el control de la lucha antiterrorista a las fuerzas armadas, subordinaba las policías provinciales al control de las mismas y autorizaba el juicio de civiles por los tribunales militares. La intrusión del poder militar en áreas reservadas a la jurisdicción civil fue el origen de previsibles conflictos. Así, el comandante militar de la región de Córdoba acusó al gobernador local de complicidad con el terrorismo y exigió su destitución. Frondizi cedió una vez más y obligó a sus seguidores en el Congreso a decretar la intervención de la provincia de Córdoba.

Esta y otras manifestaciones de la progresiva capitulación del gobierno frente a las presiones militares indujeron a Toranzo Montero a dar un paso más y desafiar de manera abierta la autoridad de Frondizi. En octubre de 1960 el alto mando del ejército dio a conocer un memorándum en el que acusaba a las autoridades de tolerar la presencia comunista en las instituciones culturales y educativas, de manipular el resentimiento de las masas peronistas contra las fuerzas armadas y de administrar las empresas estatales de manera corrupta e ineficiente. Como era de esperar, esta sucesión de planteamientos militares hizo cundir un generalizado temor por el precario equilibrio sobre el que descansaba el gobierno. Fue entonces cuando Frondizi buscó y encontró formas de explotar astutamente ese sentimiento colectivo para reforzar su

permanencia en el poder. Con ese objetivo procuró persuadir a la opinión pública de que la alternativa a su gobierno era el inevitable deslizamiento del país hacia la guerra civil. A fin de hacer creíbles sus advertencias, comenzó por levantar las restricciones que pesaban sobre los sindicatos, inició negociaciones para la normalización de la CGT y permitió una mayor libertad a las actividades del movimiento peronista. Frondizi esperaba que la amenaza en ciernes generada por esas medidas volcara en su beneficio a los sectores antiperonistas y le restituyera así a su autoridad la popularidad necesaria para resistir la presión de sus enemigos civiles y militares.

A principios de 1961 el presidente maniobró con éxito en la búsqueda de mayor autonomía cuando consiguió librarse de Toranzo Montero. Después de tres años difíciles en el poder, Frondizi dispuso entonces de un poco más de libertad para escoger los rumbos de su gobierno. Sin dar explicación alguna, destituyó a Alsogaray, quien no obstante haber mostrado un inesperado pragmatismo nunca había sido bien acogido en el gabinete de Frondizi. La decisión constituyó antes que nada una manifestación de autoridad porque el sustituto de Alsogaray, otra figura del mundo financiero local, se abstuvo de hacer grandes cambios en la política económica y mantuvo los acuerdos con el FMI. Al cabo de la aguda depresión de 1959, la tasa de crecimiento de la economía alcanzó un 7 por ciento en 1960 y 1961, impulsada por el flujo de inversiones. Debido a la contención de los salarios y la austera política fiscal, el consumo se mantuvo estable, pero esto fue holgadamente compensado por la movilización de capitales alentada por el nuevo ciclo de sustitución de importaciones. Gracias al incremento de las inversiones en los mercados de automóviles, tractores, productos químicos pesados, acero y petróleo, todos sectores muy protegidos, la expansión de la demanda global hizo posible la reducción del paro generado por la recesión de 1959.

El éxito del programa de reactivación no fue independiente del respaldo de las finanzas internacionales. El financiamiento del boom inversionista provino del ahorro externo, ya fuera por medio de empréstitos a corto o largo plazo o de la inversión directa. El recurso al endeudamiento externo permitió superar las restricciones a la capacidad de importar derivadas del pobre desarrollo de las exportaciones. El flujo de fondos externos facilitó asimismo el otorgamiento de créditos al sector privado sin comprometer los objetivos de la política monetaria acordada con el FMI.

Inicialmente, la recuperación económica vino acompañada de una pronunciada reducción de la inflación. En el momento de la designación de Alsogaray los precios aumentaban a razón de un 127 por ciento anual; en abril de 1961, al dejar Alsogaray su cargo, habían descendido hasta quedar en 9,5 por ciento. Su sucesor aseguró la continuidad de la política económica en curso. No pudo impedir, sin embargo, que los precios subieran en un 21 por ciento en enero de 1962, cuando, en vísperas de las elecciones, Frondizi decidió flexibilizar el programa de austeridad. Las fluctuaciones experimentadas tanto en el terreno económico como en la vida política tenían por telón de fondo un contexto nacional altamente sensible debido a la mayor gravitación de los capitales extranjeros. El mantenimiento de la confianza de los inversores extranjeros requería de un clima de tranquilidad política que Frondizi no estaba en condiciones de garantizar de forma duradera.

La política exterior fue el segundo frente donde el líder de la UCRI trató de sacar partido de su mayor libertad de acción, adoptando una línea independiente en el tratamiento de la cuestión cubana. En agosto de 1960, en un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos celebrado en Costa Rica, Frondizi defi-

nió su postura ante las nuevas circunstancias creadas por la revolución cubana. En aquella ocasión dio expresas instrucciones a la delegación argentina para que, al tiempo que condenaba la amenaza comunista, llamase la atención de los Estados Unidos sobre el estado de subdesarrollo de América Latina. En su visión de los problemas de la región, la pobreza y la subversión iban de la mano, y, por lo tanto, la lucha contra el comunismo debía ser indisociable de la lucha contra el subdesarrollo, como, por otra parte, John F. Kennedy había destacado al lanzar la Alianza para el Progreso. Frondizi utilizó este argumento para solicitar ayuda económica de Estados Unidos y justificar una cierta independencia relativa en el conflicto entre Washington y Fidel Castro. En marzo de 1961 Argentina ofreció sus buenos oficios para facilitar un entendimiento, pero su intervención fue rechazada, mereciendo además la severa condena de los sectores antifrondizistas. Un mes más tarde, Frondizi dio nuevos pretextos a sus críticos al firmar un tratado de amistad con Brasil. La postura francamente neutralista de Jânio Quadros, el presidente brasileño, frente a la rivalidad que Frondizi oponía a norteamericanos y soviéticos y sus simpatías por Cuba sacudieron la relativa calma que reinaba en los cuarteles militares. En estos ambientes la única actitud admisible era la oposición abierta y firme a Fidel Castro, por lo que cada gesto oficial de ambigüedad a ese respecto era recibido con alarma e indignación. Así, después de que Frondizi celebrara una entrevista secreta con Ernesto «Che» Guevara en la residencia presidencial a mediados de agosto, en un nuevo intento de mediación entre Cuba y Estados Unidos, se vio obligado a destituir a su ministro de Relaciones Exteriores y a firmar una declaración conjunta con las fuerzas armadas ratificando la condena del experimento comunista en Cuba.

El segundo y último capítulo del enfrentamiento de los militares y el gobierno a propósito de la cuestión cubana tuvo lugar en la conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en enero de 1962. Patrocinado por Estados Unidos este encuentro se proponía aplicar sanciones contra Cuba y expulsarla del sistema interamericano. Con el mismo propósito y en los días previos a la conferencia, se reunió en Washington la Junta de Defensa Interamericana y en ella el delegado militar argentino votó a favor de la ruptura de relaciones con el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, en la conferencia de la OEA, celebrada en Punta del Este, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, junto con los de Brasil, México, Chile, Bolivia y Ecuador, decidió abstenerse en lugar de aprobar la moción que, con el voto de catorce países, ordenó la expulsión de Cuba de la organización regional. La negativa a secundar a Estados Unidos fue recibida con el rechazo unánime de los militares. Los jefes de las tres armas exigieron al presidente que rompiera de inmediato las relaciones con Cuba y terminara con las ambigüedades de su política exterior. Durante varios días Frondizi y el alto mando deliberaron día y noche mientras crecía el malestar en las guarniciones. Finalmente, agotados sus argumentos, el presidente tuvo que ceder y firmar un decreto que ordenaba el fin de las relaciones con La Habana.

El desenlace de la crisis cubana fue el prólogo de otra y más definitiva crisis. En marzo de 1962 debían celebrarse elecciones en las que estaba en juego el control de la Cámara de Diputados y de varios gobiernos de provincia. En ellas Frondizi esperaba obtener una victoria suficientemente clara para poder quitarse de encima la tutela de los militares. Con ese objetivo tomó la decisión más audaz de sus cuatro años de gobierno: autorizó la participación de los peronistas en los comicios, bajo la fachada de agrupaciones partidarias afines. Los riesgos de esta atrevida maniobra eran evidentes. En las elecciones legislativas de 1960 los peronistas, que estaban proscri-

tos, habían emitido 2.176.864 votos en blanco (24, 6 por ciento), seguidos por la UCRP con 2.109.948 (23, 8 por ciento). Entre tanto, el partido oficial, la UCRI, quedó en tercer lugar con 1.813.455 votos (20, 5 por ciento). Para cambiar este panorama en su beneficio, Frondizi debía ser capaz de superar el voto de la UCRP y convertirse en la verdadera alternativa al temido retorno del peronismo. Sacando partido de la comprensible ansiedad que despertaba la propaganda peronista, Frondizi buscó transformar las elecciones en un plebiscito sobre quién emergería como garante de la paz y el progreso. Una serie de elecciones provinciales en diciembre de 1961 parecieron dar credibilidad a sus expectativas. En ellas el partido oficial recuperó el terreno perdido en 1960 y creció a expensas de la UCRP, mientras que los peronistas, forzados a batirse fuera de sus principales bastiones urbanos, no parecían ser una fuerza electoralmente temible. El 18 de marzo, sin embargo, la victoria que hubiera retrospectivamente justificado tantas humillaciones terminó en una derrota.

Al cabo de siete años de proscripción política, el peronismo retornó como principal fuerza electoral, con el 32 por ciento de los sufragios. Los votos recibidos por las diversas agrupaciones bajo las que participaron los peronistas — toda vez que el Partido Justicialista continuó en la ilegalidad— totalizaron 2.530.238; la UCRI obtuvo 2.422.516 votos y la UCRP, 1.802.483. De las catorce elecciones provinciales, nueve fueron ganadas por los peronistas, incluso el distrito electoral más importante, la provincia de Buenos Aires, donde el dirigente sindical Andrés Framini resultó electo gobernador.

La reacción de los altos mandos militares no se hizo esperar y el 19 de marzo forzaron al presidente a anular por decreto las elecciones en los distritos donde habían triunfado los peronistas. Éste no iba a ser el único precio a pagar por su fallida apuesta electoral. Con independencia de sus motivaciones, al rechazar los resultados de las elecciones Frondizi había violado en la práctica el juramento constitucional de respetar la ley; sus enemigos civiles y militares no necesitaron más razones para provocar su derrocamiento. Comenzó así una vigilia de diez días durante los cuales la opinión pública estuvo pendiente de las negociaciones secretas entabladas entre los militares y los políticos en la búsqueda de una fórmula para resolver la crisis. El tiempo invertido en este esfuerzo puso claramente de manifiesto la resistencia de sectores importantes de las fuerzas armadas a dar por terminada la experiencia democrática iniciada en 1958. Finalmente, el 29 de marzo se llegó a una decisión y Frondizi fue depuesto de la presidencia.

En medio de la indiferencia general, llegó así a su fin el intento más audaz e innovador para hacer frente a los problemas de la Argentina post-Perón. Durante cuatro turbulentos años, Frondizi procuró reincorporar a las masas peronistas a la vida política y poner en marcha una nueva fase de sustitución de las importaciones. Sus propuestas no consiguieron suscitar el suficiente consenso como para asegurar al mismo tiempo la consolidación de la democracia.

El programa económico no fue bien recibido, ni siquiera en los medios empresariales. Si bien prometió a la burguesía argentina mucho más de lo que se le había ofrecido en el pasado inmediato, era un experimento demasiado ambiguo para confiar en él. Fueron muy pocos los políticos de derecha que supieron reconocer el proyecto de desarrollo capitalista que estaba encerrado en la retórica de Frondizi. El país nunca estuvo más cerca de crear un partido conservador moderno, pero perdió esa oportunidad. Ciertamente los caminos tortuosos que escogió Frondizi para formular su proyecto tampoco contribuyeron a facilitarlos. De todos modos, las iniciativas pro-

movidas desde la presidencia dieron lugar a un proceso de grandes cambios modernizadores de la economía y de la sociedad.

Parejo al aprovechamiento de las inversiones extranjeras, el gobierno tuvo que generar ahorros adicionales para poder financiar la construcción de infraestructura y los subsidios industriales. La alternativa a la que apelara Perón —extraer ahorros del sector agrícola— ya no era para entonces viable. Por el contrario, este sector debió ser fortalecido por medio de una política de precios altos. En estas condiciones, el gobierno recurrió a la reducción de los salarios para apuntalar el esfuerzo industrializador. Este recurso fue eficaz en dos sentidos: en el sector público, la disminución de los gastos en salarios dejó el espacio para incrementos de las inversiones; en el sector privado, permitió una expansión de los beneficios. El proyecto de Frondizi descansaba en la creencia de que mayores beneficios, mayores inversiones y un crecimiento más rápido de la productividad permitirían más adelante recuperar los niveles salariales. En términos macroeconómicos el objetivo era trasladar recursos del consumo a la inversión; congruentemente, la proporción de las inversiones en el PBI creció del 17,5 al 21,7 en 1961.

Las inversiones extranjeras tendieron a concentrarse en nuevas áreas donde tenían garantizada una protección especial, y sólo muy parcialmente promovieron la modernización de los sectores preexistentes. De este modo, se fue creando una economía industrial dualista en la cual un sector moderno intensivo en capital, con una importante presencia de compañías extranjeras, tecnologías avanzadas y salarios altos, comenzó a coexistir con un sector más tradicional, financiado de forma predominante con capitales nacionales, que operaba con equipos obsoletos, era más intensivo en mano de obra y pagaba salarios más bajos.

Vista en perspectiva, la gestión de Frondizi se tradujo efectivamente en estímulos a la expansión de las manufacturas y al desarrollo del mercado interno. Fue, con todo, una paradoja que el proyecto de sustitución de importaciones, concebido durante la segunda guerra mundial como expresión de un sentimiento nacionalista, terminara incrementando la influencia del capital extranjero en la economía. Por lo demás, la ampliación de la estructura productiva de la industria se llevó a cabo de forma desequilibrada. Limitada al mercado interno, no permitió a las empresas sacar partido de las economías de escala, como hubiera sido el caso si se hubiese dado una mayor prioridad en la agenda del gobierno al crecimiento de las exportaciones industriales. La nueva estructura continuó dependiendo de los recursos aportados por las exportaciones del agro para financiar la compra de sus bienes intermedios y equipos de capital: precisamente la dependencia tradicional que la estrategia de Frondizi se había propuesto eliminar.

LA PRESIDENCIA DE JOSÉ MARÍA GUIDO, 1961-1963

Los militares que derrocaron a Frondizi se encontraron pronto frente al desafío de cómo llenar el poder vacante. La alternativa de una dictadura militar era una solución favorecida sólo por algunos sectores. Tampoco el contexto internacional era propicio a los experimentos autoritarios, como había demostrado la fallida intervención del embajador del presidente Kennedy a favor de Frondizi. Finalmente se resolvió el dilema nombrando presidente del país al presidente del Senado, el doctor José María Guido, de acuerdo con las previsiones de ley en los casos de acefalia en el cargo de jefe del estado.

Una vez resuelta esta cuestión institucional, el nuevo ministro del Interior, Rodolfo Martínez, figura clave de la facción militar opuesta a una solución dictatorial, comenzó a desplegar el nuevo plan político. En líneas generales, el plan de Martínez retomaba la política de Frondizi consistente en reintegrar muy gradualmente a los peronistas a la vida política. Para llevar a cabo este plan era preciso antes que la facción legalista de las fuerzas armadas se impusiera no sólo en el seno del ejército sino también dentro de la marina y de la fuerza aérea. Tal fue el origen de la primera de una serie de crisis militares que pautaron la administración de Guido. A un mes del derrocamiento de Frondizi, la poderosa base militar de Campo de Mayo se declaró en contra del plan de Martínez.

La marina también ejerció su influencia en defensa de los ideales de 1955. En estas circunstancias, el ministro del Interior dimitió y Guido se vio obligado a firmar decretos que anulaban todas las elecciones celebradas en marzo, disolvían el Congreso y extendían el control federal también sobre las provincias donde los peronistas no habían ganado en las elecciones. Así, se abandonó la búsqueda de una solución política que hubiera incluido a las masas peronistas, aunque fuese en una posición subordinada.

El manejo de la economía no planteó disidencias dentro de la nueva Administración. Guido se hizo cargo de la economía en un clima de extrema incertidumbre. En los meses que precedieron a las elecciones de marzo, las señales de crisis en el programa económico de Frondizi habían provocado una fuga de capitales. Los puntos débiles de la recuperación de 1960-1961 fueron haciéndose evidentes a medida que los incrementos de la actividad económica y las inversiones públicas y privadas y provocaron un déficit comercial a finales de 1961. El aumento de las importaciones estimulada por el gran salto adelante en la industrialización no alcanzó a ser compensado por el magro volumen de exportaciones agrícolas. Adicionalmente, el país tuvo que hacer frente a la cuantiosa deuda externa de largo y corto plazo contraída en los años previos para financiar las nuevas inversiones. El deterioro de las reservas de divisas extranjeras, agravado por maniobras especulativas, complicó todavía más las finanzas públicas. Cuando el gobierno se vio obligado a recurrir a créditos del Banco Central para financiar sus gastos corrientes, superando los límites acordados con el FMI, la institución financiera internacional declaró que Argentina había violado sus compromisos.

Para hacer frente al nada glorioso final de la aventura desarrollista, el presidente Guido nombró ministro de Economía a Federico Pinedo. Al cabo de veintidós años, este padre fundador del conservadurismo liberal tomó las riendas de la economía una vez más, como elocuente recordatorio de la permanencia de aquella Argentina tradicional contra la que Frondizi había lanzado su programa de modernización. Pinedo duró sólo unas cuantas semanas en el cargo, pero fueron suficientes para que hiciese el trabajo para el cual le habían llamado: devaluó el peso de 80 a 120 por dólar. Su sustituto fue Álvaro Alsogaray, que volvió para administrar un nuevo acuerdo con el FMI, con metas fiscales y monetarias sumamente restrictivas. Su objetivo manifiesto fue equilibrar el presupuesto y purgar a la economía del «exceso de demanda» en que se había incurrido durante los últimos años del mandato de Frondizi.

La severa restricción monetaria provocó un marcado descenso del nivel de actividad. El PIB cayó en un 4 por ciento entre 1962 y 1963 a la vez que se multiplicaban los cierres de empresas y crecía el desempleo. La crisis de liquidez hizo que todos los pagos —tanto en el sector privado como en el público— comenzaran a ser

postergados y que los cheques de las empresas y los bonos emitidos por el gobierno circularan como substitutos del papel moneda. Durante este período la economía operó bajo las condiciones de mercado libre más amplias conocidas desde 1930. Sin embargo, la terapia de choque, a pesar de la fuerte recesión, no impidió que la inflación se acelerara hasta que alcanzó una tasa anual de entre el 20 y el 30 por ciento. La nota positiva en este sombrío panorama fue la excelente cosecha de 1962, que permitió mejorar la balanza comercial y reponer las reservas de divisas extranjeras. La economía continuó, no obstante, gobernada por la incertidumbre que creaban las abiertas disidencias de los jefes militares sobre el futuro político del país.

El desenlace del conflicto de abril de 1962 no había terminado de zanjar la lucha por el poder dentro de la corporación militar. En agosto, los partidarios de la solución dictatorial hicieron otro intento, bajo el liderazgo del general Federico Toranzo Montero, hermano del más intransigente censor del ex presidente Frondizi. El objeto del levantamiento era la dimisión del secretario de la Guerra con la excusa de que se había infringido el reglamento interno de ascensos del ejército. Con la dimisión del secretario comenzó la búsqueda de un substituto en un contexto que reveló claramente el estado de anarquía existente en las fuerzas armadas. Así se puso en marcha un verdadero proceso electoral, que el país pudo seguir en la prensa y en el cual los generales se comportaban como grandes electores. Cuando se contaron los votos y se evaluó la potencia de fuego que había detrás de cada sufragio, las elecciones favorecieron a la facción legalista del ejército. El presidente Guido nombró secretario de la Guerra a uno de los miembros de dicha facción, pero los oficiales que habían sido derrotados hicieron caso omiso de su autoridad. Estos hombres, que estaban decididos a no retroceder y seguían bajo el liderazgo de Toranzo Montero, propusieron su propio candidato y desplegaron sus tropas en posición de combate en el centro de Buenos Aires. La facción legalista también pasó a la acción y una vez más el país se encontró al borde del enfrentamiento armado. Los recursos militares de los legalistas eran superiores a los que tenían los seguidores de Toranzo Montero, pero el presidente intervino para evitar un conflicto abierto. Al igual que en abril, los sectores más decididamente antiperonistas obtuvieron una victoria política a pesar del relativo equilibrio entre los dos bandos.

Al verse privada de su victoria militar, la facción legalista reaccionó con rapidez: sus portavoces exigieron la vuelta de la Constitución, el repudio a toda dictadura y la convocatoria de elecciones a plazo fijo. En estas circunstancias, de nuevo estalló el conflicto. La guarnición de Campo de Mayo se puso al frente de la rebelión bajo el mando del general Juan Carlos Onganía y montó un operativo dirigido a la oposición pública que fue decisivo para el desenlace: a través de dos emisoras de radio y en un esfuerzo por imponer la imagen de un ejército democrático justificó su actitud afirmando: «Estamos dispuestos a luchar por el derecho del pueblo a votar».

Esta vez, las facciones militares en pugna entraron en combate. Los legalistas adoptaron el nombre de «los azules», mientras que sus adversarios eran conocidos por el de «los colorados». En el enfrentamiento, los «colorados» se mantuvieron siempre a la defensiva y no representaron ningún desafío real para los «azules». Éstos no sólo tenían mayor potencia de fuego sino que, además, contaban con el apoyo de la fuerza aérea, que amenazó con bombardear las concentraciones de tropas «coloradas», minando su voluntad de combate. La marina, aunque simpatizaba con los «colorados», se mantuvo al margen de la lucha. El 23 de septiembre de 1962 las tropas del general Onganía obtuvieron la rendición de sus adversarios y procedieron a

imponerles la paz del vencedor. Las principales jerarquías del ejército quedaron en sus manos y llevaron a cabo una verdadera purga que puso fin a la carrera de ciento cuarenta oficiales de alta graduación.

La victoria de la facción «azul» del ejército llevó nuevamente al doctor Martínez al frente del Ministerio del Interior, desde donde reanudó la búsqueda de una fórmula política que permitiera a las fuerzas armadas volver a los cuarteles. La decisión original de facilitar la incorporación de las masas peronistas a la vida institucional se mantuvo, y lo mismo se hizo con la negativa a permitir que líderes peronistas llegaran a ocupar posiciones de poder. Para resolver el dilema implícito en este doble objetivo se propuso alentar la formación de un amplio frente político al que las masas peronistas aportarían su caudal electoral pero cuya conducción permanecería en manos de otras fuerzas. Esta repetición de la experiencia de 1958 pareció encontrar en Perón una respuesta favorable: frente a la alternativa de una dictadura militar, el peronismo se avenía a aceptar un retorno lento y gradual al sistema institucional mientras daba su apoyo a la fórmula política patrocinada por el sector dominante de las fuerzas armadas. El líder exiliado aceptó esta solución de compromiso y confió al político moderado doctor Raúl Matera la conducción local de su movimiento a la vez que destituía a Andrés Framini, el líder sindical que, después de su fallido intento de convertirse en gobernador de Buenos Aires en 1962, venía adoptando posturas cada vez más intransigentes, acercándose más a las fuerzas de la izquierda.

Bajo estos auspicios, el ministro del Interior comenzó a reunir las piezas dispersas del complejo rompecabezas político. Varios partidos pequeños entraron en la pugna por la codiciada candidatura presidencial del futuro frente electoral. Pero Perón y Frondizi no renunciaron a sus esfuerzos por controlar el resultado político y maniobrando entre bastidores se ocuparon de frustrar las aspiraciones de los que pretendían convertirse en los salvadores y herederos de las fuerzas proscritas. Por su parte, el ministro del Interior reconoció oficialmente a un partido neoperonista, la Unión Popular, que se ofreció a encauzar los votos de los seguidores de Perón.

Esta jugada audaz del ministro del Interior provocó, previsiblemente, inquietud y malestar en el bando antiperonista, que trató de presionar al presidente Guido para que revocase la decisión. Para desmontar esas prevenciones, los inspiradores del frente político anunciaron públicamente su condena del régimen depuesto en 1955. De manera simultánea, prepararon otra iniciativa igualmente atrevida que, al final, sería la ruina de sus planes. En marzo de 1963 el doctor Miguel Ángel Zavala Ortiz, líder fervientemente antiperonista de la UCRP, denunció con indignación un ofrecimiento del ministro del Interior para que ocupase el segundo lugar en una candidatura presidencial que encabezaría el general Onganía y tendría el respaldo de todos los partidos. La denuncia y el clamor que se levantó dentro del bando antiperonista obligaron a Martínez a dimitir. Presionado por sus camaradas, entre los que había numerosos partidarios del general Aramburu, Onganía debió desmentir que fuese candidato para la alianza propuesta.

Las divisiones internas en los altos mandos del ejército alentaron una nueva rebelión militar, esta vez centrada en la marina, que tuvo lugar el 2 de abril y se organizó contra la política electoral del gobierno. Tras varios días de lucha sangrienta, los «azules» del ejército, con el auxilio de la fuerza aérea, lograron la rendición de las fuerzas rebeldes. La derrota de la marina, donde los simpatizantes de los «colorados» estaban en mayoría, inició su ocaso político; pasarían trece años antes de que recuperara su posición dentro de la corporación militar. En la coyuntura y frente al

agudo peligro de desintegración institucional, los jefes militares optaron por abandonar sus planes políticos.

El viraje del gobierno sorprendió a Perón, quien, otra vez aliado con Frondizi, parecía dispuesto a acatar las reglas del juego establecidas para las próximas elecciones del 7 de julio. El gobierno se mostró insensible a estas manifestaciones de buena voluntad. Después de un año de marchas y contramarchas, durante el cual había habido cinco ministros del Interior, el nuevo ministro encargado de la conducción política del gobierno puso fin a las ambigüedades. Nombrado en mayo de 1963, el general Osiris Villegas empezó por excluir a la Unión Popular de la competencia electoral por cargos ejecutivos y luego proscribió paulatinamente a todas las agrupaciones sospechosas de representar al peronismo ortodoxo o de estar aliadas con él.

El sinnúmero de obstáculos e impedimentos jurídicos que se alzaron sobre el frente peronista intensificó el conflicto en sus filas, ya debilitadas como resultado de las dificultades encontradas para coincidir en un candidato común a la presidencia. Cuando Perón y Frondizi acordaron apoyar a Vicente Solano Lima, un conservador populista, la coalición se rompió. Un sector importante de la UCRI dio su apoyo a la candidatura de Óscar Alende pese a que Frondizi se esforzó por impedirlo. Tampoco Perón pudo impedir que los demócratacristianos respaldaran a Raúl Matera, quien fuera su representante en el país, como candidato presidencial. A la confusión provocada por estas discrepancias se agregaron nuevos obstáculos jurídicos; entonces Perón y Frondizi pidieron a sus partidarios que votaran en blanco. En este escenario cambiante, quedaban en carrera por la primera magistratura, el doctor Arturo Illía, político provincial poco conocido pero respetado, por la UCRP; Óscar Alende por la facción disidente de la UCRI; y el general Aramburu, quien fuera jefe de la Revolución Libertadora, respaldado por un nuevo partido político, la Unión del Pueblo Argentino, con la esperanza de atraer al voto antiperonista. Los efectos de la orden de Perón y Frondizi fueron contraproducentes. Sectores importantes del electorado peronista prefirieron no expresar su protesta votando en blanco y en vez de ello decidieron fortificar las alternativas al temido triunfo de Aramburu. Realizado el cómputo electoral, los votos en blanco representaron el 19, 2 por ciento del total de votos, lo que significó un retroceso del 24, 3 por ciento de los emitidos en 1957, en ocasión de las elecciones para constituyentes. Ambos sectores del radicalismo se beneficiaron del apoyo peronista, pero el vencedor, inesperadamente, fue Illía, con 2.500.000 votos, luego Alende, con 1.500.000, a su vez seguido de cerca por los votos en blanco, que superaron los 1.350.000 votos que obtuvo el general Aramburu.

LA PRESIDENCIA DE ARTURO ILLÍA, 1963-1966

En 1963 Argentina se embarcó en una nueva experiencia constitucional en un clima de relativa tranquilidad política cuyo epítome era la personalidad del presidente electo. Su estilo parsimonioso y provinciano, parecía apropiado al estado anímico de la sociedad argentina, que, harta de tantos conflictos, lo recibió sin ilusiones, en marcado contraste con el fervor que había acompañado la victoria de Frondizi en 1958. Illía comprendió que la primera tarea del gobierno era ofrecer a los ciudadanos argentinos una política moderada que les permitiese ir resolviendo sus diferencias. Mientras que Frondizi había intentado innovar, Illía optó por la seguridad de lo probado y conocido: el respeto a la ley y elecciones periódicas.

Illía y su partido habían atravesado el paisaje cambiante de la Argentina de posguerra sin experimentar ellos mismos grandes cambios. Quizás el mayor cambio se produjo en su actitud frente al peronismo. Desde 1946, el Partido Radical había encauzado los sentimientos de rechazo que el movimiento acaudillado por Perón había despertado en las clases media y alta. La reacción antiperonista no sólo expresaba la resistencia a la tendencia autoritaria del régimen de Perón, sino también a las transformaciones sociales operadas bajo sus auspicios. El antiperonismo se confundía, así, con un espíritu de restauración social. Sin embargo, las transformaciones que habían tenido lugar en el país eran profundas e irreversibles; Argentina no podía volver sencillamente al pasado. El peronismo había, en efecto, modificado el viejo orden con sus políticas, pero ese orden también había sido corroído por el desarrollo industrial, la modernización de las relaciones laborales y la expansión de la cultura de masas. Que esta nueva realidad estaba destinada a durar fue un descubrimiento que penosamente hicieron quienes alentaban una vuelta hacia atrás. La actitud de Frondizi primero y, más adelante, la de los militares del ejército «azul» pusieron de manifiesto este forzado reconocimiento del peronismo. El nuevo gobierno Illía, elegido gracias a la proscripción de los peronistas, también prometió que pronto los devolvería a la legalidad.

En donde el Partido Radical se mantuvo fiel a sus tradiciones fue en su concepción de la política económica. Las banderas exhibidas en el programa del partido desde mediados de la década del 1940 —nacionalismo, distribución de la renta, intervencionismo del estado— dictaron algunas de las primeras medidas del gobierno. Durante la campaña electoral, los candidatos del radicalismo habían prometido revisar la política petrolera de Frondizi porque obraba en detrimento de la soberanía del país. Una vez en la presidencia, Illía anuló los contratos firmados por las compañías petroleras internacionales. La medida implicó el pago de importantes indemnizaciones, interrumpió el crecimiento de la industria del petróleo y le ganó al gobierno la temprana antipatía del mundo empresarial y los inversores extranjeros.

La fuerte recesión de 1962-1963 había hecho descender el producto nacional a los niveles más bajos de los últimos diez años. La capacidad instalada de la industria manufacturera —fuertemente incrementada por la oleada previa de inversiones— operaba en alrededor del 50 por ciento, al tiempo que el desempleo alcanzaba un 9 por ciento de la población activa en el Gran Buenos Aires y era aún mayor en el interior del país. La Administración radical consideró que su primer objetivo era reactivar la producción. La estrategia escogida fue estimular el consumo por medio de políticas expansionistas de carácter monetario, fiscal y salarial. También aquí el contraste con la política de Frondizi fue evidente. En 1963 la economía se encontraba en un punto bajo del ciclo económico, comparable con el de 1959. Mientras que en 1960-1961 fueron las inversiones, financiadas con recursos extranjeros, las que impulsaron la recuperación, en 1964-1965 la expansión se basó, por el contrario, en el estímulo del consumo privado. Bajo el gobierno radical se incrementó el crédito bancario al sector privado, lo cual permitió mejorar la financiación de la venta de bienes de consumo duraderos; el tesoro procedió a disminuir el monto de deudas pendientes con empleados públicos y proveedores del estado y poner al día las transferencias federales a las provincias; también fueron aumentados los salarios y se aprobó una ley que establecía el salario mínimo y móvil.

El PIB creció en un 8 por ciento en 1964 y 1965 —con incrementos anuales en la industria del 15 por ciento y el desempleo se redujo a la mitad—, aunque el creci-

miento importante de la economía sólo recuperó los niveles de antes de la recesión. La rápida expansión hizo temer que surgieran problemas en la balanza de pagos no sólo debido a la mayor demanda de importaciones, sino también por la necesidad de hacer frente a las obligaciones de la deuda externa contraída durante los años de Frondizi. A finales de 1963 se calculó que el servicio de la deuda exterior pública y privada supondría pagos de 1.000 millones de dólares durante 1964 y 1965.

Los temores iniciales sobre la balanza de pagos disminuyeron luego, gracias a los buenos resultados de las exportaciones. Los años de la Administración de Illía señalaron un punto de inflexión en el comportamiento del sector exterior. Las exportaciones crecieron del nivel de 1.100 millones de dólares que había prevalecido desde el decenio de 1950 a cerca de 1.600 millones de dólares, el nivel alcanzado casi dieciocho años antes. Contribuyó a esto el continuo ascenso de los precios (y llevó a una mejora del 12 por ciento en el tipo de cambio entre 1963 y 1966), pero, sobre todo, influyó en el incremento del volumen físico de la producción. Después de permanecer estancada de 1953 a 1963, la producción agrícola comenzó a crecer y aumentó en más de un 50 por ciento entre 1963 y 1966. El estrangulamiento tradicional en la economía argentina, el estancamiento de las exportaciones agrícolas, fue, de esta forma, aflojado.

Los primeros logros económicos del gobierno no le valieron mayor consenso por parte de la población. Elegidos por menos de un tercio de los votantes, y carentes de raíces en el movimiento laboral y en las organizaciones empresariales, los radicales necesitaban la colaboración de otras fuerzas para ampliar sus bases de apoyo. Sin embargo, pronto dejaron claro que no tenían ninguna intención de compartir el gobierno. Su rechazo a una estrategia de alianzas fue una preparación deficiente para el momento en que la tregua provisional que había acompañado su ascenso al poder diera paso a un nivel de conflictos más en consonancia con el pasado reciente del país.

En cuanto a las relaciones de los radicales con los militares, la situación no hubiera podido ser más paradójica. La derrota de la facción militar «colorada», con la cual los radicales estaban asociados, había despejado el camino para las elecciones y posibilitado la inesperada victoria de Illía. El matrimonio de conveniencia forjado entre el nuevo gobierno y los líderes del ejército «azul» estuvo, pues, cargado de tensiones. Los radicales eran demasiado débiles para imponer un retorno de sus propios aliados militares y provocar un cambio en la cadena de mando de las fuerzas armadas. Así pues, tuvieron que resignarse a aceptar el *statu quo*, en el cual la figura del general Onganía, comandante en jefe del ejército, era una pieza clave. Por su parte, los comandantes militares tuvieron que adaptarse a la existencia de un gobierno civil por el que no sentían ninguna simpatía en absoluto. Y vieron la prudente respuesta de Illía a la reaparición de la oposición sindical como prueba clara de la falta de autoridad política.

La oposición sindical a Illía se remontaba al período anterior a su elección para la presidencia. En enero de 1963 los sindicatos consiguieron reorganizar la CGT y aprobaron una campaña cuyo objetivo era forzar la vuelta al orden constitucional por medio de una serie de huelgas. Cuando en el último momento los militares que rodeaban al presidente Guido decidieron vetar la participación de la Unión Popular, la CGT suspendió la movilización prevista e instó a sus afiliados a boicotear las elecciones y condenar por ilegítimos sus resultados. Los gestos positivos del gobierno de Illía en cuestiones económicas y sociales no lo redimieron a ojos de los sindicatos. A

pesar de la aprobación de una ley sobre el salario mínimo —en contra de los deseos de las organizaciones empresariales—, la CGT decidió poner en práctica su plan de acción original en mayo de 1964, alegando condiciones de pobreza que estaban lejos de ser reflejadas por la evolución de la economía.

Durante varias semanas el país asistió a una escalada de ocupaciones de fábricas que, por su escrupulosa planificación, parecían operaciones militares. Esta formidable demostración de poder sindical provocó la alarma en los círculos empresariales, pero la naturaleza pacífica de las ocupaciones reveló que su objetivo no era enfrentarse a las empresas, sino más bien debilitar al gobierno. Illía optó por hacer caso omiso del desafío y no ordenó la intervención del ejército. No pudo, empero, evitar que su aislamiento quedara a la vista de todos, mientras crecían las demandas por una política de ley y orden.

La movilización de mediados de 1964 señaló la entrada en el escenario político de un nuevo estilo de acción obrera. Los sindicatos eran simultáneamente agencias para la negociación salarial y empresas que proporcionaban a sus miembros una amplia red de servicios sociales; el resultado había sido la formación de vastos aparatos burocráticos. Al mismo tiempo, los líderes sindicales habían terminado siendo aceptados como elementos de poder en la Argentina posperonista. Entre 1956 y 1959, cuando el sindicalismo era débil y marginal, había lanzado una protesta activa de las masas obreras contra el estado. Ahora, con más intereses creados y una mayor legitimidad política, comenzó a adoptar una estrategia diferente. En vez de estimular la acción de masas, prefería recurrir a las huelgas generales, en las cuales la intervención de las masas estaba descartada de antemano y lo que importaba era la eficacia de la organización. Esta estrategia de golpear y negociar iba acompañada de la búsqueda de aliados entre los descontentos con el gobierno. Quien mejor encarnaba este nuevo estilo era Augusto Vandor, jefe del sindicato de metalúrgicos, frecuente interlocutor de los empresarios, los militares y los políticos, verdadero líder de las 62 Organizaciones.

Una evolución no menos importante se estaba produciendo también en el seno de las fuerzas armadas. Frente a los riesgos de dividir al estamento militar a causa de su involucración en los conflictos políticos, los jefes del ejército «azul» decidieron inclinarse ante la autoridad constitucional y regresar a los cuarteles. El consecuente repliegue a su función institucional tenía por objeto permitir a las fuerzas armadas restablecer las pautas de autoridad y mejorar la profesionalidad de sus oficiales. En agosto de 1964, en un discurso que pronunció en West Point, el general Onganía dio a conocer un proyecto cuya finalidad era situar a los militares por encima de la política.⁶ Dijo que las fuerzas armadas, «el brazo armado de la Constitución», no podían substituir a la voluntad popular. Sin embargo, también señaló que sus funciones eran «garantizar la soberanía y la integridad territorial de la nación, preservar la moral y los valores espirituales de la civilización occidental y cristiana, [y] garantizar el orden público y la paz interior». Y añadió que, con el fin de cumplir estas funciones era necesario reforzar a los militares como corporación, así como el desarrollo económico y social del país.

En esta visión ampliada del papel de las fuerzas armadas, su lealtad a los poderes civiles seguía siendo muy condicional. En el mismo discurso, Onganía recalcó que «la conformidad [militar] se refiere esencialmente a la Constitución y sus leyes,

6. *La Nación*, 7 de agosto de 1964; citado en Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y democracia, 1955-1983*, CEDEAL, Buenos Aires, 1983, p. 100.

nunca a los hombres o los partidos políticos que puedan ejercer temporalmente el poder público». De ahí que la obediencia debida podía caducar «si, al amparo de ideologías exóticas, [se] producía un exceso de autoridad» o si el ejercicio de las vastas funciones atribuidas a las fuerzas armadas se veía obstaculizado. En la nueva doctrina, la prevención y la eliminación de la subversión interna ocupaban un lugar central. Al transformar el desarrollo económico y la eficiente gestión gubernamental en condiciones necesarias para la seguridad nacional, Onganía colocaba tales objetivos dentro de la esfera legítima de la jurisdicción militar, desdibujando por completo la línea de demarcación entre lo militar y lo civil. Este esquema destinado a situar a las fuerzas armadas por encima de la política concluía eliminando, en realidad, a la política misma.

La elección de West Point para presentar al general Onganía como el nuevo cruzado de la doctrina de seguridad nacional no fue ninguna coincidencia. Estados Unidos llevaba a cabo en aquel momento una campaña activa con el fin de convertir los ejércitos de América Latina en sus aliados en la lucha contra el enemigo interno: la subversión comunista. La movilización popular y la crisis de autoridad en el gobierno de Goulart llevaron a las fuerzas armadas al poder en Brasil en 1964 en nombre de la seguridad nacional. En Argentina el presidente Illía continuaba administrando una legalidad constitucional que era muy consciente de estar sometida a una estrecha vigilancia militar. A principios de 1965 la intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana puso a prueba la «entente» entre el gobierno radical y las fuerzas armadas. Illía se encontró atrapado entre la presión de la opinión pública, que era hostil a Estados Unidos, y las exigencias de las fuerzas armadas, que estaban a favor de la intervención. Su respuesta fue ambigua: propuso la creación de una fuerza militar interamericana que restableciera el orden en Santo Domingo, pero se negó a permitir que tropas argentinas formaran parte de ella. La negativa del presidente a seguir el consejo de los jefes militares alimentó en ellos un rencor duradero.

Tampoco se ganó Illía la buena voluntad de los militares restableciendo la legalidad del movimiento peronista, que gozó de una libertad de acción desconocida hasta entonces. Esta mayor tolerancia del presidente radical apuntaba a sacar partido de las contradicciones que Perón estaba creando dentro de su propio movimiento desde su exilio en España. Luego del derrumbe de 1955, dentro del peronismo coexistían fuerzas claramente distintas. En las provincias menos afectadas por la modernización, el peronismo logró conservar su perfil multiclasiista bajo líderes procedentes de la tradición conservadora que cultivaban la retórica peronista con el objeto de conservar la clientela política de Perón al tiempo que se sometían prudentemente al orden posperonista. Obligados a actuar en circunstancias nuevas, estos líderes locales optaron por distanciarse de las cambiantes tácticas de Perón a fin de no perder las posiciones que habían reconstruido laboriosamente.

En las zonas más modernas y urbanas del país, el peronismo había perdido sus apoyos fuera de la clase obrera y los sectores populares; aquí el movimiento sindical tenía un peso indiscutible, ya que era la única estructura que había sobrevivido al colapso político de 1955. En una primera etapa, el sindicalismo peronista siguió las instrucciones del líder exiliado con más disciplina que las fuerzas neoperonistas del interior. Con el tiempo, sin embargo, los líderes obreros fueron haciendo suya la lógica conservadora de unas instituciones sindicales que sólo podían prosperar si combatían con la buena voluntad de los centros del poder nacional. Así, cada vez fue más difícil seguir las estrategias de Perón, quien, proscrito de la vida política, tenía por

principal objetivo la desestabilización de las fórmulas de gobierno que esforzadamente concebían sus adversarios. Al final, pues, el ex presidente se encontró enfrentado a las aspiraciones más conformistas de los líderes sindicales. Mientras que éstos buscaban un orden político en el que hubiera espacio para ellos y les permitiera consolidarse, Perón libraba desde el exilio una incansable guerra de desgaste.

Al cabo de diez años de existencia precaria en las fronteras de la legalidad, el movimiento peronista empezó a considerar la idea de emanciparse de la tutela política de Perón. Numerosos líderes sindicales concluyeron que la obediencia disciplinada a Perón les impedía la incorporación plena en el sistema de poder prevaliente. Esta ruptura no estaba exenta de dificultades. La fidelidad de las masas peronistas a su líder ausente era tan vigorosa como siempre; más aún, muchos albergaban la secreta ilusión de un inminente retorno de Perón al país, ilusión que éste alimentaba con repetidos mensajes desde el exilio. El mito del retorno de Perón tornaba precaria la autoridad de los líderes locales y conspiraba contra sus esfuerzos por institucionalizar el movimiento dentro de las reglas de juego existentes. Para eliminar este obstáculo era preciso demostrar que el regreso de Perón era imposible.

A finales de 1964 los sindicatos peronistas liderados por Vandor organizaron la llamada Operación Retorno. Perón salió de Madrid por vía aérea el 2 de diciembre, pero cuando aterrizó en Río de Janeiro el gobierno brasileño, siguiendo instrucciones de las autoridades argentinas, le obligó volver a España. Las razones de la participación de Perón en esta aventura, de tan dudoso desenlace, nunca fueron claras. Lo cierto es que su prestigio a ojos de sus leales seguidores no se vio afectado; la responsabilidad del fracaso recayó de lleno en los líderes sindicales y el gobierno radical.

La convocatoria de elecciones legislativas para marzo de 1965 aplazó la resolución de la disputa por el poder entre los peronistas, que decidieron cerrar filas detrás de sus candidatos. Los resultados fueron 3.400.000 votos para los diferentes grupos peronistas y 2.600.000 para el partido del gobierno. Dado que sólo estaba en juego la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados, los efectos de la derrota electoral se vieron atenuados; aun así, el gobierno perdió su mayoría absoluta y a partir de aquel momento tuvo que buscar el apoyo de otros partidos menores. Más grave todavía fue el hecho de que los radicales se vieron inapelablemente debilitados ante la opinión de los conservadores y de los militares. Este último fracaso en la tarea de contener la fuerza electoral de los peronistas, más el pobre desempeño del gobierno en otros campos hicieron muy poco por reducir el aislamiento social y político de la presidencia de Illía.

A mediados de 1965, el gobierno se vio obligado a reconocer que la inflación, ya próxima al 30 por ciento, era una vez más un problema urgente. Las medidas expansionistas de los primeros días dieron paso ahora a un programa anti-inflacionario que empezó por reducir la ayuda del Banco Central al sistema bancario, en especial los créditos para el sector público. Estos esfuerzos por reducir el déficit fiscal chocaron con dificultades. Los reveses electorales del gobierno hicieron sentir sus efectos cuando el gobierno no consiguió que el Congreso aprobara una serie de leyes impositivas dirigidas a mejorar las finanzas públicas. En la política de ingresos los resultados fueron todavía peores: la presión de los asalariados públicos y privados produjo aumentos superiores a las pautas oficiales. Por último, a finales de 1965 la actividad económica empezó a decaer.

La política económica del gobierno radical se desarrolló, además, en medio de la hostilidad de los centros del poder económico, especialmente porque dicha política descansaba sobre una serie de controles y formas de intervención estatal que buscaban limitar la especulación y las presiones sectoriales. Las acusaciones de «dirigismo económico», «ineficiencia administrativa» y «demagogia fiscal» unificaron a las principales corporaciones industriales, agrícolas y financieras en su ataque contra el gobierno, ataque que se agudizó aún más a causa del trato preferente que el presidente dispensaba a las pequeñas y medianas empresas.

En noviembre de 1965 un enfrentamiento incidental entre Onganía y el secretario de la Guerra hizo que el primero presentara su dimisión. El gobierno, sin embargo, no estaba en condiciones de alterar el equilibrio de poder militar: el nuevo comandante en jefe, el general Pascual Pistarini, surgió del sector que consideraba a Onganía su líder político natural. Además, la estrella de Onganía empezó a brillar con más fuerza al dejar el ejército, atrayendo las simpatías de la franja cada vez más amplia de los descontentos con el gobierno radical.

No obstante, donde el equilibrio político parecía ser más inestable era en el seno del movimiento peronista. Meses después del fallido retorno de Perón a Argentina, Vandor y sus amigos creyeron que había llegado el momento de poner fin a la obediencia a quien se interponía entre ellos y el orden político en el cual buscaban ser aceptados. Un congreso del partido orquestado por los sindicatos aprobó un plan cuyo objetivo era substituir la voluble voluntad política del líder exiliado por una estructura que representara mejor los intereses de los dirigentes locales. Al ver desafiado su liderazgo, Perón envió a su tercera esposa, María Estela Martínez, a Argentina con la misión de frustrar la rebelión en ciernes. Isabel (tal era el apodo por el que se la conocía) comenzó por reunir adhesiones entre los rivales de Vandor. La propia CGT experimentó un conflicto de lealtades y se escindió en dos. Sin embargo, Vandor logró conservar el control del grueso del aparato sindical así como el apoyo de los políticos neoperonistas del interior.

A principios de 1966 debía elegirse un nuevo gobernador de la provincia de Mendoza, lo cual brindó una ocasión para medir fuerzas entre el líder supremo y los caudillos peronistas locales ya que Perón y sus rivales postularon a distintos candidatos. Al final, una alianza radical-conservadora ganó las elecciones, pero mayor interés revistió el hecho de que el oscuro candidato respaldado por Perón obtuvo más votos que el candidato al que respaldaban Vandor y los otros rebeldes. Este resultado fue un duro golpe para los que, dentro y fuera del peronismo, confiaban en la decadencia política del líder exiliado. La facción disidente comenzó a perder partidarios rápidamente. Todo hacía prever que el peronismo, unido ahora tras su líder, iba camino de una victoria segura en los próximos comicios a celebrarse en marzo de 1967. En estas circunstancias, sectores clave de la opinión fueron ganados por la convicción de que el orden político surgido del derrocamiento de Perón sólo podía sobrevivir si eran suprimidas las periódicas consultas electorales. La posibilidad de un golpe de estado comenzó a ser abiertamente debatida por la opinión pública.

Entretanto, la modernización cultural y técnica del país iniciada por Frondizi, en paralelo con los cambios económicos producidos por la inversión de capital extranjero en la industria, había empezado a modificar el panorama social argentino. Un estrato nuevo formado por profesionales, directores de empresas y universitarios fue adquiriendo mayor visibilidad. En este sector incipiente los valores de la democracia liberal que habían galvanizado la resistencia al régimen peronista despertaban

poca adhesión. Los mitos movilizadores eran, ahora, la eficiencia y el dinamismo económico. Esta nueva sensibilidad se expresaba por medio de una consigna vaga pero llena de promesas: «el cambio de estructuras». Bajo sus auspicios se crearon institutos que difundían los métodos de las «business schools» norteamericanas entre los cuadros de ejecutivos de empresas; se inició la publicación de semanarios que reproducían el formato de *Time* y *Newsweek*, sostenidos por el generoso apoyo de la publicidad de grandes empresas nacionales y extranjeras; una profusa propaganda entronizó en los hábitos de los argentinos nuevas aspiraciones y pautas de consumo.

No obstante su vaguedad, la consigna del «cambio de estructuras» era clara en un aspecto: el mayor obstáculo a la integración de Argentina en el mundo moderno era el arcaísmo de sus partidos políticos. Los caricaturistas dibujaban a Illía, con su estilo moderado, como una figura inmóvil y tranquila, con una paloma de la paz posada en su cabeza, convirtiéndola en el símbolo de la decadencia. La tarea de descrédito del gobierno fue tan intensa y real que la opinión pública acogió sin sobresaltos las llamadas cada vez más explícitas a un golpe de estado. Al tiempo que el gobierno radical era objeto de una crítica mordaz, esta campaña de acción psicológica apuntaba a crear una nueva legitimidad por medio de la exaltación de las fuerzas armadas, en las que se descubrían las virtudes de eficiencia y profesionalidad, que se reputaban ausentes en la clase política. Onganía fue convertido en el líder natural de esta ideología de modernización autoritaria, que también encontró adeptos en el movimiento obrero. Muchos líderes sindicales contemplaron con optimismo el ascenso de una elite militar que compartía su descontento con la llamada «partidocracia». Además, la supresión del sistema electoral, en el que Perón siempre estaba en condiciones de influir, cancelaba un ámbito que no facilitaba sus intentos de emanciparse de la tutela política del caudillo exilado.

La suerte del gobierno radical quedó sellada mucho antes del levantamiento militar del 26 de junio de 1966. El 29 de mayo, el general Pistarini, en una ceremonia oficial a la que asistía el presidente, pronunció un discurso desafiante en el cual expresó los temas dominantes de la propaganda antigubernamental. En contra de las expectativas de los conspiradores, que esperaban un acto de autoridad presidencial que les diera motivo para declarar su rebelión, Illía no hizo nada. Valiéndose de un pretexto fútil, Pistarini arrestó entonces a uno de los pocos oficiales constitucionalistas e hizo caso omiso de las órdenes de ponerle en libertad que le dio el secretario de la Guerra. La respuesta del presidente fue destituir al comandante en jefe, con lo que finalmente provocó una crisis decisiva. El 26 de junio, el ejército se apoderó de los sistemas de radio, televisión y teléfonos y dio a Illía un plazo de seis horas para dimitir. Transcurrido este tiempo, un destacamento de la policía lo expulsó del palacio presidencial y lo envió a su casa. De esta manera, concluyó la búsqueda de un orden constitucional iniciada en 1955, sin que nadie se atreviera a defenderla.

El 28 de junio, los comandantes de los tres ejércitos formaron una junta revolucionaria cuyas primeras decisiones fueron destituir al presidente y al vicepresidente, a los miembros de la Corte Suprema, a los gobernadores y a los intendentes electos. El Congreso y las legislaturas provinciales fueron disueltos, se prohibieron todos los partidos políticos y sus activos se traspasaron al estado. Una proclama, la llamada Acta de la Revolución, informó al pueblo de que volvería a tener un gobierno representativo sólo después que la iluminada gestión de las fuerzas armadas — tan larga como fuese necesaria — hubiese desmantelado las estructuras y los valores anacró-

nicos que obstaculizaban el camino de la grandeza nacional. La Junta retuvo el poder durante veinticuatro horas y después, como era de prever, nombró a Onganía presidente del nuevo régimen autoritario.

LA REVOLUCIÓN ARGENTINA, 1966-1973

Onganía asumió la presidencia con plenos poderes en 1966. El golpe de estado ya había sacado a los partidos políticos del escenario. El denominado Estatuto de la Revolución Argentina dio un paso más allá y excluyó a las fuerzas armadas de las responsabilidades de gobierno. Esta concentración de poder fue el corolario natural del consenso que rodeó el derrocamiento de Illía: dismantelar el sistema de la «partidocracia» y preservar la unidad de la corporación militar desvinculándola de la gestión gubernamental.

La dirección del nuevo régimen autoritario quedó, así, dependiendo de los gustos ideológicos de Onganía. Careciendo de atractivo personal o de talento para la retórica, éste se apresuró a rodearse de la pompa propia de un poder lejano y autosuficiente. Desde las alturas de esta inesperada monarquía, informó al país las primeras claves de sus preferencias. Éstas se correspondían poco con la imagen de paladín de la modernidad que habían cultivado cuidadosamente sus agentes de publicidad. Eran, en esencia, las de un soldado devoto, prisionero de las más estrechas fobias católicas en materia de sexualidad, comunismo y arte. Admirador de la España de Franco, Onganía veía en ella un ejemplo a ser imitado a fin de devolver la moral y el orden a un pueblo al que consideraba licencioso e indisciplinado.

Como había ocurrido antes, con el ascenso al poder del general Uriburu en 1930, los coroneles nacionalistas en 1943 y, de manera menos enfática, con el general Lonardi en 1955, reaparecieron en la escena pública las expresiones más puras del pensamiento antiliberal. El país asistió nuevamente a la exaltación de los esquemas corporativistas de gobierno, y el estado adoptó un estilo paternalista, pródigo en prohibiciones y buenos consejos como parte de una febril campaña de vigilancia moral e ideológica.

El primer blanco de esta cruzada regeneradora fue la universidad. En julio las universidades públicas fueron privadas de su autonomía y puestas bajo el control del Ministerio del Interior alegando la necesidad de acabar con la infiltración marxista y la agitación estudiantil. En 1946, un mes después de la victoria electoral de Perón, se había infligido una medida similar a las universidades argentinas. Como sucediera veinte años antes, gran número de profesores dimitió para evitar ser víctimas de la purga, y muchos de ellos optaron por exiliarse en Europa, Estados Unidos y otros países de América Latina.

La búsqueda de un nuevo orden apuntó luego a los servicios públicos. El primero fue el puerto de Buenos Aires. En octubre se abolieron las prerrogativas de que gozaba el sindicato con el fin de que el puerto pudiera competir con el resto del mundo. En diciembre les llegó el turno a los ferrocarriles, que Frondizi ya había intentado modernizar al precio de huelgas prolongadas. Al igual que en el puerto, también aquí los métodos de racionalización se toparon con las protestas de los trabajadores; en ambos casos, sin embargo, una imponente presencia militar fue minando la resistencia sindical. En la provincia norteña de Tucumán existía un foco permanente de conflictos y agitación a causa de la bancarrota de los ingenios de azúcar; hacia allí se